



2024

Educación en Situaciones de Emergencia; Catástrofes y Refugiados



#OrviumEducation



EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; CATÁSTROFES Y REFUGIADOS

CENTER FOR EDUCATIONAL RESEARCH, LEARNING & INNOVATION

RESUMEN

Este artículo busca analizar la complejidad de brindar educación en situaciones adversas, contextos críticos, y traumas. Integrando aspectos de la psicología, la sociología, y la pedagogía, se estudian las consecuencias e implicaciones a corto, medio, y largo plazo para los individuos y las comunidades afectadas, incluyendo traumas, secuelas, y migración extrema.

Después, se busca comprender las estrategias utilizadas para la educación en entornos críticos, entendiendo el rol de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, y la comunidad educativa internacional al abordar las necesidades de los grupos afectados por situaciones de emergencia.

Finalmente, se discuten estrategias innovadoras que involucren nuevas tecnologías y políticas enfocadas en la resiliencia, con el objetivo de informar y guiar la formulación e implementación de prácticas efectivas en este ámbito crítico.



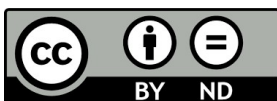
© CERLI, 2024

«Center for Educational Research, Learning & Innovation (CERLI) (2024). Educación en Situaciones de Emergencia; Catástrofes y Refugiados»

Publicado en THE ORVIUM EDUCATION JOURNAL

Educación en Situaciones de Emergencia; Catástrofes y Refugiados © 2024

de CERLI, está bajo una licencia CC BY-ND 4.0. Para consultar una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>.



Para obtener más información acerca de este informe, o cualquier otro publicado por CERLI, comunicarse a través del correo info@cerliorg.com, o con el Departamento de Educación edu@cerliorg.com

Tabla de Contenidos

Introducción 6

Situaciones de emergencia..... 9

Desplazamiento tras una situación de emergencia 14

Prejuicios hacia los refugiados 18

Ejemplos históricos 22

Conflictos bélicos 24

Invasión de Polonia (1939) 26

Genocidio ruandés (1994) 30

Crisis política y guerras civiles en Liberia (1980–2003) 36

Catástrofes naturales 43

Huracán Katrina en Estados Unidos (2005) 45

Terremoto en Haití (2010) 50

Tsunami/Terremoto de Tōhoku (2011) 60

Desplazamientos forzados y crisis migratorias 66

Gran hambruna irlandesa (1845 - 1852) 68

Crisis de refugiados venezolanos (2014 – act.) 74

Migración masiva marroquí (2021 – act.) 83

Sistemas educativos de emergencia..... 88

Educación para desplazados internos 94



Educación para refugiados	105
Consideraciones adicionales sobre recursos.....	113
Organizaciones aliadas	122
Epílogo	137
Bibliografía	139



Introducción

En educación, los contextos críticos son tan interesantes como aterradores, ya que permiten poner a prueba nuestras capacidades para adaptarnos, pero también implican algunas de las situaciones más terribles que puede sufrir un ser humano. Es habitual encontrar información acerca de los esfuerzos que se realizan para llevar adelante políticas educativas en contextos críticos, tales como pobreza extrema, dictadura, o dificultades asociadas a la delincuencia y el narcotráfico. No obstante, existe un contexto que, desde mi perspectiva, es mucho más difícil de trabajar y, tristemente, es cada vez más frecuente. Hablo de las crisis humanitarias en cuanto a conflictos bélicos y desastres naturales, llamadas situaciones de emergencia.

Gracias a vivir en la era de la información, la mayoría de los seres humanos estamos en sintonía con las noticias globales en tiempo real. Incluso quienes vivimos a miles de kilómetros del evento recibimos información casi instantánea sobre cuándo estalla un volcán, cuándo se produce un terremoto, cuándo se bombardea una ciudad, etc. Esto nos ha permitido empatizar con las comunidades afectadas de forma directa, incentivándonos a aportar nuestro grano de arena en tan terribles circunstancias. Ver este panorama tan sombrío nos hace preguntarnos cómo se reconstruye una sociedad en estas condiciones y cuál será el rol de la educación en esta reconstrucción.

A su vez, como somos seres políticos, también nos vemos obligados a pronunciarnos sobre el tema, exigiendo a nuestros gobernantes que intercedan ante los organismos internacionales y que brinden soluciones a los afectados, aun cuando la nación en cuestión no tenga ninguna motivación para hacerlo. Esto ha desencadenado un fenómeno migratorio masivo, donde las personas afectadas por pobreza extrema

se ven obligadas a abandonar su nación y refugiarse en otras donde sean recibidas. Sin entrar en los conflictos sociales que esto genera, se puede analizar otra arista: los centros educativos del país que reciben refugiados tendrán un gran desafío al integrarlos al sistema educativo nacional, y requerirán herramientas y desarrollo profesional de alto impacto para lograrlo.

Es crucial entender que las crisis humanitarias generan un impacto profundo y duradero en la educación de un país, así como en las personas que atraviesan el proceso de aprendizaje en él. Los afectados experimentan una interrupción abrupta y significativa en su educación, que daña tanto la estructura administrativa del país como el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes. Por otra parte, los docentes y las instituciones se enfrentan a una sobrecarga emocional y laboral por la necesidad de adaptarse rápidamente a las necesidades extremas de estos estudiantes. Todo esto, al unirse en un contexto de crisis, hace que el acceso a una educación de calidad para los refugiados sea un desafío titánico, dificultando durante años su reintegración a la sociedad.

En este artículo analizaremos casos reales donde ocurrieron u ocurren tragedias humanitarias, cómo se abordaron a nivel nacional, y cómo se integró a los refugiados en la educación. Junto con esto, plantearé iniciativas novedosas y tecnológicas sobre cómo podemos mejorar nuestras metodologías educativas en situaciones de emergencia, para que resulten más efectivas y útiles en el paradigma actual de la educación. Nuestro objetivo es identificar las prácticas que han resultado efectivas en el pasado y proporcionar recomendaciones para mejorar la educación en contextos de crisis, utilizando como aliados la tecnología y el desarrollo moderno.

Nuestro más profundo deseo es que las experiencias, lecciones y recomendaciones aquí presentadas sirvan de guía y apoyo a todos aquellos docentes, instituciones y gobiernos que, por desgracia, se vean obligados a enfrentar la ardua tarea de educar en medio de la adversidad que impone un contexto crítico y de emergencia humanitaria. Que encuentren en estas páginas no solo estrategias y

herramientas, sino también un reflejo de la esperanza y fortaleza humana que se impone cuando nos enfrentamos a una situación tan compleja. Y para todos aquellos que se encuentran atravesando este proceso, sepan que no están solos; todos estamos unidos para superar los desafíos y ofrecer la oportunidad de un futuro mejor.



Situaciones de emergencia

Antes de explicar cómo funcionan los sistemas educativos en casos de crisis humanitaria, debemos entender exactamente en qué consiste una situación de emergencia. Solemos definirla como una situación catastrófica que afecta a una cantidad significativa de personas y que requiere de un accionar inmediato para prevenir consecuencias aún mayores. En concreto, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) define una situación de emergencia como una crisis humanitaria o desastre que haya causado (o amenace con causar) nuevos desplazamientos forzados, pérdida de vidas u otros daños graves.

Estos eventos también pueden afectar significativamente los derechos o el bienestar de refugiados, desplazados internos, apátridas, retornados u otras personas con las que trabaja, a menos que se adopten medidas inmediatas y apropiadas. Para que se declare una emergencia, además, la crisis debe exigir medidas excepcionales debido a que las capacidades existentes del gobierno y de ACNUR resultan insuficientes para ofrecer una respuesta previsible y eficaz.

Las emergencias en contextos educativos a menudo surgen en escenarios de conflictos armados, donde la infraestructura escolar puede ser destruida, los docentes pueden ser desplazados o incluso asesinados, y los estudiantes pueden ser también desplazados o reclutados para la milicia. Junto con esto, las economías de guerra conllevan numerosos recortes en los distintos sectores de un país, lo que hace que los presupuestos no permitan mantener el funcionamiento normal de la educación. Por otro lado, una situación de emergencia

también puede ser el resultado de catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, y otros desastres climáticos.

Estos también interrumpen severamente el proceso educativo, ya que las instituciones pueden resultar gravemente dañadas o destruidas, y la necesidad de invertir capital en el rescate y la reconstrucción social también causa una pérdida de recursos en el sector educativo, volviéndolos casi inaccesibles. En casos como las inundaciones, los daños pueden incluir también la pérdida de material educativo físico como libros, equipamiento de laboratorio costoso, tecnología e infraestructura digital, etc. La rehabilitación y el reemplazo de estos materiales pueden tomar mucho tiempo, dependiendo de la magnitud del desastre, el costo total de las pérdidas, y la disponibilidad de recursos para su reconstrucción.

Finalmente, debemos considerar los movimientos de refugio y desplazamiento forzado. Los conflictos y los desastres pueden obligar a las personas a abandonar sus hogares, tanto dentro de su propio país como hacia otros territorios. La respuesta deberá atender sus necesidades de protección, alojamiento, alimentación, agua, salud, y continuidad educativa, según las características de cada situación.

El país que los recibe, si no tiene la estructura ni los recursos necesarios para afrontar su llegada, entra también en una situación de emergencia en la que se ve obligado a redistribuir los recursos disponibles para apoyar a los refugiados. En el caso de la educación, esto generalmente implica la necesidad de aumentar la infraestructura disponible, la adaptación de los currículos y lecciones a nuevas culturas y lenguas, y la colaboración de los docentes para prestar una atención especial a estos casos.

Cuando una situación de emergencia ocurre, existen dos casos principales: que haya sido detectada con suficiente antelación como para protegerse, o que haya estallado repentinamente y sin previo aviso. El primer tipo de situaciones, si se gestiona correctamente, suele permitir tomar medidas rápidas y contundentes que eliminen los riesgos de pérdidas de vidas humanas. Para garantizar que estemos

siempre en el umbral donde podemos detectar una crisis humanitaria futura, ACNUR tiene el siguiente protocolo.

Como mínimo, una vez al año deberá realizarse un análisis de riesgos general para determinar si puede surgir una nueva emergencia, o si puede intensificarse una preexistente. A partir de este informe, se asignará un nivel de riesgo (alto, moderado, bajo) a cada escenario potencial identificado. Este se basará exclusivamente en la probabilidad de que el suceso ocurra y en el posible impacto social que generaría. Si alguna de estas situaciones es catalogada como de riesgo “alto”, se deberá elaborar un plan de contingencia basado en escenarios potenciales. Este plan debe incluir una estrategia de respuesta, la cual será definida junto a su presupuesto, personal requerido, estructuras de coordinación necesarias, y los umbrales a partir de los cuales se activará el protocolo.

Cuando esto ocurre, los gobiernos involucrados en la crisis humanitaria se ven obligados a tomar decisiones contundentes y apresuradas denominadas “medidas de emergencia”. El principal desafío que presentan estas medidas es que, debido a la presión con la que se concibieron, no suelen ser planeadas con un enfoque que prevenga consecuencias secundarias o efectos colaterales, los cuales acaben siendo perjudiciales para los individuos afectados. Sin embargo, esto no es culpa de las naciones que las ejecutan, ya que una situación de emergencia es el equivalente a todos los problemas sociales posibles simultáneamente, sin dejar margen para la planificación, la investigación y la ejecución adecuada de estas soluciones.

Comencemos analizando el caso de la nación afectada. Las siguientes son medidas clásicas de emergencia tras una crisis humanitaria:

- Creación y gestión de campamentos temporales para alojar desplazados, junto con una campaña de distribución de alimentos, ropa y agua potable para prevenir muertes por hambruna, desnutrición, o temperaturas extremas.

- Despliegue de equipos médicos de emergencia para la atención de heridos, enfermos o personas que requieren medicación crónica. Para esto, se instalan hospitales militares de campaña y se dispone de los recursos de la milicia para el traslado de los damnificados.
- Implementación de toques de queda, patrullajes intensivos, y controles fronterizos. Esto se realiza con el objetivo de controlar el caos, liberando las calles y permitiendo que el personal de seguridad se dedique exclusivamente al traslado y la atención de los heridos. Además, esto evita que un grupo se aproveche de esta situación de vulnerabilidad para llevar adelante actos criminales impunemente.
- Coordinación con organizaciones internacionales, como la ONU, la Cruz Roja, y Médicos Sin Fronteras, y notificación a estas para recibir apoyo en forma de recursos financieros, alimentos, medicinas y personal médico.

Todos estos recursos requieren organización y seguimiento por parte del Estado, por lo que el protocolo general comienza por una evaluación inicial de daños. Aquí, un equipo de evaluación establece un monitoreo diario para recopilar información sobre el número de afectados, las necesidades prioritarias y los daños a la infraestructura. Estos informes se envían a un equipo de gestión que establece las necesidades inmediatas y mapea tanto los recursos disponibles como los requeridos. Con esta información, el Estado puede centralizar la coordinación en un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde el cual se organiza la estrategia para la distribución de los recursos, creando los almacenes, las tiendas de campaña, el transporte, y los sistemas de refrigeración para los medicamentos que la requieran.

Las autoridades también iniciarán las labores diplomáticas y las diligencias requeridas para informar a la comunidad internacional y para recibir eficientemente los recursos que aportarán las ONG y las naciones aliadas. En caso de requerirlo, utilizarán sus fondos disponibles y solicitarán donaciones a la comunidad internacional.

Asimismo, cuando corresponda, podrán recurrir a instrumentos de financiamiento de emergencia ofrecidos por instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con los requisitos y condiciones aplicables.

Iniciar cuanto antes el proceso de restauración y rehabilitación de la sociedad puede hacer una diferencia significativa en los efectos negativos de las medidas de emergencia a mediano y largo plazo, por lo que esta es una situación donde los gobiernos deben presentarse firmes, eficientes y transparentes.

Una crisis humanitaria puede provocar desplazamientos dentro de las fronteras nacionales o hacia otros países. Cuando las personas buscan protección internacional, los países receptores deben organizar una respuesta que atienda sus necesidades y respete los derechos que les correspondan. Como la recepción e integración de refugiados y solicitantes de asilo plantea desafíos complejos, repasaremos a continuación algunos de sus principales mecanismos de respuesta.

Desplazamiento tras una situación de emergencia

Al adentrarnos en la situación a la que quedan expuestos los desplazados, observamos que estos buscarán asilo en países limítrofes donde tengan mayores oportunidades de desempeñarse como ciudadanos. Estos países reciben un volumen de nuevos habitantes que habitualmente no están preparados para recibir y, por lo tanto, el gobierno debe ser cuidadoso a la hora de recibirlos y seguir los protocolos establecidos. Estos consisten, habitualmente, en la siguiente serie de pasos ordenados:

1. Ante una emergencia ocurrida, los países limítrofes establecerán centros de recepción y registro para los refugiados. Aquí se les proveerá alimento, agua, atención médica de emergencia, y refugio temporal. El objetivo, más allá de ayudar humanitariamente a los desplazados, es conocer la cantidad de personas que se espera recibir y poder hacerles un seguimiento cuando se encuentren en el territorio nacional.
2. Una vez hecho esto, la policía fronteriza y el departamento de inmigración se encargarán de evaluar y aprobar solicitudes de asilo por crisis humanitaria. Este proceso siempre ha recibido críticas, ya que este suele incluir entrevistas, verificación de antecedentes, y otros procesos de comprobación de identidad. La crítica surge de la poca empatía que se tiene con los refugiados al someterlos a esta clase de situaciones poco después de haber sido desplazados de su país natal. Sin embargo, esto es necesario para poder emitir

documentos legales de residencia temporal, sin violar los tratados internacionales.

3. Durante la tramitación de sus solicitudes y después de su resolución, las personas tendrán los derechos y servicios que les reconozcan la legislación nacional y el derecho internacional aplicable. El acceso a la educación, la atención sanitaria, y el trabajo puede estar sujeto a regímenes distintos, por lo que no debe suponerse que todos estos derechos comienzan únicamente con la aprobación del asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado tampoco equivale automáticamente a la ciudadanía; una eventual naturalización dependerá de la normativa del país receptor.
4. Habitualmente, se les suele asignar un refugio durante el tiempo que sea necesario hasta que logren estabilizarse. En caso de que los refugios no sean gratuitos, o que no se contemplen programas de integración social para refugiados, múltiples ONG y otras agencias internacionales podrían interceder para cubrir estas necesidades durante un plazo establecido.

Recibir e integrar refugiados exige una responsabilidad compartida entre las autoridades, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, y las comunidades receptoras. Cada actor cumple funciones distintas, pero ninguno puede sustituir por sí solo a los demás. Iniciativas como la campaña “I Welcome” de Amnistía Internacional muestran que la integración también se construye desde la sociedad: mediante acompañamiento, solidaridad, y participación comunitaria. Sin esa dimensión local, la acogida corre el riesgo de reducirse a una respuesta administrativa.

Apelar a la humanidad y la empatía de los ciudadanos es una estrategia que puede resultar útil y eficaz, especialmente a la hora de integrar a los desplazados a la sociedad. Según datos de ACNUR, a finales de 2023 había aproximadamente 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos y otros

acontecimientos que alteraron gravemente el orden público. Por otra parte, los desastres también generan nuevos desplazamientos, muchos de ellos dentro de las fronteras nacionales. Debemos distinguir estos movimientos registrados durante un periodo de la cantidad de personas que permanecen desplazadas en una fecha determinada.

La recepción de refugiados puede resultar positiva en varios aspectos. Uno de ellos es la riqueza y diversidad cultural que se obtiene tras una integración exitosa de los refugiados, ya que esto promueve la tolerancia, el entendimiento y el aprendizaje de los nativos, orientándolos hacia un modelo político basado en el respeto y las buenas costumbres. Por otra parte, el país también puede beneficiarse de la mano de obra extra en el mercado laboral y en el crecimiento económico, especialmente si el país posee una estructura demográfica desfavorable debido a la cantidad de habitantes y la edad laboral promedio, como Uruguay, Croacia, entre otros.

También podríamos considerar una ventaja la presencia de personas creativas e innovadoras entre los nuevos habitantes, los cuales podrían aprovechar los beneficios de una nación más próspera para emprender negocios y aportar a la creación de tejido empresarial que genere prestigio y empleo para la población local. Sin embargo, la llegada de refugiados también puede acarrear consecuencias de alto impacto si no ejecutamos este proceso de forma correcta e integral. Por ejemplo, sin un control del número total de desplazados hacia el territorio nacional, los servicios públicos y privados como salud, educación, infraestructura general, administraciones del Estado, comercios, tránsito, entre otros, podrían resultar sobrecargados.

También, en caso de que no se tenga el acompañamiento social apropiado, el choque cultural puede crear conflictos entre los refugiados y la población local por motivos políticos, sociales, y económicos. A esto se suma que establecer y mantener programas de apoyo a refugiados supone un costo significativo a corto plazo, que puede representar peligros en el caso de una economía pequeña o mal gestionada.

Pero supongamos que tenemos éxito y que logramos integrar adecuadamente a los refugiados en nuestro país. ¿Qué ocurrirá con ellos cuando la situación de emergencia en su país de origen acabe? Existen tres estados posemergencia principales:

1. En caso de así desearlo, los refugiados podrían retornar al país de origen, siempre que las condiciones lo permitan. Este proceso es denominado “repatriación”.
2. En caso de haberse adaptado a la cultura nacional, haber establecido su vida en el territorio, y haber logrado estabilidad conforme a la normativa vigente de nacionalidad legal, los refugiados podrían optar por convertirse en residentes y ciudadanos permanentes.
3. Por último, en caso de que las condiciones no permitan repatriar a los refugiados, y los mismos no deseen o no tengan permitido quedarse en el país receptor, se deberá negociar un reasentamiento en otro país, generalmente mediante diplomacia de las embajadas correspondientes.

El proceso de reconstrucción de una nación que sufrió una crisis humanitaria puede durar meses, años, décadas, o incluso nunca acabar. Un gran número de aquellas personas que son refugiadas tras una crisis acaban tomando la decisión de no regresar a su país de origen. Al formarse una nueva sociedad, esta adquiere riqueza cultural y tolerancia, lo que incrementa considerablemente factores clave en una sociedad moderna como el respeto, la inclusión, y la integración. Estos conceptos son la base del turismo, de la inversión y del desarrollo de una nación en la actualidad, por lo que debería ser de gran interés para los gobiernos actuar de la mejor manera posible.

A continuación, explicaremos un poco sobre la situación específica en la que suelen llegar los desplazados en los distintos tipos de situaciones de emergencia, y cómo se deberá abordar cada tipo de situación.

Prejuicios hacia los refugiados

Todos los potenciales beneficios de recibir refugiados son el resultado de una integración exitosa de los refugiados. Sin embargo, la consideración y el esfuerzo colectivo se vuelven importantes cuando tenemos en cuenta los prejuicios a los que habitualmente están sujetas aquellas personas que migran hacia el extranjero, incluso cuando su migración es consecuencia de una catástrofe y no del deseo particular de los desplazados de formar parte de una nueva nación. Hagamos un pequeño repaso sobre los prejuicios más comunes e intentemos revisar si podemos encontrar cierta veracidad en los mismos:

Prejuicio 1:

“Los refugiados son una carga económica negativa para el país y su desarrollo, ya que consumen más recursos que los que aportan. El dinero de los impuestos no debe ser utilizado para satisfacer las necesidades de aquellos que no aportan valor a la sociedad”

Inicialmente, los refugiados pueden requerir asistencia adicional y recursos que el Estado deberá proporcionarles. Sin embargo, la OCDE señala que, aunque la recepción e integración de refugiados implica costos públicos a corto plazo, una integración efectiva en el mercado laboral puede generar posteriormente beneficios económicos y fiscales para los países receptores. Estas cuestiones también se estudian en *“The Labor Market Effects of Refugee Waves: Reconciling Conflicting Results”*, de Clemens y Hunt (2019), y en *“Refugees Work: A Humanitarian Investment that Yields Economic Dividends”*, de Legrain (2016).

Prejuicio 2:

“Los refugiados no quieren trabajar ni integrarse a la sociedad. Prefieren mantener sus propias costumbres y culturas, mientras el Estado los cuida con nuestros recursos. Por lo tanto, no pagarán nunca su deuda económica y social, perjudicando a la ciudadanía nativa en el proceso”

El informe de la Comisión Europea *“Integration of refugees in Europe 2016”*, junto con documento de la OCDE de 2014 *“How can migrants’ skills be put to use? (Migration Policy Debates, n.º 3)”*, permite identificar barreras para la incorporación de refugiados y migrantes al mercado de trabajo. Entre las medidas pertinentes se encuentran el aprendizaje del idioma, la integración cultural, el reconocimiento de cualificaciones, y la formación e inserción laboral. Su eficacia depende de las condiciones del país receptor y de las necesidades de las personas destinatarias.

Una integración adecuada permite que los refugiados participen plenamente en la vida social, económica, y cultural del país receptor. Esa participación no solo beneficia a quienes llegan: puede ampliar la diversidad de capacidades, impulsar la actividad productiva, y enriquecer a la sociedad en su conjunto. Para que ese potencial se concrete, deben removerse las barreras lingüísticas, educativas, laborales, y culturales que impiden convertir la acogida en una integración efectiva.

Prejuicio 3:

“Los refugiados compiten deslealmente con los locales por los puestos laborales; mientras que ellos reciben ayudas, programas de inserción laboral y capacitación, los ciudadanos nativos deben competir sin ninguna ayuda, a pesar de pagar impuestos”

La llegada de refugiados puede generar presiones y competencia en determinados sectores durante el corto plazo. Sin embargo, la evidencia disponible indica que los efectos adversos sobre el empleo y los salarios

de los trabajadores nativos suelen ser limitados y temporales, especialmente cuando existen políticas adecuadas de integración laboral. A largo plazo, la incorporación de nuevos trabajadores, consumidores, y emprendedores puede ampliar la actividad económica y generar nuevas oportunidades de empleo.

Por no mencionar que, en los casos de migración masiva, la precarización laboral a la que se ven obligados a someterse es inmensa, por lo que acaban aceptando trabajos que los locales no desean realizar, por un salario inferior al que exigiría un nativo. Sumado a esto, debido a la importación de cerebros, es probable que algunos de estos migrantes decidan emprender y crear empresas que posteriormente podrán emplear a nativos y reducir las tasas de desempleo.

Existen múltiples estudios que respaldan esta realidad, como el informe *“The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges”*, del Fondo Monetario Internacional, y *“Immigration and American Jobs”*, de Zavodny. La evidencia revisada apunta en una dirección consistente: a largo plazo, cuando la integración laboral es adecuada, la incorporación de refugiados puede contribuir al crecimiento económico, fortalecer las finanzas públicas, y ampliar las oportunidades laborales, generando beneficios tanto para la población nativa como para la propia población refugiada.

Prejuicio 4:

“Los refugiados tienden a cometer más actos delictivos que los nativos. Ocupan los servicios que desinteresadamente les ofrecemos, y luego cometen crímenes y aberraciones contra la población local”

El prejuicio de “nativo bueno / migrante malo” solo demuestra nuestra incapacidad de ver más allá de aquello que experimentamos, ignorando la estadística. La cuestión no es si todos los refugiados son buenos, o si una amplia mayoría comete crímenes, sino que, afirmando dicho prejuicio, estamos realizando estadística sin tener información suficiente.

Quizá hemos visto múltiples veces a una persona no nacida en el país involucrada en actividades delictivas, y solo por ese motivo decidimos generalizar o incluso exagerar las cifras. También puede ocurrir que los medios de comunicación (intencionadamente o no) difundan mayormente noticias de esta índole, haciendo que la población acabe prestando mayor atención a los actos delictivos cometidos por migrantes sin darse cuenta.

Sin La evidencia revisada tampoco respalda la idea de que la presencia de refugiados e inmigrantes produzca por sí misma un aumento de la criminalidad. *“The Criminalization of Immigration in the United States”*, de Ewing, Martínez y Rumbaut (2015), cuestiona esa asociación en Estados Unidos. Kayaoglu (2022), en *“Do refugees cause crime?”*, llega a una conclusión convergente al estudiar a los refugiados sirios en Turquía. Los delitos individuales deben investigarse como tales, pero no pueden utilizarse para convertir a toda una población en amenaza.

Como podemos apreciar, los discursos que presentan a los refugiados como una carga inevitable o una amenaza no son descripciones neutrales: generalizan casos individuales, ignoran la evidencia, y pueden legitimar prácticas discriminatorias. Una política responsable debe reconocer los desafíos reales de la integración sin convertirlos en prejuicios contra quienes buscan protección.

Los estudios son claros y demuestran que los refugiados suelen tener más efectos positivos que negativos, siempre y cuando exista, de parte de la población local y el gobierno nacional, el interés en que se desarrollen como ciudadanos. Por lo tanto, se insta a estos últimos a formular políticas públicas basadas en datos empíricos, y no en percepciones sociales o estereotipos sin fundamento.

Ejemplos históricos

Para explicar en profundidad cuáles son las principales consecuencias y medidas educativas que suelen tomarse en caso de un conflicto, no basta con analizar teóricamente lo que podría ocurrir y los costos en los que se podría incurrir. En su lugar, resulta más interesante estudiar la historia tal y como sucedió, y extraer conclusiones generales que permitan dar una respuesta más contundente a estas preguntas.

En esta sección, hemos seleccionado ejemplos en distintas épocas de la historia reciente de la humanidad, con el objetivo de ilustrar con el mayor detalle posible el desarrollo que podría producirse si una de estas situaciones se presentara hoy en cualquier región del planeta. También hemos intentado dar contextos socioeconómicos diferentes, para no centrarnos únicamente en sociedades subdesarrolladas como las comunidades africanas.

Como criterio general, hemos priorizado situaciones de emergencia iniciadas antes de 2018, de forma que sus consecuencias a largo plazo puedan analizarse con cierta perspectiva temporal. No obstante, incorporamos posteriormente un caso iniciado después de ese año (la migración masiva marroquí de 2021) por su utilidad para analizar las características de una crisis migratoria reciente y todavía en desarrollo.

Emergencias sanitarias como la crisis del COVID-19, la gripe española, o la crisis del VIH/SIDA tampoco se tuvieron en cuenta para este informe, ya que las consecuencias del proceso de cuarentena, junto con las prohibiciones de movimiento internacional, hacen que, en la mayoría de los casos, no exista crisis de refugiados hasta que la misma ya haya decaído. Además, esta clase de crisis no implica costos asociados a la destrucción de infraestructura, repatriación, entre otros. De ser

necesario, se mencionarán sus efectos en la sociedad brevemente para brindar contexto.

Además de todo lo anterior, tomamos la decisión de no contar únicamente la catástrofe ocurrida y sus consecuencias; nos hemos tomado la libertad de ampliar el análisis más allá de la propia crisis, para contar la historia que llevó a dichas situaciones a tornarse aún más complejas. Es por este motivo que, en los ejemplos siguientes, no solo encontrarán una explicación de la crisis humanitaria que se vivió, sino también un resumen considerablemente amplio de la historia previa a la crisis, y la situación en la que cada región enfrentó dicha emergencia. De esta forma, es posible comprender, en mayor detalle, lo destructivo que puede ser una crisis humanitaria en ciertas condiciones políticas y económicas que favorecen la miseria.

No obstante, consideramos importante aclarar que este informe no busca posicionarse políticamente sobre los eventos descritos, pero sí contar la historia tal cual sucedió. En cada paso, se intentará fundamentar con estudios académicos si un evento fue positivo o negativo para el proceso de reconstrucción de la sociedad, independientemente de quién lo haya llevado adelante en ese punto histórico concreto.

La información detallada a continuación fue el resultado de la investigación exhaustiva de registros históricos y la colaboración de expertos que nos permitieron ilustrar la historia tal como sucedió. En nombre de CERLI, agradecemos a todos los asesores consultados por su tiempo, dedicación, y sus maravillosas explicaciones; sin sus aportes, esto no hubiera sido posible.

Conflictos bélicos

Un conflicto bélico, más comúnmente denominado “guerra”, es una de las situaciones de emergencia más comunes y devastadoras que puede sufrir una sociedad. Consiste en un enfrentamiento violento y armado entre dos o más grupos humanos numerosos, que generalmente deja como resultado daños materiales y pérdidas de vidas humanas a su paso.

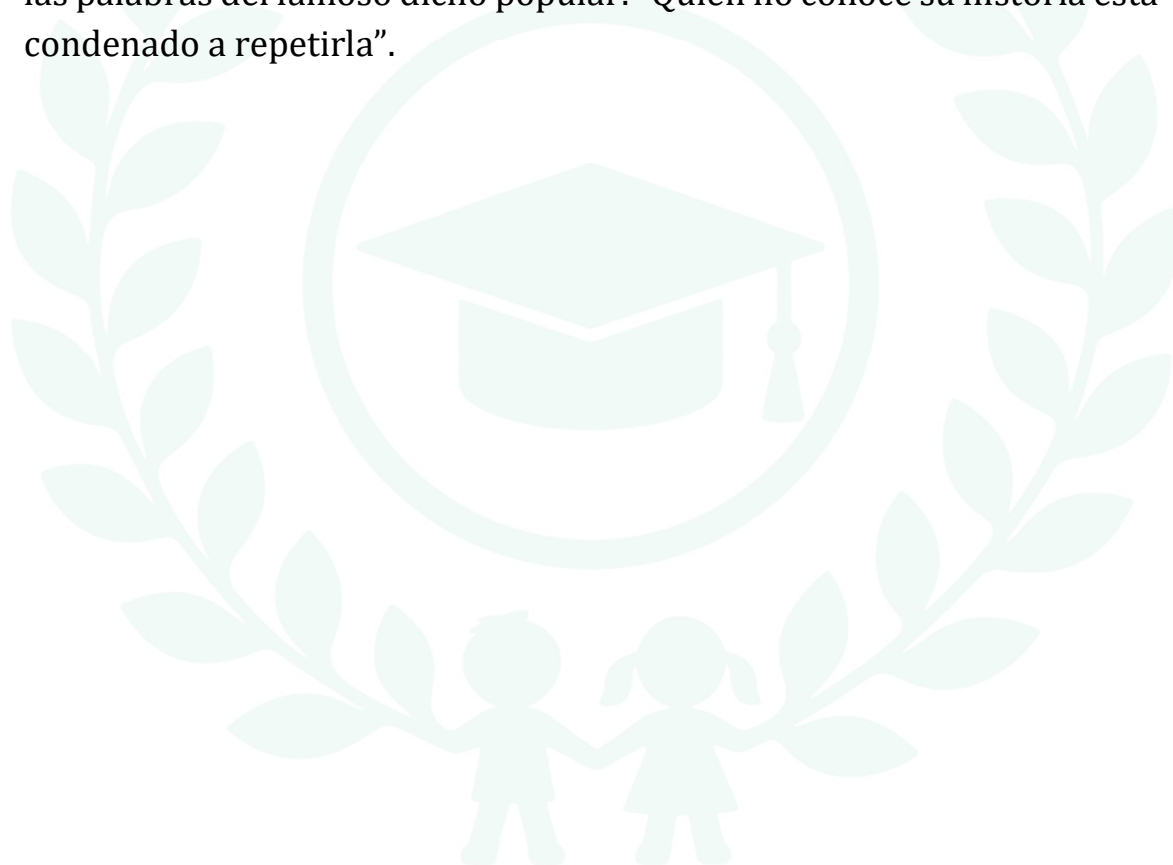
Aunque uno pensaría que una especie tan avanzada y civilizada como la humanidad debería haber superado ya una idea tan primitiva y animalística como esta, lo cierto es que, al cierre de este informe, el mundo registra más de un centenar de conflictos armados según los criterios del proyecto RULAC de la Geneva Academy. Estos conflictos siguen provocando graves crisis humanitarias en distintas regiones del planeta. Sus motivos son variados, yendo desde intereses territoriales y recursos naturales hasta diferencias étnicas y religiosas, pasando por luchas de poder político. Sin embargo, todos tienen en común la sanguinaria y devastadora crisis humanitaria que van dejando a su paso.

En esta sección, el objetivo será explorar tres eventos armados relativamente recientes, los cuales tienen causas subyacentes distintas. Estudiaremos cómo la historia de estos países y las dinámicas internacionales influyeron en su desarrollo y resolución. Esto nos llevará a discutir las consecuencias socioeconómicas y humanitarias de las guerras, que inevitablemente llevan al desplazamiento de pueblos enteros, a la destrucción de infraestructura, y a un impacto psicológico negativo en las comunidades arrastradas al conflicto.

En un mundo tan dinámico y tenso, los conflictos bélicos son la situación de emergencia más común de estos tres tipos, lo que hace que

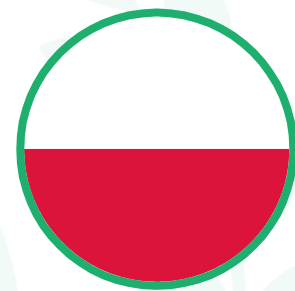
sean una preocupación latente en la sociedad. Por lo tanto, conocer en profundidad nuestra historia y antecedentes nos permite ver la luz al final del camino, entendiendo cómo hemos atravesado épocas mucho más oscuras y avanzado hacia una paz más duradera.

En este caso, hemos podido apreciar cómo los esfuerzos internacionales de reconciliación y diplomacia han ayudado a prevenir y resolver conflictos armados. Estos eventos destruyen vidas, desestabilizan naciones, y generan olas de problemas en los países vecinos, mas no alcanzaremos la paz sin antes aprender de los errores que nos han llevado a perderla en el pasado. En este caso, me remito a las palabras del famoso dicho popular: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.



Invasión de Polonia (1939)

Polonia es un país de Europa Central, que limita al oeste con Alemania; al sur con la República Checa y Eslovaquia; al este con Ucrania y Bielorrusia; al noreste con Lituania; y al norte con el enclave ruso de Kaliningrado y el mar Báltico. Posee una población de aproximadamente 38 millones de personas, en un territorio de aproximadamente 312.696 kilómetros cuadrados.



Su idioma oficial es el polaco, y su religión predominante es el catolicismo, siendo un país donde la Iglesia posee poder político y prestigio social. Su principal ingreso económico proviene de la manufactura y exportación de productos de la industria automotriz, electrónica, y de maquinaria industrial. También, en el último tiempo, ha ganado mucho prestigio turístico gracias a ciudades míticas como Cracovia, Varsovia, y Gdansk.

Como todo país europeo, tiene una historia extensa e interesante que llega hasta la prehistoria. Los orígenes históricos del Estado polaco suelen situarse en el siglo X, durante el gobierno del duque Mieszko I, cuyo bautismo en 966 constituye uno de los principales hitos en la formación del Estado. Mieszko I murió en 992, y su hijo Bolesław I Chrobry fue coronado en 1025 como primer rey de Polonia. Sin embargo, y aunque su historia es rica en detalles, con motivo de este informe hemos decidido saltar directamente al siglo XX, que es cuando se dio la serie de eventos desafortunados que culminaron en su invasión.

Algo importante a tener en cuenta sobre este país es que sus características geográficas han sido siempre una gran debilidad geopolítica. Sus fronteras con Rusia y Alemania, junto con lo llano de su topografía, vuelven a Polonia el lugar ideal para una guerra entre potencias armamentísticas.

Tras las particiones de finales del siglo XVIII, los territorios polacos quedaron repartidos principalmente entre Rusia, Prusia y la monarquía de los Habsburgo, posteriormente constituida como Imperio austríaco. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las Potencias Centrales y las fuerzas de la Entente se enfrentaron también en territorios pertenecientes al antiguo Reino de Polonia. En 1916, Alemania y Austria-Hungría firmaron un acta que prometía crear entre sus fronteras un reino independiente que quedaría bajo su protección, en un intento de conseguir el apoyo polaco en los últimos años de conflicto.

Sin embargo, con la derrota de las potencias centrales en 1918, Polonia encontró una oportunidad de proclamar su independencia de todos los imperios ocupantes debido a su débil condición. Tan solo un año después, el famoso “Tratado de Versalles” consolidó su independencia, y Polonia obtuvo territorios que previamente habían pertenecido a Alemania, Austria-Hungría y Rusia. También se aprobó la creación del “corredor polaco”, concediendo ciertos territorios estratégicos de los imperios derrotados para dar una salida al mar Báltico a Polonia y separar las fronteras de Alemania y Prusia Oriental.

Lo que parecía una gran victoria para el pueblo polaco en su segunda etapa como república independiente fue en realidad la semilla del resentimiento alemán que culminaría en su invasión. Cuando Adolf Hitler ascendió al poder en 1933, lo hizo mediante un discurso populista que giraba en torno a la recuperación del territorio que le fue arrebatado por el Tratado de Versalles. Hitler insistía en que un país como Alemania necesitaba espacio vital para la obtención de recursos naturales, y apuntaba a Polonia como un obstáculo geográfico en la recuperación económica de Alemania tras la Primera Guerra Mundial.

No obstante, cabe aclarar que los intereses de Hitler no necesariamente se alineaban con este discurso; él veía a Polonia como un obstáculo para su ambición expansionista, ya que su existencia como Estado independiente le bloqueaba cualquier plan de expansión hacia el este. Para evitar levantar sospechas sin tener antes el poder y los aliados para hacer frente a una invasión, Alemania y Polonia firmaron un pacto de no agresión en 1934.

Gracias a esta firma, las palabras de Hitler no se verían como una amenaza, sino más bien como un discurso populista que le permitiría afianzarse a la cabeza del poder germano. Nada más lejos de la realidad, sin embargo, ya que, en el año 1939, Hitler firmó un tratado de no agresión, denominado “Pacto Ribbentrop-Molotov”, con la Unión Soviética. Este acuerdo incluía una sección secreta que contenía un protocolo conjunto entre estos dos países, con el objetivo de dividir Polonia y otros países del este europeo en caso de conseguir controlarlos.

Fue así como, contra todo pronóstico, Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Comenzó con el bombardeo de la ciudad polaca de Wieluń, en conjunto con un ataque terrestre. Esta estrategia, denominada “Blitzkrieg”, fue una estrategia característica de Hitler que consistía en avanzar rápidamente por tierra y aire, dando muy poco margen de reacción a quienes se defendían. Los polacos se defendieron fervientemente; durante siete días consiguieron defender la península de Westerplatte.

Luego, intentaron un contraataque en Bzura, siendo derrotados por los alemanes. Sin embargo, cuando parecía que los polacos conseguirían defenderse por un tiempo indeterminado, el 17 de septiembre sufrieron una invasión por parte de la Unión Soviética. Este ataque no tuvo casi resistencia debido a la presión impuesta por la invasión alemana, lo que permitió que las fuerzas rusas se adentraran en el territorio polaco fácilmente. Los invasores, pese a los notables esfuerzos de los resistentes polacos, bombardearon y asediaron Varsovia (la capital) con una intensidad abrumadora hasta conseguir su rendición el 27 de septiembre de 1939.

Las consecuencias de este evento fueron devastadoras: para comenzar, la invasión de Polonia fue el evento que definió el comienzo del conflicto bélico más mortífero de la historia de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el poder obtenido por Hitler tras esta victoria le permitió iniciar sus planes genocidas que hoy recordamos como el vergonzoso «Holocausto».

Sin embargo, incluso sin adentrarnos en las consecuencias de este evento, podemos hacernos una idea de la situación de emergencia que generó tan solo con mirar sus números. La invasión de Polonia dejó entre 150 mil y 200 mil muertes civiles y más de 66 mil muertes militares en combate. Los heridos también se cuentan en números abrumadores: 133 mil soldados polacos heridos y cientos de miles de civiles que sufrieron daños debido al fuego cruzado, bombardeos, entre otros.

Las cifras de desplazamiento también son impresionantes: entre 1,5 y 2 millones de refugiados en países vecinos y entre 320 mil y un millón de deportados por la Unión Soviética. Aunque su recuperación se hizo esperar debido a la Segunda Guerra Mundial, solo hace falta mirar a Polonia hoy para darnos cuenta de que estos días oscuros son cosa del pasado y que ha sabido renacer de sus cenizas para ser, hoy, un país ejemplar.

Genocidio ruandés (1994)

Ruanda es un pequeño país del centro-este africano que limita al norte con Uganda, al este con Tanzania, al sur con Burundi, y al oeste con la República Democrática del Congo. Es uno de los países más interesantes de esta región del planeta, ya que posee una población de aproximadamente 12,6 millones de habitantes (mayormente jóvenes) distribuidos en tres grupos étnicos. Las estimaciones históricas más citadas sitúan a los hutus en torno al 85 % de la población, a los tutsis alrededor del 14 % y a los twa cerca del 1 %.



En cuanto a su religión y cultura, predomina el cristianismo, con un 49,5 % de católicos, un 39,4 % de protestantes, y un 4,5 % de musulmanes. No posee salida al mar y su paisaje es mayormente montañoso y ondulado, haciendo que esta nación se conozca como “la tierra de las mil colinas”. Su economía está fuertemente ligada al turismo, a la agricultura y a la minería, lo cual es un factor común entre los países de la región. Es un país culturalmente rico y diverso, con ideologías religiosas mayormente compartidas, y con un idioma nativo que los une fuertemente.

La historia de Ruanda incluye a las poblaciones hutu, tutsi, y twa. Sus relaciones sociales y políticas cambiaron a lo largo del tiempo, por lo que no conviene reducirlas a una secuencia simple de primeros habitantes y posteriores invasores. En distintas etapas, la agricultura, la ganadería, y el acceso al poder contribuyeron a la diferenciación social. Las

categorías hutu y tutsi no deben presentarse como razas biológicas separadas ni como grupos cuya posición social permaneció invariable durante toda la historia.

Con la llegada de la colonización, este equilibrio se rompió definitivamente. Los primeros en llegar a estas tierras fueron los alemanes en el año 1897, quienes establecieron una estructura de gobierno indirecta, utilizando a los tutsis como los jefes regionales. Esto se convirtió en la base del resentimiento de los hutus hacia los tutsis; dominaban una tierra que ellos habían ocupado primero, y además tenían un prestigio extra otorgado por los europeos, dificultando escalar en la sociedad y cimentando una jerarquía étnica marcada por el estigma y la superioridad ambigua.

Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, Alemania perdió sus posesiones coloniales en virtud del Tratado de Versalles. Los territorios de Ruanda y Burundi, entonces administrados conjuntamente como Ruanda-Urundi, quedaron bajo administración belga mediante un mandato de la Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mandato fue sustituido por un régimen de fideicomiso de las Naciones Unidas, manteniéndose Bélgica como potencia administradora.

Las autoridades coloniales belgas privilegiaron a sectores de la población tutsi mediante categorías raciales y una supuesta superioridad que formaban parte de la ideología colonial. Esta interpretación, asociada a la llamada hipótesis hamítica, no demostraba una ascendencia europea ni una superioridad biológica de los tutsis. La clasificación administrativa de la población contribuyó a reforzar jerarquías y desigualdades en el acceso a la educación, la administración, y el poder.

Estas diferencias adquirieron efectos concretos en las oportunidades de la población. Su explicación debe buscarse en las relaciones de poder y en las políticas coloniales, sin convertir las categorías raciales utilizadas entonces en hechos biológicos. Al comenzar la década de

1950, los movimientos nacionalistas fueron ganando fuerza en el continente africano.

Se creó el “Partido del Movimiento de Emancipación Hutu”, que fue una fuerza política que abogaba por los derechos de la población mayoritaria, oponiéndose al dominio y a la opresión de la minoría tutsi. Esto creó tensiones entre los ciudadanos, que culminaron en un movimiento revolucionario en 1959, donde los hutus se levantaron en armas contra los tutsis. Las víctimas tutsis se cuentan en miles, mientras que la amplia mayoría de los supervivientes huyeron a países vecinos buscando refugio.

El 1 de julio de 1962, Ruanda se declaró independiente bajo un gobierno hutu al mando de Grégoire Kayibanda. Este evento puso punto final a la supremacía tutsi y los tutsis comenzaron a ser perseguidos y discriminados por la población hutu. Grégoire fue presidente de Ruanda hasta 1973, cuando un hutu llamado Juvenal Habyarimana lideró un golpe de Estado que acabó derrocando al mandatario. Habyarimana estableció un régimen autoritario de partido único e implementó políticas de desarrollo económico con el objetivo de estabilizar al país, mejorar su infraestructura, sistema educativo, y situación financiera.

Sin embargo, a pesar del desarrollo recibido, los tutsis que aún permanecían en Ruanda eran víctimas de una discriminación extrema que les impedía acceder a la educación, empleos públicos, ayudas humanitarias, entre otros. Las tornas habían cambiado; lo que los hutus sufrieron durante la era colonial, ahora lo infligían a los tutsis, quienes crecieron alimentando su resentimiento tal como hicieron los hutus en su momento.

Estas tensiones se extendieron hacia los tutsis que se habían refugiado en el extranjero, y en 1987 los exiliados tutsis en Uganda fundaron el “Frente Patriótico Ruandés”, el cual era un grupo rebelde y revolucionario cuyo único objetivo era reunir fuerzas para regresar a Ruanda y acabar con la discriminación étnica por la fuerza. En 1990, este grupo inició la invasión, declarando una guerra civil contra el gobierno

de Juvénal Habyarimana, que alimentó el patriotismo de los hutus mediante propaganda anti-tutsi.

La guerra perduró hasta que el gobierno y los revolucionarios llevaron a cabo negociaciones de paz mediadas por la comunidad internacional. En 1993 se firmaron los Acuerdos de Arusha, donde la medida más interesante fue el establecimiento de un gobierno de transición, donde se incluirían representantes del grupo revolucionario FPR. Uno creería que ya presenciábamos lo peor de esta historia, y que, con la llegada de la paz, tendríamos una época de prosperidad y reconstrucción de la sociedad, que arrastraba tres años de guerra civil. Nada más alejado de la realidad, ya que llegamos a 1994, donde la población de Ruanda vivió uno de los eventos más horripilantes y oscuros de la historia de la humanidad.

El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado cuando se aproximaba a Kigali, causando la muerte de todos sus ocupantes. Existen dos posiciones distintas sobre quién estuvo detrás del atentado: por un lado, múltiples historiadores y analistas políticos sostienen que el avión fue derribado por el FPR, que utilizó el ataque como una estrategia para hacerse con el control total de Ruanda tras la caída del gobierno hutu. Al haberse derribado la república, un grupo que había reunido fuerzas y alianzas en el exterior no tendría dificultades para tomar el poder nuevamente.

No obstante, existe una teoría alternativa que sostiene que fueron los propios extremistas hutus quienes derribaron el avión, basada en que los grupos extremistas nunca apoyaron el proceso de negociación de paz que llevó adelante el gobierno. Alimentados por el odio transmitido por los medios de comunicación y el miedo a la implementación de los acuerdos pactados, derribaron el avión del mandatario para justificar un genocidio que, en realidad, ya habían planeado con anterioridad.

La realidad es que la autoría del atentado ha sido objeto de controversia y de distintas investigaciones, por lo que no resulta adecuado atribuirla de forma concluyente a una de las partes. En

cualquier caso, el derribo del avión actuó como detonante inmediato de una violencia genocida que había sido preparada previamente en un contexto de creciente radicalización.

En este punto de la historia resaltan dos medios de comunicación principales: la revista “Kangura”, y la emisora de radio “RTLM”. Esta última fue creada por extremistas hutus que describían a los tutsis como “enemigos y amenazas existenciales para la población hutu”, y que incitaban al genocidio de los denominados “inyenzi” (que se traduce como “cucarachas”). Ambos medios se dedicaron a difundir el odio hacia la población tutsi, así como también a proporcionar diariamente información específica sobre los nombres y ubicaciones de tutsis para que los grupos extremistas los asesinaran.

La revista Kangura, por su parte, jugó su papel en la incitación al genocidio mucho antes incluso del asesinato del mandatario hutu, tras publicar en 1990 un artículo denominado “Los Diez Mandamientos Hutus”, que contenía directrices agresivas que incitaban a la violencia contra los tutsis y contra todo hutu que los apoyara.

Tras el derribo del avión del mandatario, y alimentados por el odio transmitido por los medios de comunicación, los extremistas hutus junto con la milicia Interahamwe tomaron sus armas y, durante un periodo de aproximadamente cien días, asesinaron entre ochocientos mil y un millón de ciudadanos ruandeses, en su gran mayoría tutsis. No obstante, también están incluidos muchos hutus moderados que se oponían al genocidio o que intentaron dar protección y asilo a tutsis. Esta barbarie no se detuvo sino hasta julio de 1994, cuando las fuerzas del grupo FPR tomaron el control de la capital, derrocando al gobierno hutu. Esto detuvo definitivamente la masacre, aunque también dejó un país totalmente devastado, el cual sería difícil de reconstruir tanto simbólica como literalmente.

Tras el genocidio, Ruanda comenzó un proceso de reconstrucción bajo el liderazgo del FPR y su líder, Paul Kagame. En él, se buscó implementar políticas de reincorporación de los refugiados en el exterior, y se establecieron tribunales internacionales y nacionales para

procesar a los perpetradores del genocidio, buscando dar un cierre a los trágicos eventos vividos por la sociedad.

Más adelante en el informe, mencionaremos cuáles fueron las estrategias educativas que tuvieron que implementar tanto el gobierno ruandés como los países limítrofes que recibieron a sus refugiados. Intentaremos entender cuáles fueron los principales puntos positivos y negativos que nos legaron estos trágicos eventos en la historia de la humanidad, buscando aprender de ellos y utilizar las herramientas que nos vimos obligados a desarrollar, pero esta vez con mayor calma y raciocinio.

Pero esta historia nos recuerda como, incluso en tiempos modernos, la discriminación y los discursos de odio pueden influir en los ciudadanos, y acabar siendo causantes de actos barbáricos. No todas las amenazas están fuera de las fronteras, y es el deber de los ciudadanos aprender a vivir en sociedad, respetando como nos gustaría ser respetados.

Crisis política y guerras civiles en Liberia (1980–2003)

Liberia es un país de la costa occidental de África, que limita con Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil. Su población es de aproximadamente cinco millones de personas, con una amplia mayoría joven y un porcentaje elevado de menores de quince años. Su idioma oficial es el inglés, aunque existen más de veinte lenguas indígenas utilizadas. Algunos ejemplos son el kpelle, el bassa, el grebo, y el krah. Este país es culturalmente diverso, con muchas etnias y costumbres distintas según la región en particular en la que te encuentres.



El inglés actúa como vínculo entre tanta diversidad para que pueda existir una estructura social de gobierno, educación y trabajo, y la sociedad pueda sentir pertenencia sin importar dónde se encuentre dentro de Liberia. Sin embargo, la riqueza cultural de esta región oculta una sociedad lastimada y pobre que, a pesar de su lenta mejoría, aún no ha logrado un estándar de vida adecuado siquiera para un porcentaje elevado de su población.

Su historia es, cuando menos, interesante: Liberia fue fundada en 1822 por la “Sociedad de Colonización Americana” (ACS). Esta organización buscaba reubicar a los esclavos liberados y afroamericanos fuera de Estados Unidos, eligiendo Liberia como el destino predilecto. La razón de este movimiento se encontraba en relación con dos componentes principales: por un lado, se buscaba

otorgar un lugar seguro y deseable para los exesclavos, y así aliviar sus tensiones con los ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, esto solo era una muestra más del racismo de la época, obligándolos a emigrar para que los afroamericanos no formaran parte de la sociedad de los Estados Unidos. La primera colonia que establecieron se ubicó en la actual Monrovia, nombrada así en honor al presidente estadounidense James Monroe. Esta colonia americana pasó a estar compuesta por los llamados “américo-liberianos” y los nativos indígenas que ya poblaban la tierra.

Este proceso no fue sencillo, ya que los primeros colonos enfrentaron la falta de recursos e infraestructura, especialmente al momento de enfrentarse a enfermedades tropicales y a las poblaciones indígenas. Sin embargo, con la ayuda de los estadounidenses, lograron asentarse en el territorio y comenzar su proceso de desarrollo. Para la década de 1840, los américo-liberianos ya habían formado estructuras de gobierno autónomas, incluso desarrollando una constitución basada en la de los Estados Unidos. En 1847 se proclamó la República de Liberia, cuyo primer presidente fue Joseph Jenkins Roberts.

No obstante, asentar soberanía implica mucho más que simplemente proclamarla. Liberia tuvo complejas labores diplomáticas a la hora de que los demás reconocieran su independencia, especialmente las potencias coloniales europeas que la rodeaban y que tendían a incursionar en su territorio de forma no autorizada. De hecho, Estados Unidos no reconoció su independencia hasta la presidencia de Abraham Lincoln en 1862, aunque nunca hizo esfuerzos para reclamar dicho territorio.

En definitiva, Liberia había sido utilizada como herramienta para alejar a los afroamericanos no deseados, por lo que Estados Unidos tampoco tenía un interés particular en esta región. Donde sí encontraron fuerte resistencia fue entre las comunidades indígenas locales, quienes se oponían a reconocer a los américo-liberianos como dominantes, ya que ellos habían llegado primero. Los primeros establecieron un sistema social y político altamente excluyente, del que quedaron fuera las comunidades nativas. Esto hizo que se creara un

fuerte resentimiento de estas últimas hacia los colonos, a quienes comenzaron a ver como una plaga que solo las utilizaba para el desarrollo de la sociedad, pero sin permitirles formar parte de ella.

Esto fue así hasta casi mediados del siglo XX, cuando William V. S. Tubman asumió como presidente de Liberia. Su propuesta de gobierno implicaba políticas de unificación, con las que Tubman esperaba integrar a los pueblos indígenas a la vida social y económica del país. Sin embargo, las élites américo-liberianas aún sostenían demasiado poder y control, haciendo que estas medidas no fueran suficientes para incluirlos apropiadamente. Lo que sí consiguió su gobierno fue impulsar la inversión extranjera, haciendo crecer fuertemente la economía de Liberia, maximizando su potencial de desarrollo.

No obstante, debido al punto explicado anteriormente, este beneficio no fue equitativo y la sociedad permaneció fuertemente desigual. Su sucesor en la presidencia, William R. Tolbert Jr., intentó profundizar en estas medidas de inclusión y así mejorar las condiciones de vida para las comunidades indígenas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron socavados por la crisis económica mundial de los años setenta, que aumentó los precios y el desempleo a tasas extremadamente elevadas, y acentuó fuertemente la percepción de corrupción en el gobierno de Tolbert.

Aquí, creció fuertemente la oposición política, que realizó protestas masivas contra el gobierno en situaciones particulares como, por ejemplo, cuando se intentó subir el precio del arroz (un alimento básico de la ciudadanía liberiana) en 1979. Estas protestas son muy recordadas por los locales, ya que algunas de ellas recibieron una represión muy violenta.

El 12 de abril de 1980, el sargento mayor Samuel Kanyon Doe (un indígena de la etnia krah) lideró a un grupo de 17 soldados de las Fuerzas Armadas en un golpe de Estado contra el gobierno. Justificaron este ataque como una respuesta ante la incesante corrupción y opresión del oficialismo, prometiendo acabar con las desigualdades y mejorar las condiciones de vida. Fue así que este grupo irrumpió en la Mansión Ejecutiva, asesinando al presidente Tolbert Jr. en el proceso.

Tras este evento, Samuel Doe estableció el “Consejo de Redención del Pueblo” (PRC), que consistía en una asociación militar que tomó el control del gobierno, estableciendo la ley marcial. Para demostrar poder y seriedad, se ejecutó públicamente a varios altos funcionarios del gobierno de Tolbert, marcando el final de las élites américo-liberianas.

A pesar de todas las promesas de igualdad con las que se justificó el golpe de Estado, el gobierno de Doe se caracterizó por la represión, la corrupción y el elitismo. En realidad, lo único que hicieron fue torcer la balanza en favor de las etnias indígenas, especialmente de quienes pertenecían a las comunidades krahn. Esto causó un fuerte descontento tanto del resto de la población, que había apoyado el golpe en busca de la libertad, como de la comunidad internacional.

Uno de los eventos más recordados durante la presidencia de Doe fue la denominada “Masacre de los Estudiantes” de 1984. Durante el mes de agosto, estudiantes universitarios de la Universidad de Liberia (la cual se había vuelto un foco de activismo político y protestas) demandaron reformas políticas que acabaran con la corrupción. En una de estas oportunidades, el gobierno de Doe irrumpió violentamente en el campus universitario, abriendo fuego contra los alumnos, independientemente de si eran líderes de las protestas o simples estudiantes. Murieron decenas de ellos y cientos fueron heridos, por no hablar de los arrestos ilegítimos y desapariciones de muchos de ellos. Fue un evento vergonzoso que aún se recuerda como ejemplo de la brutalidad del régimen de Doe.

Este descontento generalizado, sumado a la represión del régimen, favoreció la aparición de movimientos armados. En diciembre de 1989, el Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL), dirigido por Charles Taylor, inició una insurgencia contra el gobierno de Samuel Doe, dando comienzo a la Primera Guerra Civil Liberiana. En 1990, Prince Yormie Johnson se separó del NPFL y formó el Frente Patriótico Nacional Independiente de Liberia (INPFL), cuyas fuerzas capturaron y asesinaron a Doe ese mismo año. Posteriormente, en 1991, antiguos partidarios de Doe formaron el Movimiento Unido de Liberación de Liberia para la Democracia (ULIMO).

La guerra duró hasta 1997 y culminó con la muerte de más de 200 mil personas (se discute que podrían alcanzar incluso los 250 mil), más de un millón de desplazados, y una devastación de la infraestructura social y arquitectónica del país. Para el fin de la guerra, fue necesaria la intervención de las fuerzas de paz de África occidental, conocidas como ECOMOG. Sus consecuencias fueron tan devastadoras que acabaron sumergiendo a los supervivientes en la extrema pobreza y hambruna.

Tras la guerra, el fundador del NPFL, Charles Taylor, ganó las elecciones presidenciales de 1997, instaurando un gobierno lleno de promesas que también resultaron vacías. La corrupción volvió a ser elevada, la represión y el autoritarismo nuevamente se hicieron presentes, y los grupos revolucionarios aliados del NPFL en la Primera Guerra Civil comenzaron nuevas rebeliones contra el gobierno de Taylor. Se instauró la Segunda Guerra Civil en 1999, cuando el “Movimiento de Liberación Unido de Liberia para la Democracia” (LURD, no confundir con ULIMO) lanzó ataques bélicos contra el gobierno al norte de Liberia, y posteriormente se unió al conflicto el grupo revolucionario “Movimiento por la Democracia en Liberia” (MODEL).

Esta guerra fue violenta y destructiva, caracterizándose por la enorme cantidad de atrocidades y crímenes cometidos por ambos bandos, tales como asesinatos, violaciones y saqueos. Los civiles solían quedar en medio del fuego cruzado, y ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar la orden de alto el fuego, lo que aumentó el número de bajas totales del conflicto.

En conjunto, los conflictos civiles que atravesaron Liberia entre 1989 y 2003 causaron aproximadamente 250.000 muertes, en su mayoría civiles, además de provocar desplazamientos masivos dentro y fuera del país y una destrucción profunda de su infraestructura. Los servicios y necesidades básicas de la población, como agua, alimento, atención médica y educación, no estaban disponibles, haciendo que la población cayera en la pobreza extrema. La sociedad estaba traumatizada por tanta muerte y destrucción en un periodo tan corto de su historia, haciendo que, incluso aquellos que salieron “ilesos” del conflicto,

sufrieran toda clase de trastornos de estrés postraumático y alteraciones del sueño.

A pesar de que la comunidad internacional intercedió para alcanzar un acuerdo de paz rápidamente, los esfuerzos de la ONU y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) no fueron suficientes. La conclusión era clara: ninguno de los bandos cedería hasta haber derrotado definitivamente al otro, ya que querían que la historia, a partir de ese momento, no volviera a repetirse.

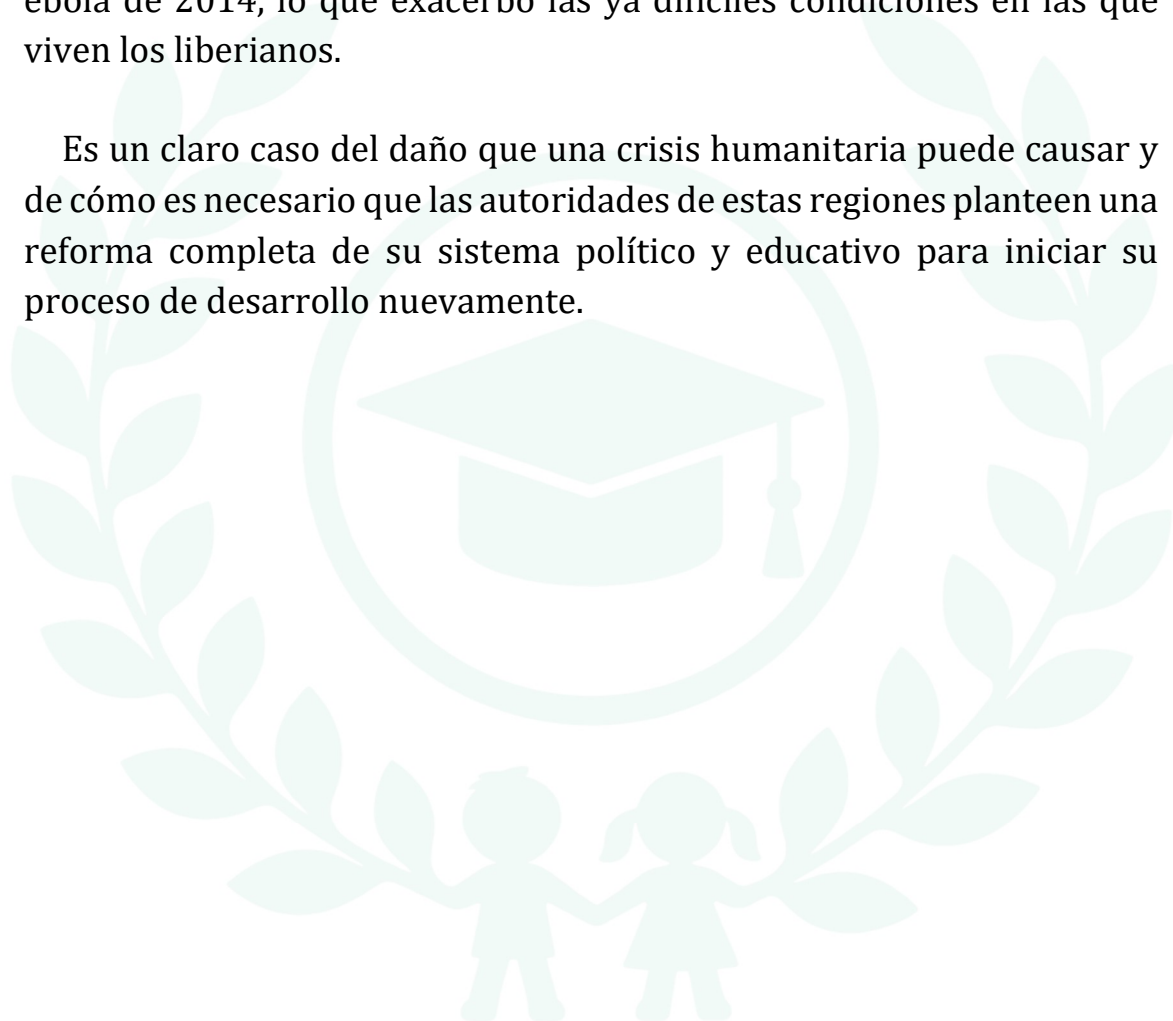
La guerra no culminó hasta 2003, cuando el presidente Taylor, presionado por el avance de los rebeldes y por el enojo de la comunidad internacional, renunció a la presidencia el 11 de agosto, exiliándose a Nigeria. Esto dio lugar a la negociación del fin del conflicto, ya que en ese mismo mes se firmó un acuerdo de paz entre los líderes de gobierno restantes, los grupos rebeldes, y otros actores políticos externos al conflicto como el Partido de la Unidad (UP), el Partido de Acción para la Libertad (LAP), y la propia Organización de las Naciones Unidas.

El pacto, denominado “Acuerdo de Paz Integral de Accra”, necesitó un terreno neutral para ser firmado, por lo que finalmente se eligió Ghana como sede para este evento. El acuerdo definía un gobierno de transición temporal hasta que la sociedad fuera restituida, para luego llamar a elecciones democráticas. Ante la inseguridad de que alguna de las partes incumpliera dicho acuerdo, la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (un equipo de Fuerzas de Paz de la ONU) fue asignada para supervisar su cumplimiento y brindar seguridad a los civiles durante la transición.

La misión también acabó ayudando con la reconstrucción política y de infraestructura que fue necesaria para estabilizar el país. Finalmente, en 2005, Ellen Johnson Sirleaf fue elegida presidenta, convirtiéndose en la primera mujer elegida democráticamente para la jefatura de Estado de un país africano. Tras cumplir dos mandatos, fue sucedida en enero de 2018 por el exfutbolista George Weah, quien había ganado las elecciones presidenciales de diciembre de 2017.

A pesar del avance en materia de política y desarrollo social, la tensión y la memoria del conflicto siguen vigentes en la sociedad, lo que ha causado que el país siga enfrentando grandes desafíos en política y desarrollo. Aunque Liberia ha conseguido mantener un gobierno democrático desde el fin de la guerra, los niveles de corrupción siguen siendo elevados, mientras el desarrollo económico y social sufre los daños de la falta de infraestructura. A esto hay que sumarle que el sistema de salud de Liberia sufrió un duro golpe debido a la crisis del ébola de 2014, lo que exacerbó las ya difíciles condiciones en las que viven los liberianos.

Es un claro caso del daño que una crisis humanitaria puede causar y de cómo es necesario que las autoridades de estas regiones planteen una reforma completa de su sistema político y educativo para iniciar su proceso de desarrollo nuevamente.



Catástrofes naturales

Las catástrofes naturales son eventos devastadores propios del mundo en el que vivimos y que, cuando se producen cerca de nuestras sociedades, son capaces de provocar un daño inconmensurable a nuestra infraestructura. Estos eventos violentos pueden herir a una parte importante de la población, obligarla a abandonar sus hogares, e incluso matar (directa o indirectamente) a otro porcentaje de la misma. En los últimos años, producto de la creciente urbanización que vivimos, los desastres naturales son cada vez más comunes y devastadores, haciendo que el desarrollo de sistemas de alerta temprana, medidas de protección, y protocolos de evacuación pueda hacer la diferencia entre la aniquilación completa de una sociedad y un evento histórico más en sus libros.

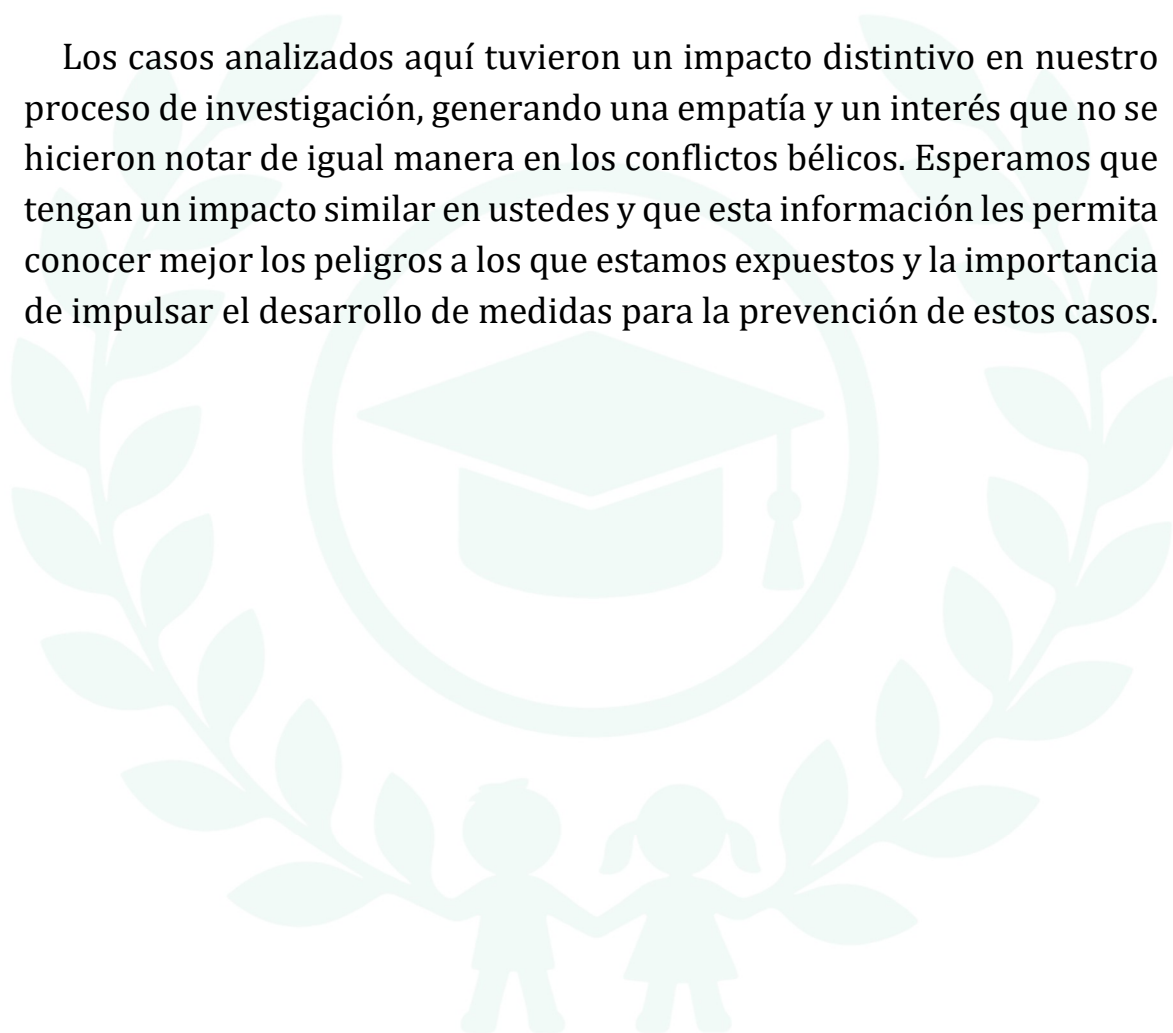
Esto se debe a que, contrario a lo que uno podría pensar, la destrucción inmediata es tan solo una pequeña porción del daño que estos eventos catastróficos pueden causar. Los efectos a largo plazo, como la interrupción de servicios básicos, la pérdida de infraestructura social, el desplazamiento masivo de personas, y la histeria colectiva presente entre los sobrevivientes, suelen tener impactos profundos y duraderos en las comunidades que tienen la desgracia de experimentarlos.

Esta clase de eventos violentos e imposibles de predecir suele tener un impacto psicológico igual o mayor que el de un conflicto bélico, lo que dota a las historias de catástrofes naturales de un misticismo y sentimiento profundo, haciendo que cualquiera de nosotros conecte

profundamente con las víctimas de un suceso tan alucinante pero destructivo.

Mediante estas historias, buscaremos analizar sus consecuencias, las lecciones que nos legaron, y las diferencias entre una catástrofe natural bien atendida y una mal atendida. Además, discutiremos la importancia de la planificación urbana con fines de resiliencia y la importancia de la colaboración internacional en la reducción del riesgo de desastres.

Los casos analizados aquí tuvieron un impacto distintivo en nuestro proceso de investigación, generando una empatía y un interés que no se hicieron notar de igual manera en los conflictos bélicos. Esperamos que tengan un impacto similar en ustedes y que esta información les permita conocer mejor los peligros a los que estamos expuestos y la importancia de impulsar el desarrollo de medidas para la prevención de estos casos.



Huracán Katrina en Estados Unidos (2005)

Estados Unidos es el Estado independiente moderno más antiguo del continente americano. Su extensa área de aproximadamente 9,8 millones de kilómetros cuadrados limita al norte con Canadá, al sur con México, y posee salidas tanto al océano Atlántico como al Pacífico, al este y al oeste, respectivamente.



Su población es de aproximadamente 331 millones de personas, lo que lo convierte en el tercer país más poblado del mundo, solo detrás de China e India. En cuanto a su diversidad, podemos estar frente al país más interesante posible: étnicamente, su población es de ascendencia europea, africana, asiática, latinoamericana, y nativa americana. Su asociación con el “sueño americano” hizo que, históricamente, Estados Unidos fuera un foco receptor de migración, lo que se puede apreciar en la infraestructura en las ciudades más importantes. El inglés es el idioma predominante en la administración, la educación y la vida pública, aunque el país cuenta con importantes comunidades que utilizan numerosos otros idiomas.

La historia de Estados Unidos es fabulosa: Tras la colonización europea de América, España, Francia, Gran Bretaña y otras potencias establecieron asentamientos y colonias en distintas regiones del territorio que hoy forma parte de Estados Unidos. En la costa atlántica se consolidaron trece colonias británicas que, durante el siglo XVIII,

crecerían considerablemente en población y actividad económica. Sin embargo, las tensiones entre los colonos y los británicos no se hicieron esperar; cuando Gran Bretaña entró en deuda tras la Guerra de los Siete Años, decidió imponer impuestos extra a las colonias como la “Ley del Timbre” y la “Ley del Té”.

Los colonos sentían que estaban siendo estafados, ya que la corona británica se aprovechaba de los recursos de las colonias, sin otorgarles ningún tipo de representación en el Parlamento. Gran Bretaña, en respuesta a esta resistencia, decidió implementar las “Leyes Intolerables”, las cuales fueron medidas punitivas que limitaban el desarrollo de las colonias como castigo. El ejemplo más famoso de estas leyes fue el cierre del puerto de Boston en 1774, quitándoles uno de los puntos clave del comercio colonial.

Como respuesta, los colonos formaron el Primer Congreso Continental para coordinar una respuesta ante estas leyes. Amparándose en el lema ya famoso de la época “No taxation without representation” (“No hay impuestos sin representación”), los colonos expresaban una opinión clara: o bien se nos otorga representación en el Parlamento, o bien iniciaremos un proyecto de independencia. En 1775, el Segundo Congreso Continental se reunió con el objetivo de gestionar las fuerzas militares coloniales y establecer una estrategia militar que les permitiera avanzar hacia su independencia de la corona británica.

En abril de ese mismo año, comenzó la guerra de independencia con las batallas de Lexington y Concord y, adentrados ya en el año 1776, el Congreso Continental designó una comisión para redactar una declaración formal de la independencia. Dicha comisión fue presidida por la conocida figura de Thomas Jefferson, quien fue el principal autor del documento que se aprobaría el 4 de julio de 1776, en el que las colonias se declaraban Estados libres e independientes de Gran Bretaña.

Sin embargo, y como hemos visto en los casos anteriores, una cosa es declararse independiente, y otra cosa es ser independiente. La guerra prosiguió durante varios años, y las colonias ahora libres buscaron el apoyo de otras fuerzas europeas. En 1778, Estados Unidos firmó una

alianza bélica con Francia, a la que posteriormente se sumarían España y los Países Bajos. Con tantas fuerzas contra la corona, lo inevitable ocurrió: el general británico Charles Cornwallis, tras recibir una derrota en la Batalla de Yorktown, declaró la rendición del ejército británico en 1781. A pesar de esto, no fue hasta la firma del Tratado de París en 1783 cuando la guerra culminó formalmente.

En 1787, las Trece Colonias (ahora formalmente conocidas como los Estados Unidos de América) redactaron su constitución, la cual se ratificó en 1788 con la promesa de añadir posteriormente una Carta de Derechos, y finalmente entró en vigor en 1789. Es en este punto donde se pudo establecer el primer gobierno estadounidense, de la mano de George Washington como presidente (elegido por unanimidad), Thomas Jefferson como secretario de Estado, y Alexander Hamilton como secretario del Tesoro. La historia de independencia estadounidense fue el inicio de las revoluciones coloniales que ocurrieron en todo el mundo, dando lugar a que las colonias europeas en América y África vieran dicha hazaña como un ejemplo de lo que ellas mismas podrían hacer si se organizaran de manera apropiada.

Sin embargo, y con motivo de la catástrofe natural que nos ocupa en este informe, vamos a saltarnos la rica historia contemporánea de los Estados Unidos de América y adentrarnos en los comienzos del siglo XXI. En 2001, George W. Bush asumió la presidencia de Estados Unidos. Durante ese mismo año, la economía estadounidense entró en una breve recesión, vinculada entre otros factores al final de la expansión tecnológica de los años noventa y al colapso de la burbuja de las empresas puntocom.

El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el atentado terrorista más doloroso en toda su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York y la declaración de guerra a los terroristas del grupo Al-Qaeda por parte del gobierno nacional. Estados Unidos inició una campaña militar en Afganistán contra Al-Qaeda y el régimen talibán que le proporcionaba refugio. En 2003, una coalición encabezada por Estados Unidos y Reino Unido invadió Irak en un conflicto distinto, justificado públicamente, entre

otros argumentos, por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y por consideraciones vinculadas a la seguridad internacional. Parte de la información utilizada para fundamentar estas afirmaciones sería posteriormente cuestionada o demostrada errónea.

Saltando al año 2004, una temporada de huracanes particularmente intensa sorprendió a Florida y otras áreas del Caribe. Algunos de ellos, como los huracanes Charley, Frances, Iván, y Jeanne, causaron daños significativos sobre el sudeste de los Estados Unidos. Sin embargo, la preparación de protocolos y la respuesta ante desastres naturales se encontraban a cargo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la cual, desde la reestructuración que recibió el Departamento de Seguridad Nacional en 2003, recibía múltiples críticas por no estar debidamente preparada para responder eficazmente a desastres de mayor escala. Los sistemas de diques y bombas del área de Nueva Orleans ya habían sido objeto de advertencias y proyectos de mejora, pero no se habían corregido todas las vulnerabilidades existentes, exponiéndolos a un posible desastre.

El 23 de agosto de 2005, se formó una depresión tropical en las Bahamas que rápidamente se fortaleció con el paso de los días. Para el 25 de agosto, tras tocar tierra en la península de Florida, ya se había convertido oficialmente en un huracán de categoría uno, adentrándose en el golfo de México. En este punto, el huracán se intensificó de formas impresionantes para alcanzar vientos de 280 km/h el 28 de agosto, catalogándose así como un huracán de categoría cinco en la escala Saffir-Simpson. Su tamaño era enorme: vientos de altísima velocidad que se extendían a más de 160 kilómetros de su centro, y vientos de fuerza tropical que se extendían hasta los 370 kilómetros.

El huracán Katrina causó graves daños en varios estados del sur de Estados Unidos. En Nueva Orleans, la marejada, el sobrepaso y las fallas de las defensas contra inundaciones provocaron la inundación de gran parte de la ciudad. Por ello, el mecanismo del desastre no puede explicarse únicamente por la acción directa del viento sobre los diques. El informe del National Hurricane Center, actualizado el 4 de enero de 2023, estimó 1.392 fallecimientos asociados a Katrina, considerando las

categorías de atribución directa, indirecta, e indeterminada. El desastre también dejó numerosas personas heridas y provocó desplazamientos masivos. Las dificultades para evacuar a la población y atender sus necesidades agravaron las consecuencias de la emergencia.

La destrucción fue extrema: cientos de miles de viviendas y elementos de infraestructura general quedaron destruidos o gravemente dañados, lo que supuso un costo superior a los 125 mil millones de dólares. Las terribles consecuencias del Huracán Katrina, junto con la ineficiencia mostrada por las autoridades competentes, dejaron en evidencia la necesidad de una reestructuración de las políticas de emergencia y la ineficiencia de la FEMA. Esta historia nos permite ver cómo, cuando se trata de una catástrofe de gran magnitud, ningún país, sin importar sus recursos, suele estar debidamente preparado para las consecuencias.

Esto evidencia la necesidad de hacer hincapié en aquellas regiones mucho menos desarrolladas, que probablemente no tengan siquiera un plan de acción moderno frente a un desastre inesperado.

Terremoto en Haití (2010)

Haití es un país del Caribe, perteneciente a la isla “La Española”, la cual comparte con su vecino, la República Dominicana. Tiene una población de aproximadamente 11,4 millones de personas, mayormente joven, la cual ha crecido constantemente en los últimos años. Sus idiomas oficiales son el francés y el criollo haitiano, que deriva del francés con influencias lingüísticas de lenguas africanas, del español, del portugués, del inglés, del taíno, entre otras.



Su cultura es rica en historia y artes, y su etnicidad es mayormente africana, con pequeñas minorías mestizas y europeas. Su economía está principalmente centrada en la agricultura, los textiles locales y el turismo, lo cual sugiere que no es una sociedad que se haya desarrollado considerablemente en este siglo. Sus características son típicas de un país africano, pero ubicado en el Caribe.

Su historia es muy interesante: los españoles llegaron a esta isla en 1492 con la colonización, por eso esta isla se llama “La Española”. Esta permaneció bajo su dominio hasta 1697, cuando se firmó el Tratado de Ryswick, que fue un acuerdo entre Francia y la coalición aliada (Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, y Países Bajos), el cual dio fin a la Guerra de los Nueve Años. Entre sus muchas resoluciones, el tratado reconocía la soberanía de Francia sobre la parte occidental de la isla La Española, que Francia había ocupado desde mediados del siglo XVII. Lo que hoy es Haití, en ese entonces, se convirtió

en una colonia francesa llamada “Saint-Domingue”, la cual, por su producción de azúcar, café, algodón y tabaco, se consideraba una de las colonias más ricas del mundo.

Sin embargo, esta “riqueza” estaba sostenida por la explotación inhumana de esclavos africanos, los cuales fueron traídos a la isla por Francia con el objetivo de trabajar la tierra. Estos vivían en la miseria absoluta, siendo explotados por una minoría blanca que, debido a que la esperanza de vida de un esclavo era de apenas unos años desde que se traía, compensaba la alta tasa de mortalidad mediante la importación de nuevos esclavos desde África. Existía una ínfima minoría de mulatos libres, aunque estos recibían discriminación absoluta. Esta situación (que ya hemos visto en otros países) no posee estabilidad alguna.

Con la llegada de la Revolución Francesa, las ideas de libertad e igualdad adquirieron una nueva dimensión política. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional francesa en agosto de 1789, proclamó principios de libertad e igualdad jurídica que también repercutieron en las tensiones sociales de Saint-Domingue. Estos principios alentaron las demandas de igualdad de derechos de las personas libres de color, mientras las profundas desigualdades de la sociedad colonial contribuían a aumentar la inestabilidad existente.

La tradición histórica haitiana sitúa en agosto de 1791 la ceremonia de Bois Caïman, asociada a figuras como Dutty Boukman y Cécile Fatiman y considerada uno de los antecedentes simbólicos de la revolución. Pocos días después, durante la noche del 22 al 23 de agosto, comenzó una insurrección masiva de personas esclavizadas en el norte de Saint-Domingue. La rebelión se extendió rápidamente por la región y dio inicio a un proceso revolucionario que culminaría con la independencia de Haití en 1804.

François-Dominique Toussaint Louverture nació esclavizado alrededor de 1743 en la plantación de Bréda y fue manumitido hacia 1776. Aprendió a leer y escribir y adquirió diversos conocimientos que posteriormente serían útiles durante su ascenso político y militar.

Louverture se incorporó a la insurrección de 1791 y fue adquiriendo progresivamente responsabilidades militares. Durante una primera etapa se alineó con España, que combatía contra la Francia revolucionaria en la isla. Sin embargo, después de que Francia decretara la abolición de la esclavitud en 1794, Louverture cambió de bando y se unió a las fuerzas de la República Francesa, combatiendo posteriormente contra españoles y británicos. Con el paso de los años consolidó su posición como una de las principales figuras políticas y militares de Saint-Domingue.

Iniciando el siglo XIX, François se proclamó gobernador vitalicio de la colonia bajo un régimen autoritario, imponiendo una constitución que abolía la esclavitud y garantizaba libertad e igualdad para todos los habitantes de Saint-Domingue. Sin embargo, sus esfuerzos duraron poco, y en 1802, Napoleón Bonaparte (quien tenía deseos de recuperar el control de la colonia y esclavizar a su población) envió un equipo militar al mando de su cuñado, con destino a la isla. Louverture fue capturado en junio de 1802 y deportado a Francia, donde fue encarcelado en el Fort de Joux, en el departamento de Doubs. Permaneció allí recluido durante varios meses en condiciones extremadamente duras y murió el 7 de abril de 1803.

Su historia inspiró al pueblo de Saint-Domingue a permanecer en la lucha. Liderados por Jean-Jacques Dessalines (un lugarteniente de Louverture), los locales derrotaron a las fuerzas francesas en noviembre de 1803 en la “Batalla de Vertières”, proclamando su independencia el 1 de enero de 1804. A partir de entonces, renombraron su tierra como “Haití” (nombre indígena de la isla anterior a la colonización), pasando a la historia como la primera república negra del mundo moderno y la segunda nación independiente de todo el continente americano (solo después de Estados Unidos).

Se podría decir que Haití fue la semilla americana que sembró el miedo de las potencias europeas frente a la posibilidad de una rebelión, y que fue el antecedente histórico de todos los enfrentamientos por la independencia que ocurrieron posteriormente. No obstante, no todo fue color de rosas para Haití. A pesar de su éxito aplastante en el campo de

batalla, de su independencia, y del control impuesto por su nuevo emperador Jean-Jacques Dessalines (quien adoptó el nombre de Jacques I), el país comenzó a vivir las primeras disputas nacionales e internacionales que sufre una colonia que se independiza.

Para inspirar confianza en la seguridad de su independencia, el emperador ordenó masacrar a los colonos franceses que permanecían en Haití, asesinando a miles de ellos. Si bien esto fue recibido negativamente por la comunidad internacional, fue visto localmente como un mal necesario para consolidar la intención del país de permanecer independiente y así garantizar que Francia no intentaría recobrar por la fuerza el territorio.

En cuanto al gobierno, Jacques I intentó encaminar el desarrollo del país aprovechando su temprana independencia. Lamentablemente para su gobierno, las naciones independientes de ese entonces no estaban dispuestas a reconocer como independiente a un Estado gobernado por exesclavos, ya que esto podría inspirar a otras colonias a hacer lo mismo. Por lo tanto, Haití sufrió una discriminación diplomática y económica que, a pesar de su temprana independencia y su potencial, le impidió comenzar un proceso de desarrollo.

Los bajos resultados del gobierno del emperador, junto con antiguas tensiones raciales que aún se sostenían, hicieron que hubiera un descontento y una oposición interna contra el líder. Tal fue el caso que, el 17 de octubre de 1806, Jacques I fue asesinado en un complot que involucró a sus propios oficiales de alto rango, Alexandre Pétion y Henri Christophe. Este evento fue importante para la historia de Haití, ya que fue el detonador de una guerra civil. Tras su muerte, el país quedó dividido entre una república en el sur, encabezada por Alexandre Pétion, y un Estado en el norte, dirigido por Henri Christophe. Este último se convirtió en reino en 1811.

Henri Christophe, quien tenía ideales más autoritarios y militares, instauró una monarquía y un sistema feudal en el Reino del Norte, proclamándose a sí mismo como rey. Su Estado se basaba en obligar a los campesinos a trabajar en las plantaciones y en la construcción, con

el objetivo de que esta disciplina les permitiera acelerar el desarrollo del país y de la infraestructura de su Estado y crecer exponencialmente en comparación con su contraparte.

Por otro lado, Alexandre Pétion era más bien republicano, con ideas políticas más liberales que las del Reino del Norte. Se nombró presidente y estableció un sistema de distribución de tierras entre los soldados y los campesinos en la República del Sur, promoviendo la educación y el desarrollo de su tierra mediante una participación política de la ciudadanía. Ninguno de estos modelos dio frutos; Pétion enfrentó los desafíos relacionados con la falta de recursos y fuerza laboral, pero murió en 1818 por la fiebre amarilla. Christophe, por otra parte, se suicidó en 1820 debido a las presiones sufridas por la oposición, que fueron la respuesta a su gobierno autoritario y militar.

Aquí la historia de Haití tomó un rumbo muy interesante: tras la muerte de ambos gobernantes, el señor Jean-Pierre Boyer (quien ocupó el lugar de Pétion tras su muerte) logró reunificar al país en un solo Estado, en el cual se declaró presidente. No contento con eso, en 1822 Boyer decidió implementar una serie de reformas de estabilización que incluyeron tomar el control de la parte oriental de la isla, unificando toda La Española bajo control haitiano. Por impresionante que esto pueda sonar, la excolonia francesa no había logrado solucionar uno de sus problemas más importantes de cara a iniciar su desarrollo: integrarse al mundo.

Boyer se dio cuenta de que, sin el apoyo de las demás naciones independientes, Haití jamás conseguiría volverse una economía próspera. En 1825, su gobierno debió pagarle a Francia una indemnización económica, con la condición de que Francia reconociera formalmente su independencia. Esta decisión, que a priori puede parecer estratégica, condenó a Haití a una deuda que destruyó su potencial crecimiento económico durante décadas, retrasando aún más su proceso de formación como nación independiente.

A esto se le suma la independencia de la República Dominicana en 1844, que relegó a Haití a su antiguo territorio en el lado occidental de

la isla. En definitiva, el siglo XIX significó para Haití una serie de gobiernos inestables, golpes de Estado, crisis económica por su deuda con Francia, entre otros, dejando todo servido para el golpe final que llegaría con el siglo XX. En 1915, Estados Unidos invadió y ocupó Haití con el pretexto de estabilizar el país y proteger sus intereses. La ocupación estadounidense, que duró hasta 1934, tuvo grandes consecuencias en su futuro desarrollo político, aunque fue útil para la construcción de infraestructura compleja que no hubiera sido posible en otras condiciones.

En 1957, François Duvalier tomó el poder y estableció una dictadura brutal que continuó bajo el mando de su hijo, Jean-Claude Duvalier, hasta 1986. Tras la caída de los Duvalier, Haití experimentó una serie de gobiernos civiles y militares. En 1990, Jean-Bertrand Aristide fue elegido democráticamente, pero fue depuesto en un golpe de Estado en 1991, aunque luego fue restituido en 1994 mediante una nueva intervención de Estados Unidos. Como pueden observar en este breve resumen del siglo XX de Haití, su desarrollo como nación siempre fue interrumpido por gobiernos militares, autoritarismo, e intervenciones u ocupaciones de países externos, impidiendo que Haití se convirtiera en una nación en vías de desarrollo y haciendo que permaneciera siempre en la miseria.

En estas condiciones llegó Haití al siglo XXI, cuando se añadieron los últimos ingredientes para los desastres naturales que viviría, uno de los cuales da título a esta parte del informe. Jean-Bertrand Aristide, el presidente restituido por los Estados Unidos, fue elegido nuevamente en las elecciones de 2000, pero abandonó el país en 2004 en medio de una grave crisis política y un conflicto armado. En ese contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) el 30 de abril de 2004.

Esta misión tenía el objetivo de restablecer el orden y apoyar el proceso de desarrollo político, brindando seguridad para las elecciones y paz ante posibles contingencias como un nuevo golpe de Estado. La presencia de la MINUSTAH ayudó a estabilizar temporalmente el país,

pero los haitianos consideraron esta intromisión como abusiva y poco ética, denunciando que las fuerzas internacionales oprimían de forma desmedida a los locales.

Es aquí cuando toda esta inestabilidad y falta de desarrollo muestran su cara más destructiva. En septiembre de 2004, Haití recibió el impacto de una tormenta tropical poderosa, que escaló rápidamente hasta convertirse en el Huracán Jeanne. Hay que destacar que, además de la falta de infraestructura, la topografía y la ubicación geográfica de Haití son factores extremadamente importantes a tener en cuenta, ya que estos factores propician catástrofes naturales con mayor frecuencia que en otras regiones. En el caso del Huracán Jeanne, a pesar de que este no alcanzó a tocar tierra haitiana, las intensas lluvias que provocó hicieron que las comunidades del noroeste del país sufrieran enormes inundaciones y deslizamientos de tierra, destruyendo la poca infraestructura existente en el país.

Aproximadamente 3000 personas murieron en estas inundaciones, y muchos miles más fueron desplazados debido a la destrucción total de sus hogares y comunidades. Por mucha ayuda que recibió de la comunidad internacional, la falta de infraestructura adecuada para esta clase de situaciones, unida al bajo nivel de eficiencia gubernamental, hizo que estos esfuerzos no fueran suficientes para responder a los daños.

Contrario a lo que se podría pensar, los efectos del huracán no fueron una advertencia suficiente para los gobiernos del país; desatender estas advertencias es una decisión que, históricamente, a menudo acaba costando muchas vidas humanas. Este fue el caso cuando llegó la peor catástrofe de la historia de este país, y de la historia reciente. El 12 de enero de 2010, a las 16:53 horas, un poderoso terremoto de magnitud de momento (Mw) 7,0, con epicentro en las proximidades de Léogâne, al oeste de Puerto Príncipe, sacudió Haití.

El terremoto produjo una catástrofe humana de una magnitud comparable, en sus efectos sociales y materiales, con la de un conflicto armado. Las estimaciones oficiales haitianas evolucionaron desde unas

230.000 muertes en 2010 hasta 316.000 en una revisión posterior; ambas cifras han sido discutidas, por lo que deben leerse como un rango estimativo y no como un recuento definitivo. También se informaron más de 300.000 heridos y alrededor de 1,5 millones de personas desplazadas. Escuelas, hospitales, edificios gubernamentales, y viviendas quedaron gravemente dañados o destruidos, lo que redujo precisamente las capacidades institucionales necesarias para responder.

Las consecuencias que esto significó para un Haití débil y poco desarrollado fueron peores incluso que las consecuencias de un conflicto bélico local en un país desarrollado. Un número inmenso de desplazados debió vivir en campamentos improvisados, que no tenían acceso a alimentos ni a agua potable, lo que creó una segunda crisis humanitaria debido a la hambruna y la deshidratación. La falta de servicios médicos de emergencia causó que un gran número de heridos que podrían haberse salvado acabaran muriendo. La comunidad internacional movilizó ayudas humanitarias como equipos de rescate, suministros médicos, alimentos, agua, donaciones, incluso fuerzas armadas.

La respuesta humanitaria enfrentó importantes dificultades de coordinación y distribución de la ayuda. En octubre de 2010 comenzó, además, una epidemia de cólera. La investigación de Piarroux y colaboradores (2011) vinculó su inicio con la contaminación del río Artibonite y de uno de sus afluentes aguas abajo de un campamento de la MINUSTAH, y documentó deficiencias de saneamiento en Meille. En diciembre de 2016, el secretario general de las Naciones Unidas pidió disculpas al pueblo haitiano por el papel de la organización en la epidemia y por su respuesta insuficiente.

Hoy en día, catorce años después de la catástrofe, sus consecuencias aún son notables y devastadoras. Haití es el país más pobre de Occidente, y su situación posterior al terremoto parece empeorar con cada nuevo desastre que sufre. Su infraestructura nunca logró recuperarse, ya que el proceso de reconstrucción ha resultado lento y

precario, y los costos de desarrollo no son asumibles con su frágil economía.

La mayor parte de los haitianos siguen viviendo en condiciones precarias, y el acceso a recursos y servicios como agua potable, alimentos, y atención sanitaria es un lujo que no pueden permitirse. Como resultado, la inseguridad y la violencia han tomado el control de estas tierras, con grupos pandilleros armados que controlan amplias zonas del país, especialmente en su capital. Esta situación causó que fuentes vitales de ingresos en la actualidad (como el turismo) no pudieran desarrollarse en Haití.

En cuanto a su sistema político, la inestabilidad sigue siendo la norma en esta tierra. El 7 de julio de 2021, el entonces presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada durante la madrugada, y su esposa, Martine Moïse, quedó gravemente herida. El ataque fue perpetrado por un grupo de al menos 28 hombres mercenarios extranjeros, que se cree que tienen vínculos con el crimen organizado. La comunidad internacional intentó ayudar con la investigación, mas la relación de los mercenarios con individuos y organizaciones extranjeras ha obstruido la vía judicial.

El asesinato de Moïse exacerbó la crisis política en Haití, ya que dejó un vacío de poder en un país ya profundamente dividido y sin un parlamento funcional. El primer ministro interino, Claude Joseph, asumió temporalmente el control del gobierno, lo que provocó tensiones con quien habría sido nombrado primer ministro por Moïse poco antes de su muerte, Ariel Henry.

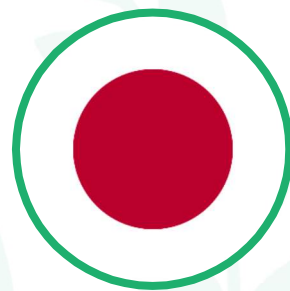
Posteriormente, en agosto de ese mismo año, un nuevo terremoto azotó la región sur de Haití, causando aún más destrucción y pérdida de vidas humanas. Este país es un claro ejemplo de una república fallida, la cual vuelve a ser derrumbada cada vez que se la intenta reconstruir. Las crisis humanitarias que ha sufrido, y las muchas más que le sucederán, son la consecuencia directa de su débil estructura social, la cual ya no puede recuperarse sin una intervención (cosa que la historia tampoco recomienda).

Este es un caso donde la reconstrucción educativa y social podría ser difícil, haciendo que este estudio, incluso de conseguir estabilizar este país, quizá nunca pueda aplicarse. El tiempo dirá si la suerte bendice a Haití, la segunda y más fallida república independiente del continente americano.



Tsunami/Terremoto de Tōhoku (2011)

Tōhoku (antiguamente llamada Michinoku) es una región situada en la parte noreste de la isla de Honshū, Japón. Comprende seis prefecturas japonesas llamadas Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, y la más famosa, Fukushima. Se caracteriza principalmente por su paisaje montañoso y su extensa costa, con salidas al océano Pacífico al este y al mar de Japón al oeste.



Tōhoku fue una de las últimas regiones en ser incorporadas al control del gobierno japonés debido a un gran conjunto de motivaciones políticas, culturales, e incluso geográficas, lo que hizo compleja su integración al resto del país, entorpeciendo su desarrollo. En la actualidad, esta región en concreto tiene más de 9 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente un 7 % del total del país.

Su historia, al igual que la de todo Japón, se remonta hasta tiempos prehistóricos. En concreto, se tienen registros arqueológicos de la cultura Jomon (comunidades prehistóricas, cazadoras y recolectoras) que datan de hace más de diez mil años. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, la historia del Japón antiguo no resulta relevante para este artículo. Por lo tanto, solo mencionaremos que fue una de las regiones que más se opuso a incorporarse al Estado centralizado japonés durante el periodo Yamato (250-710 d. C.), lo que hizo que su integración y desarrollo completo se retrasaran hasta el periodo Nara (710-794 d. C.). Esto nos servirá como antecedente histórico,

especialmente cuando notemos que, a pesar de ser una región importante, nunca recibió el desarrollo y atención de los que se benefició el resto del país.

Con la llegada de la modernización, Japón recuperó el poder imperial centralizado que se había perdido durante el feudalismo, comenzando una era de avances y desarrollo nunca antes vista. La Restauración Meiji comenzó en 1868 y dio inicio a la era Meiji (1868–1912), durante la cual Japón avanzó desde un orden feudal hacia la construcción de un Estado moderno y centralizado. Este proceso afectó profundamente a todo el país y encontró distintas formas de resistencia y adaptación en Tōhoku. Antes de la Restauración Meiji, esta región estaba dividida en diversos dominios feudales y su economía era predominantemente agrícola, con una importante producción de arroz y otros cultivos.

Aunque existían ciertas industrias como la minería, Tōhoku estaba considerablemente menos desarrollada que las regiones urbanas. Con la llegada del gobierno Meiji, estos dominios feudales se abolieron, dando lugar a un avance de la industria y el desarrollo moderno en todo Japón, lo que acentuó las desigualdades en la región de Tōhoku, ya que esta no recibió el mismo impulso ni las mismas oportunidades que aquellas regiones que se desprendieron del feudalismo más rápidamente.

Tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a que esta región no fue foco de conflicto (aunque sí recibió bombardeos), sus bajas fueron considerablemente inferiores a las causadas en centros neurálgicos como Tokio, Osaka y Nagoya. Sin embargo, la destrucción causada en todo el país interrumpió fuertemente la economía local, afectando particularmente a estas zonas subdesarrolladas que dependen íntegramente del comercio y el racionamiento entre regiones. Esto provocó una gran escasez de alimentos y recursos esenciales, causando que los locales enfrentaran hambrunas y baja productividad en sus sectores económicos.

Cuando la guerra acabó, las políticas de reconstrucción en Japón se orientaron hacia la reparación y reinstauración de las infraestructuras

destruidas, para recuperar esa conectividad entre regiones que se había perdido. Con el apoyo de Estados Unidos y su famoso “Plan Dodge”, Japón pudo rápidamente estabilizar su economía y su infraestructura, brindando apoyo a regiones como Tōhoku mediante reformas agrarias que aumentaron rápidamente la producción agrícola y mejoraron las condiciones de vida de los campesinos.

Sin embargo, por beneficioso que esto pueda sonar, no hay que olvidar que ya existía una diferencia previa considerable entre el desarrollo de Tōhoku y el del resto del Japón urbanizado y moderno. Por mucho que estos avances permitieran crear mejor infraestructura y diversificar la economía, esta región seguía siendo inferior al estándar japonés en términos de desarrollo. Esta brecha de desarrollo, presente también en regiones periféricas de otros países desarrollados, puede perpetuarse mediante dinámicas demográficas adversas: al existir menos oportunidades laborales y académicas, parte de la población joven migra hacia las grandes ciudades.

En el corto plazo, esto desemboca en un envejecimiento poblacional importante que, a largo plazo, causará una baja sustancial en la capacidad productiva. Esto aumenta aún más la brecha entre la urbanización y la zona subdesarrollada, resultando una carga para las regiones productivas.

Todo esto se une para crear el cóctel perfecto para el desastre, similar al que hemos visto en todos los ejemplos anteriores: una sociedad con baja calidad de vida (en comparación con el estándar japonés, por supuesto), una población con poca capacidad productiva debido al escaso desarrollo y a la escasa industrialización, una infraestructura débil y que depende mayormente del aporte ajeno para mantenerse, y una población joven que prefiere probar su suerte en las ciudades más importantes antes que vivir en una región de inferior desarrollo en la que no tendrá muchas oportunidades. Es en estas condiciones que, ya en el siglo XXI, Tōhoku vivió uno de los eventos más destructivos jamás vistos en la historia humana.

El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 horas, un poderosísimo terremoto azotó las costas de la península de Oshika durante seis minutos. Su magnitud se determinó como 9,1 en la escala sismológica de magnitud de momento (no confundir con la escala de Richter), teniendo su epicentro en el océano Pacífico, aproximadamente a 70 kilómetros al este de la región de Tōhoku. Fue el terremoto más potente registrado en Japón y el cuarto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo desde 1900.

Sin embargo, el terremoto fue solo el principio de la catástrofe: generó un tsunami cuya cota máxima de run-up alcanzó aproximadamente 40 metros en sectores de la costa de Iwate. En la llanura de Sendai, la inundación avanzó varios kilómetros tierra adentro; algunas síntesis sitúan su alcance máximo en torno a 10 kilómetros. Estas medidas describen fenómenos y lugares distintos, pero juntas muestran una capacidad destructiva extraordinaria: el agua arrasó poblaciones, infraestructura, y medios de vida a lo largo de la costa de Tōhoku.

Y si esto parecía considerablemente negativo, resulta aún más trágico si conocemos el dato de que Fukushima poseía una planta de energía nuclear, la cual se vio fuertemente afectada por la catástrofe natural. Debido a la destrucción de su infraestructura, los fallos eléctricos, y la liberación de materiales radiactivos, esta situación de emergencia por catástrofe natural añadió a sus consecuencias una crisis nuclear de alto impacto, que requirió la evacuación de aproximadamente 154 mil personas ubicadas en un radio de 20 kilómetros de la planta.

El balance conjunto del terremoto y el tsunami fue de aproximadamente 19.000 personas muertas o desaparecidas, más de 6.000 heridas, y cientos de miles de desplazadas o evacuadas. El accidente nuclear de Fukushima amplió y prolongó los desplazamientos, además de añadir consecuencias sanitarias, psicológicas, y sociales. Las cifras no deben fundir en una sola categoría las víctimas directas del desastre y las evacuaciones nucleares, pero sí permiten comprender la escala acumulativa de la emergencia.

Sin embargo, gracias a la integración internacional y a su eficiencia gubernamental, Japón pudo rápidamente recibir y brindar la ayuda humanitaria necesaria para solventar esta situación. La comunidad internacional proporcionó recursos y apoyo en el rescate y la recuperación económica futura, mientras que el gobierno japonés implementó medidas de reconstrucción y recuperación económica que le permitieran a esta región recuperar la normalidad con rapidez. Esto es un punto importante, ya que el costo económico de esta situación de emergencia se estimó en más de 200 mil millones de dólares, lo que la convierte en la crisis humanitaria por desastre natural más costosa de la historia.

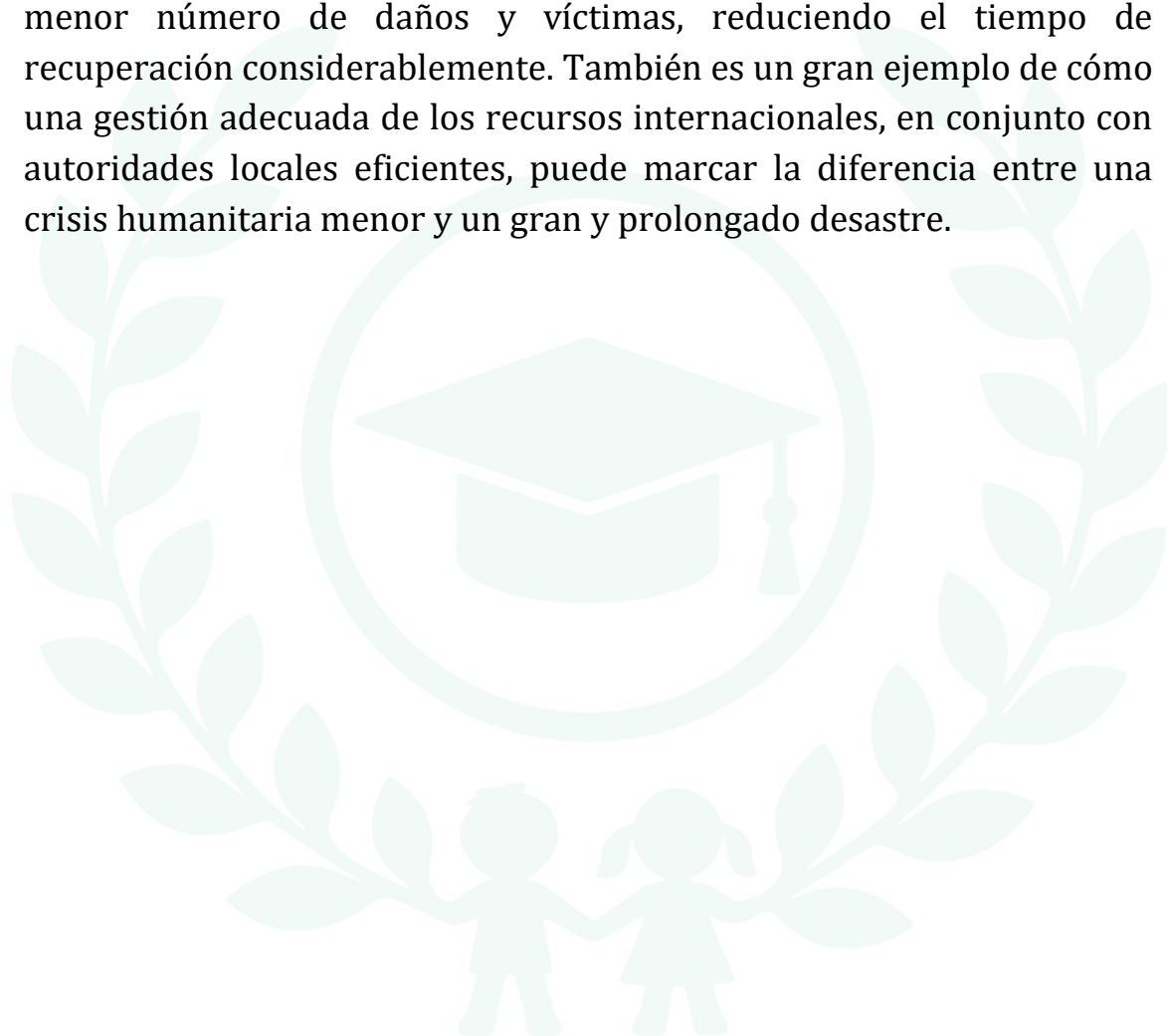
Si Japón no hubiera tenido un fuerte desarrollo económico y geopolítico, las consecuencias de este evento hubieran sido incomparables con cualquier otro desastre natural jamás visto. Sin embargo, no se puede ignorar que los daños también se vieron amplificados por la diferencia de desarrollo entre la región de Tōhoku y el resto del Japón moderno. Por ello, un sistema orientado hacia la prevención, las normas de infraestructura, y los fondos disponibles para una crisis hubiera logrado reducir esas cifras aún más.

Las consecuencias, sin embargo, aún son notables a día de hoy. La crisis nuclear ha dejado secuelas en Fukushima, ya que, incluso a día de hoy, hay zonas que siguen siendo desafiantes en términos de descontaminación radiactiva. Por otra parte, en la región de Kyūshū, el monte Shinmoedake se encontraba ya atravesando un episodio eruptivo iniciado en enero de 2011. El volcán registró nuevas erupciones durante marzo, incluida una erupción importante el 13 de marzo, dos días después del terremoto de Tōhoku. Sin embargo, dado que su actividad eruptiva había comenzado antes del terremoto, no corresponde presentar el sismo de Tōhoku como causa directa de dicha actividad volcánica.

En cuanto al propio tsunami, también fue el causante de arrastrar los escombros restantes de la infraestructura destruida al océano y a las tierras, contaminando y desequilibrando los ecosistemas costeros y las plantaciones. Esto es extremadamente problemático para una región

que basaba su economía en la pesca local y la agricultura, y mostró la necesidad de diversificar los ingresos de Tōhoku.

A pesar de esto último, se puede tomar este caso como un buen ejemplo de resiliencia y gestión de crisis humanitaria. Seguir este antecedente puede ser desafiante para civilizaciones menos desarrolladas y conectadas con el mundo, pero es también, sin lugar a dudas, la vía por la que podremos superar estas situaciones con el menor número de daños y víctimas, reduciendo el tiempo de recuperación considerablemente. También es un gran ejemplo de cómo una gestión adecuada de los recursos internacionales, en conjunto con autoridades locales eficientes, puede marcar la diferencia entre una crisis humanitaria menor y un gran y prolongado desastre.



Desplazamientos forzados y crisis migratorias

Los conflictos, los desastres, y otras crisis pueden provocar movimientos de población dentro de un país o hacia otros territorios. Sus causas y las necesidades de protección de las personas varían, por lo que debemos distinguir entre desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, y otros migrantes. Los ejemplos siguientes permiten examinar esa diversidad y sus implicaciones para las sociedades receptoras.

Esta última aclaración nos lleva directamente a tres preguntas que cambian radicalmente estas circunstancias: ¿qué pasa si el proceso no se realiza correctamente? ¿Qué pasa si no logramos integrarlos a nuestras sociedades? ¿Qué pasa si, luego de culminada la crisis, las personas deciden no volver a sus países de origen?

En esta sección, mencionaremos tres casos históricos de crisis de refugiados que nos mostrarán respuestas a estas preguntas. Los resultados de estas historias nos permitirán entender mejor la complejidad de la situación y las potenciales consecuencias de un manejo inadecuado. A su vez, intentaremos detallar los desafíos de la integración, las tensiones sociopolíticas que los han llevado a esta situación, y las consecuencias a largo plazo tanto para los refugiados como para los países receptores. Los escenarios en los que la integración de refugiados no se lleva a cabo de manera adecuada pueden llevar a situaciones peligrosas de marginación, que desembocarán en tensiones y conflictos dentro de las comunidades receptoras.

Es por este motivo que tener políticas efectivas y una fuerte colaboración internacional puede transformar una crisis de refugiados en una oportunidad única para el desarrollo de una sociedad culturalmente diversa. Países en vías de desarrollo, o con una estructura demográfica desfavorable para su potencial socioeconómico, podrían encontrar en una crisis de refugiados la pieza faltante para liberar toda su capacidad y avanzar hacia el siguiente nivel.

Los casos elegidos son el resultado de filtrar miles de situaciones históricas y elegir aquellas que mejor representan cada una de las preguntas que nos hemos formulado previamente. A su vez, consideramos que estos casos concretos permiten dar una visión mucho más interesante de cómo la sociedad enfrenta este tipo de crisis desde ambos puntos de vista, sin olvidarnos de todo lo que fue mencionado anteriormente.

Esperamos que estas historias les resulten tan reveladoras como lo fueron para nosotros.

Gran hambruna irlandesa (1845 - 1852)

Irlanda es una isla en el noroeste europeo, separada históricamente en dos regiones políticas: la República de Irlanda e Irlanda del Norte (que forma parte del Reino Unido). La primera cuenta con aproximadamente cinco millones de habitantes, mientras que Irlanda del Norte posee alrededor de dos millones de habitantes.



En la República de Irlanda, el irlandés y el inglés son lenguas oficiales, con el irlandés reconocido constitucionalmente como primera lengua oficial. En Irlanda del Norte, donde el inglés es la lengua de uso predominante, el irlandés cuenta también con reconocimiento oficial en virtud de la legislación aprobada en 2022. En términos económicos, la República de Irlanda constituye un importante centro europeo para empresas tecnológicas, farmacéuticas y de otros sectores de alta productividad. En 2023, los productos químicos y relacionados representaron cerca de dos tercios del valor total de sus exportaciones de bienes.

La historia de las “dos Irlandas” nunca ha estado libre de conflictos y problemáticas sociales, los cuales se remontan a cuando este país aún era una colonia británica. El movimiento independentista había crecido considerablemente desde finales del siglo XIX, lo cual se vio fuertemente reflejado en 1916, cuando miembros de una organización secreta

denominada “Hermandad Republicana Irlandesa” (IRB) unieron fuerzas con el Ejército Ciudadano Irlandés y se levantaron en armas contra la corona británica. Este evento tuvo lugar el 24 de abril, que coincidió con el Lunes de Pascua, mientras que el conflicto en su totalidad acabó durando seis días. Por este motivo, a este movimiento se lo conoció como “Levantamiento de Pascua”.

Los insurgentes tomaron varios edificios estratégicos en Dublín, la capital de Irlanda, desde donde uno de los principales referentes del movimiento, Patrick Pearse, proclamó independiente a la “República Irlandesa”, haciendo un llamamiento al pueblo para que se uniera a la lucha. Por desgracia para ellos, las fuerzas británicas rápidamente desplegaron artillería y ejército, sofocando el levantamiento y reprimiendo a los involucrados. El conflicto tuvo numerosas bajas tanto civiles como militares, causando una significativa destrucción en Dublín, y llevando a los líderes revolucionarios a su ejecución. Debido a la crueldad de la represión y las ejecuciones, la semilla de la independencia se implantó incluso en aquellos que discrepaban del movimiento revolucionario que culminó en el Levantamiento de Pascua.

Estas ideas independentistas llegaron a su culmen cuando, en las elecciones generales británicas de 1918, el partido político “Sinn Féin” consiguió una amplia mayoría de los escaños irlandeses en el Parlamento británico. Este partido estaba ampliamente relacionado con las ideas revolucionarias e independentistas, ya que los principales líderes del Levantamiento de Pascua eran miembros o asociados del mismo. Tanto así que el gobierno británico culpó erróneamente a este partido político de haber estado implicado en el levantamiento armado, lo que los enemistó fuertemente. A pesar de haber ganado los escaños, los miembros del partido Sinn Féin se negaron a formar parte del Parlamento británico, instaurando un parlamento alternativo llamado Dáil Éireann en 1919, declarando así su intención de independencia.

Fue así que, apoyado por el Ejército Republicano Irlandés, el Sinn Féin comenzó una guerra contra las fuerzas británicas con el objetivo de negociar su independencia absoluta del Reino Unido. Esta guerra duró hasta el año 1921, cuando los líderes irlandeses y el gobierno británico

firmarían el llamado “Tratado Angloirlandés”, que establecería la separación de estas tierras en dos regiones políticas: el Estado Libre Irlandés (que tendría dominio autónomo, pero bajo el Imperio Británico) e Irlanda del Norte (que permanecería como parte del Reino Unido).

La ratificación de este tratado no fue sencilla, causando una guerra civil en el recién creado Estado Libre de Irlanda. Este conflicto consistió en una disputa entre aquellos que estaban a favor del tratado y aquellos que deseaban una independencia absoluta, negándose a cualquier solución que implicara seguir teniendo relación alguna con el Imperio Británico. Esta guerra duró de 1922 a 1923, y acabó con la victoria por parte de aquellos que estaban a favor del tratado, lo que dejó tensiones en la población incluso hasta tiempos recientes.

Como hemos visto, la historia irlandesa del siglo XX estuvo marcada por conflictos internos y externos. Para comprender su profundidad debemos retroceder al siglo XIX y a la Gran Hambruna. La hambruna no creó por sí sola el independentismo ni fue el origen de todas las tensiones con el gobierno británico, pero transformó esas tensiones: la magnitud de la mortalidad, la emigración, y la percepción de abandono reforzó el nacionalismo y dejó una memoria política duradera. En una sociedad cuya economía dependía ampliamente de la agricultura, la catástrofe se convirtió también en un punto de inflexión histórico.

Debido a la gran pobreza de la región, la tierra estaba dividida en pequeños espacios para el desarrollo agrícola, lo que hacía que los campesinos centraran su producción en un solo producto. La papa era el alimento fundamental de la dieta irlandesa, ya que era sencilla de cosechar y podía ser utilizada de multitud de formas diferentes. La población había desarrollado una dependencia vital de este tubérculo, al punto de que un tercio de la población dependía casi exclusivamente de este para su subsistencia y alimentación.

Esta situación parecía estable debido a la sencillez del proceso de cosecha, que poseía muy pocas fallas potenciales. Sin embargo, una de estas posibles fallas es la infestación de “*Phytophthora infestans*”, que

es un microorganismo similar a un hongo. Esta plaga causa una enfermedad en las plantas agrícolas conocida como el “tizón tardío de la papa”, que infecta a las mismas mediante pequeñas heridas en los tejidos de las hojas y los tallos de diversas plantas (preferentemente aquellas pertenecientes a la familia Solanaceae, a la que pertenecen la papa y el tomate). Una vez infectada la planta, el patógeno se desarrolla en su interior produciendo esporas que viajan por aire y agua, preferiblemente en climas templados y húmedos.

El tizón tardío llegó a Europa en 1845 y se extendió rápidamente hasta Irlanda. La evidencia histórica y genética indica que el patógeno había aparecido previamente en América del Norte y que su propagación internacional estuvo vinculada al movimiento de material vegetal infectado. Esta destruyó la amplísima mayoría de cosechas de papa durante más de siete años consecutivos, dejando a la población irlandesa sin su principal fuente de alimento. Como la política británica de ese entonces estaba basada en la no intervención económica de sus colonias, debido a sus ideas de libre mercado, los británicos ofrecieron poca ayuda a los locales, actuando ineficaz y contraproducentemente en su auxilio.

Se intentó dar asilos para los más pobres, pero las condiciones inhumanas de estos lugares causaban aún más muerte y miseria. No solo eso, sino que, a pesar de la desesperada situación que atravesaba su colonia, el gobierno británico no cesó su política de exportación de alimentos desde Irlanda hacia el Reino Unido, lo que generó un gran resentimiento de los locales.

Las consecuencias de este evento fueron devastadoras. La combinación de mortalidad masiva y emigración redujo drásticamente la población irlandesa: de cerca de 8,5 millones de habitantes en 1845 pasó a aproximadamente 6,6 millones en 1851. Durante los años de la hambruna, más de un millón de personas emigraron, principalmente hacia Gran Bretaña y América del Norte. La migración masiva se volvió un problema enorme en el desarrollo de la región que, en el futuro, acabaría siendo independiente. Esta situación aceleró por completo el colapso del funcionamiento agrícola en Irlanda, ya que los campesinos

que arrendaban las tierras fueron desalojados, reduciendo significativamente la población rural.

El resentimiento hacia el Reino Unido, sumado a la sentencia de muerte que significaba la hambruna, fomentó la migración extrema que enlenteció significativamente el proceso de restauración social. A su vez, este enlentecimiento causó que los locales sintieran incertidumbre sobre si sus condiciones algún día volverían a ser prósperas. El miedo que esto generaba causó que los irlandeses, incluso luego de finalizada la hambruna, siguieran buscando refugio en el extranjero, aumentando el número de refugiados y reduciendo drásticamente la población local restante.

Este tipo de migración es distinto de los que suelen ocurrir luego de un conflicto bélico o una catástrofe natural, principalmente debido a que la amplia mayoría de las familias que emigraron nunca desearon volver a su nación de origen. El proceso de emigración hacia América del Norte fue extremadamente peligroso. Muchas personas viajaron en embarcaciones que posteriormente serían conocidas como “barcos ataúd” debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y la elevada incidencia de enfermedades durante la travesía. Miles de emigrantes murieron en el viaje o poco después de llegar, especialmente durante 1847, aunque no es correcto afirmar que la mayoría de los pasajeros fallecía antes de alcanzar su destino. Quienes lograron establecerse en el extranjero formaron posteriormente importantes comunidades irlandesas.

Los países que recibieron a los refugiados vieron desarrolladas sus ciudades más importantes, gracias al apoyo de las comunidades irlandesas que se asentaron. Hablamos de ciudades como Nueva York, donde, para mediados del siglo XIX, un cuarto de la población tenía origen irlandés, o Boston, en la que un tercio de su población era irlandesa. En el caso de Canadá, sus mayores efectos los podemos apreciar en Montreal, donde fueron mano de obra en infraestructura fundamental como, por ejemplo, la construcción del canal Lachine.

Los refugiados no eran apreciados, y sufrieron múltiples tensiones con los locales. Sin embargo, con el pasar de los años, se enriquecieron y desarrollaron la sociedad en el extranjero, asegurando un futuro próspero para ellos y sus descendientes. A pesar de la discriminación, contribuyeron a la diversidad cultural, al desarrollo demográfico de centros neurálgicos norteamericanos, y contribuyeron positivamente a la economía gracias a sus trabajos en fábricas, construcción y prestación de servicios.

Los irlandeses lograron asociar su identidad y cultura a sus nuevos hogares, por lo que, después de todo este proceso, sumado a lo mucho que les había costado llegar y establecerse, ya no tenían motivo alguno para regresar. Este es un caso de cómo la migración fue devastadora para los locales, pero beneficiosa para los países receptores, siendo un ejemplo para demostrar que una crisis de migración no necesariamente se refiere a la situación de emergencia que causan los migrantes al llegar a su nuevo destino.

Por fortuna, a pesar de las dificultades y lo lento del proceso de reconstrucción, la República de Irlanda es próspera en la actualidad, siendo un referente económico y tecnológico de la región europea. Irlanda del Norte, por otra parte, no ha logrado despegar de la forma en la que lo hizo su contraparte, dependiendo en gran medida del Reino Unido para mantener estable su economía, y con grandes desafíos en el ámbito de la desigualdad y su productividad.

Tanto los descendientes locales como aquellos que emigraron lograron establecerse cómodamente en el lugar que ocupan, lo cual es una historia de éxito frente a una situación de emergencia. Sin embargo, las consecuencias de una situación como esta dejan huellas en la memoria de las sociedades, y fueron necesarios una intervención educativa y un proceso de integración social para que fuera posible ver luz al final del túnel. La conclusión que me deja esta historia es la importancia de la educación en estos casos, y cómo las decisiones educativas que tomemos en situaciones límite como estas pueden influir tan profundamente en la prosperidad de las generaciones venideras.

Crisis de refugiados venezolanos (2014 – act.)

En Latinoamérica, en concreto desde comienzos de siglo, hemos sido testigos de esta realidad tan abrumadora: nuestros propios vecinos han abandonado sus países y se han desplazado a lo largo y ancho de todos los países prósperos. Comenzaré mencionando el más importante de todos estos movimientos migratorios, el cual ya es parte de la historia de esta región.

Venezuela es un país latinoamericano con una población estimada de 30,5 millones de habitantes, que limita con Colombia al oeste, con Brasil al sur, y con la República de Guyana al este. Su idioma oficial es el español, aunque en ciertas comunidades, como en Bolívar, la región de Guajira y el delta del Orinoco, aún existe una fuerte presencia de lenguas indígenas.



Su etnia es mayormente mestiza, con minorías blancas, negras e indígenas, lo cual es un factor común en esta región del planeta. Otro dato importante de Venezuela es que es un país históricamente católico, por lo que sus principales festividades y costumbres están íntimamente relacionadas con su trasfondo eclesiástico. Su historia es, muy probablemente, una de las más interesantes a nivel sociopolítico de toda Latinoamérica: Venezuela fue colonia española desde el siglo XVI. El 5 de julio de 1811, siete provincias declararon formalmente su independencia de España, aunque el conflicto continuó durante la

década siguiente. La victoria independentista en la batalla de Carabobo, en junio de 1821, consolidó en gran medida el control patriota sobre el territorio venezolano.

Venezuela permaneció integrada en la República de Colombia (conocida posteriormente como Gran Colombia) hasta 1830, cuando se constituyó como una república soberana separada. Esto se debió a múltiples factores, algunos de los cuales ya son conocidos por los ejemplos anteriores: primeramente, no recibieron un apoyo inmediato de la comunidad internacional, justificado principalmente por el miedo de los países coloniales a desatar conflictos independentistas en todas sus colonias.

Sin este apoyo, así como vimos en el caso de Haití, las ahora repúblicas independientes no eran capaces de ingresar al mercado internacional y comenzar su proyecto de desarrollo. A esto se le sumó otra consecuencia de llegar tan prematuramente al proceso de independencia, que es la falta de otras colonias que brinden apoyo. Ser un pionero en una idea rebelde suele implicar que dichas ideas no son populares aún, lo que dificulta encontrar aliados estratégicos.

Por otra parte, existía una gran separación social interna entre aquellos que defendían la idea de una república independiente y quienes aún preferían mantenerse bajo el ala de Europa y eventualmente beneficiarse de un desarrollo de segunda mano. Estos últimos componían las llamadas “Fuerzas Realistas”, las cuales estaban apoyadas por tropas altamente entrenadas y armadas de la corona española, cuyos operativos recuperaron momentáneamente el control de ciudades neurálgicas, replegando a los independentistas. Múltiples conflictos de alto nivel, como la “Batalla de La Puerta” en 1814, o la toma de la capital en ese mismo año, mostraron superioridad estratégica por parte de las fuerzas realistas, quienes parecían tomar el control nuevamente para la corona española.

El último factor importante que terminó retrasando la independencia de Venezuela fue el apoyo de la Iglesia a los intereses españoles. Recordemos que esta república era fuertemente católica, por lo que la

opinión eclesiástica jugaba un rol muy importante en esta sociedad. Su indudable apoyo a las fuerzas realistas fue un duro golpe para los movimientos independentistas, ya que parte importante de la sociedad perdió el sentimiento patriótico que poseía y se refugió en su fe y principios.

Sin embargo, esto también generó el efecto contrario: los patriotas ahora eran fuertemente anticlericales, por lo que parte de sus esfuerzos se dedicaron a dificultar las operaciones de la Iglesia católica, expropiando tierras y aplicando regulaciones que impedían su normal funcionamiento. Este círculo vicioso aumentó gradualmente las tensiones, ya que, cuanto mayor era el movimiento anticlerical, mayor era el apoyo de la Iglesia a la corona española y mayor su efecto en la población, lo que hacía que el movimiento anticlerical fuera más notable, y así sucesivamente.

Evidentemente, esta era una batalla perdida para el clero, ya que tarde o temprano los esfuerzos de las fuerzas independentistas superarían a los intereses de la corona, haciendo que la independencia fuera inevitable. Más cerca de ese punto, parte importante del clero cambió radicalmente su lealtad, con el interés de permanecer como una fuerza política y social activa en el país, incluso después de su independencia. Si exploramos esta idea con la realidad actual, es claro que la Iglesia católica logró reconstruirse y adaptarse a la transformación independentista, ya que hoy Venezuela es un país fuertemente católico.

Quizá el mayor error de las fuerzas realistas fue subestimar la figura de Simón Bolívar, quien fue fundamental desde la proclamación de la independencia hasta su eventual consolidación. No hay que olvidar que, a pesar de que las batallas perdidas habían sido golpes duros, las fuerzas independentistas lideradas por Bolívar consiguieron victorias aplastantes como la “Batalla de Boyacá” en 1819, la cual, si bien ocurrió en la actual Colombia, sirvió de oportunidad para que Simón Bolívar se hiciera con recursos, alianzas y conocimiento estratégico del campo de batalla.

Estos beneficios fueron cruciales en la denominada “Batalla de Carabobo” en 1821, ya que sus fuerzas militares estaban compuestas por militares colombianos, y su estrategia ofensiva había sido el resultado de la experiencia adquirida por Bolívar en sus enfrentamientos en el exterior. El apoyo de las nuevas naciones, junto con las victorias aplastantes sobre las fuerzas realistas, obligó a los españoles a retirarse del territorio venezolano, sellando su independencia.

La historia posindependencia de Venezuela es altamente interesante también, con eventos fundamentales para su actualidad como la “Guerra Federal”, donde los grupos ahora independientes lucharon por el control político de la nueva república, causando una guerra civil devastadora que dejó inestable al país. Asimismo, podemos mencionar el periodo de gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1870-1888), donde se impulsaron políticas de desarrollo económico y social, con el objetivo de consolidar a Venezuela como una potencia emergente.

También es interesante mencionar el periodo dictatorial venezolano (1908-1935), al mando de Juan Vicente Gómez. Durante la dictadura, Venezuela retrocedió considerablemente en términos de libertad, geopolítica y desarrollo. Sin embargo, con motivo de este informe en concreto, he decidido dar un salto hacia el evento que cambió por completo el rumbo histórico de este país. A mediados del siglo XIX, ya se habían encontrado los primeros yacimientos de petróleo en Venezuela, lo que llevó a la fundación de las primeras empresas petroleras del país e impulsó el interés de empresas extranjeras por buscar y explorar los límites y características de los campos petroleros locales.

La explotación petrolera venezolana adquirió una nueva escala durante la década de 1920. En 1920 se promulgó la primera legislación venezolana específicamente dedicada a los hidrocarburos, posteriormente reformada en 1921 y 1922. El 14 de diciembre de 1922, el pozo Barroso II, ubicado en el campo La Rosa de Cabimas, sufrió un espectacular reventón que llegó a expulsar alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios durante varios días. El episodio demostró internacionalmente el enorme potencial petrolero de la cuenca del lago

de Maracaibo y aceleró considerablemente el desarrollo de la industria venezolana.

Los ingresos provenientes de esta industria no se hicieron esperar, llenando las cuentas del Estado y creando oferta laboral local, a medida que superaban los beneficios asociados a las industrias tradicionales, tales como la producción de café o cacao. Sin embargo, no todo el petróleo es igual; los costos operativos de la industria petrolera dependerán de múltiples factores, como la “pureza” del mismo, la cercanía a la superficie, la capacidad de producción en cada punto, entre otros.

El petróleo venezolano permitió ingresos extraordinarios, pero también creó una vulnerabilidad estructural. Una parte importante de sus recursos corresponde a crudos pesados y extrapesados por su densidad y viscosidad, que exigen procesos específicos de extracción, transporte, mejoramiento, y refinación. Mientras los precios internacionales fueron elevados, esos costos quedaron ampliamente compensados. Cuando el mercado cambió, la misma estructura productiva se volvió mucho menos tolerante a la ineficiencia, la falta de inversión, y el deterioro tecnológico.

PDVSA fue constituida en 1975 y comenzó sus operaciones en 1976, con la entrada en vigor de la nacionalización de la industria petrolera venezolana. Esta empresa fue la vía mediante la cual el Estado nacionalizó la industria petrolera, tomando el monopolio de la explotación comercial y garantizando así que los beneficios económicos del petróleo fueran directamente a las arcas públicas del país. Esta idea, que puede sonar inteligente, ya que permite hacerse con los beneficios de una industria sumamente productiva, sin necesidad de compartir los beneficios con empresas extranjeras, es un proceso increíblemente complejo que, si se hace incorrectamente, puede destruir a la industria permanentemente.

Si bien todo el dinero obtenido ahora pertenecía al Estado, existieron dos problemas fundamentales que sellaron el destino de Venezuela. Por un lado, a pesar de los beneficios obtenidos, el gobierno venezolano no

reinvirtió las ganancias en perfeccionar la infraestructura del negocio, lo que hizo que el costo de producción no se redujera con el tiempo. De hecho, la insuficiente reinversión en mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura podía traducirse en limitaciones de la capacidad operativa y en una mayor incidencia de problemas como derrames y pérdidas de crudo.

La caída de los precios del petróleo durante la década de 1980 redujo drásticamente los ingresos y expuso esa vulnerabilidad. No se debió a una demanda “casi nula”, sino a la combinación de una demanda debilitada, una mayor oferta internacional, y cambios en el mercado. En ese nuevo escenario, los costos operativos, la inversión, y la calidad de la gestión dejaron de ser secundarios: pasaron a determinar cuánto podía sostenerse un modelo económico excesivamente dependiente del petróleo.

Como su economía había pasado a depender casi exclusivamente del petróleo, esto acarreó graves crisis económicas con un gran impacto y costo social. En la década de 1990, el presidente Rafael Caldera y su equipo intentaron solucionar este problema, implementando reformas de “apertura petrolera”, para invitar así a la inversión extranjera nuevamente y crear una nueva línea de producción que no tuviera los costos de la industria venezolana.

Sin embargo, este proceso político y económico cambió considerablemente con la llegada de Hugo Chávez al poder. Chávez había encabezado un intento de golpe de Estado fallido en 1992, pero posteriormente llegó a la presidencia por la vía electoral: ganó las elecciones de diciembre de 1998 y asumió el cargo en febrero de 1999. Una de sus políticas más controvertidas fue la reorientación de PDVSA hacia una política nacionalista y social, reforzando el control estatal sobre el sector. Aprovechando la estabilización del precio del petróleo, Chávez ordenó que los ingresos se utilizaran para financiar programas sociales enormes denominados “misiones”, politizando así la industria petrolera.

Algunos de los programas más conocidos fueron la misión “Barrio Adentro”, que consistió en la mejoría del acceso a la atención médica en comunidades pobres, las misiones “Robinson”, “Ribas”, y “Sucre”, que se utilizaron para invertir en educación a todos los niveles y así erradicar el analfabetismo, la misión “Mercal”, que garantizaba alimentación para todos a precios subsidiados, y la misión “Vivienda Venezuela”, que buscaba reducir el déficit habitacional mediante unidades de vivienda subsidiadas.

Estos planes incluso llegaron a ser elogiados por la comunidad internacional, recibiendo reconocimientos de la UNESCO y de otras organizaciones de ayuda humanitaria. El problema radicaba en la vía de financiación que estas misiones ocuparían. Como Venezuela no diversificó su economía ni reinvertió las ganancias en mejorar su industria, todos estos planes sociales se sustentaban únicamente en que el precio del petróleo se mantuviera por encima de ciertos rangos. Si el mismo se desviaba tan solo un poco de lo calculado, los costos operativos devorarían las ganancias, y el Estado entero se quedaría sin financiación.

La caída de los precios del petróleo en 2014 agravó una crisis que ya combinaba dependencia exportadora, desequilibrios fiscales, deterioro productivo, controles, y debilidad institucional. La financiación monetaria del déficit contribuyó decisivamente a la hiperinflación, pero no explica por sí sola todo el proceso. El resultado fue un enorme desabastecimiento, colapso de servicios básicos, empobrecimiento acelerado, violencia, represión política, y una pérdida masiva de condiciones para sostener la vida cotidiana en Venezuela.

En diciembre de 2023, ACNUR y la OIM informaban de más de 7,7 millones de venezolanos fuera de su país, en su mayoría en América Latina y el Caribe. Esta movilidad plantea desafíos de protección e integración, así como necesidades de empleo, educación, y acceso a servicios en los países receptores. La recepción de millones de personas en sistemas públicos ya tensionados ha expuesto la ausencia de protocolos regionales suficientes y las limitaciones de muchos Estados latinoamericanos.

El problema no es que los gobiernos deban elegir entre sus ciudadanos y los migrantes: esa falsa disyuntiva alimenta prejuicios y vuelve políticamente más difícil ampliar los servicios. La respuesta sostenible consiste en fortalecer capacidades locales y atender conjuntamente las necesidades de quienes llegan y de las comunidades receptoras. Sin esa inversión, la competencia por recursos escasos puede deteriorar la cohesión social y convertir una crisis de gestión en una crisis de convivencia.

Venezuela es, sin lugar a dudas, un ejemplo histórico de cómo las buenas intenciones, si son equivocadamente implementadas, pueden dar lugar a un problema mayor incluso que el que se tenía originalmente. A la región latinoamericana, esta experiencia le enseñó a cuidarse frente a políticas de subvención y proteccionismo sin fondos, a la par que impulsó la creación de protocolos y medidas migratorias frente a cualquier situación de emergencia en la región. Organizaciones como ACNUR y USAID han enfocado sus esfuerzos en ayudar a los venezolanos migrantes en sus nuevos países, pero el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional seguirán siendo vitales unos cuantos años más.

Sin embargo, como suele suceder en esta clase de crisis, será muy difícil que Venezuela logre atraer nuevamente a una parte significativa de quienes emigraron. Una vez asentadas en un nuevo hogar y habiendo atravesado satisfactoriamente el proceso de adaptación, las personas refugiadas en el exterior difícilmente encuentren atractiva una propuesta de retorno. El trauma y la experiencia desafiante que fue alcanzar esta nueva comodidad en el país receptor suelen generar un fuerte rechazo a la idea de regresar, incluso si las condiciones han mejorado. Solo el tiempo nos dirá si Venezuela vuelve a resurgir económicamente y logra ofrecer un nivel de vida aceptable para sus habitantes.

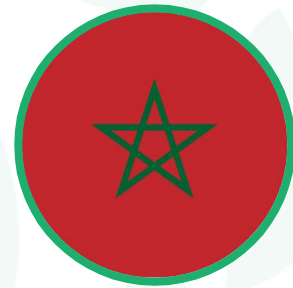
Incluso así, los países receptores y sus habitantes deberán hacer un esfuerzo real por aceptar y acoger a los migrantes, ya que difícilmente estos reconsideren volver a sus países de origen. Una transición amigable acaba trayendo beneficios incalculables que, en el caso de

países en vías de desarrollo como tenemos en Latinoamérica, pueden resultar la pieza faltante para establecer una política socioeconómica de alto nivel.



Migración masiva marroquí (2021 – act.)

Marruecos es un país del noroeste africano, que limita con Argelia al este y con el Sáhara Occidental al sur. Su población es de aproximadamente 37 millones de habitantes en un territorio de 446.550 kilómetros cuadrados, lo que hace que tenga el doble de la densidad poblacional del promedio africano.



Sus idiomas oficiales son el árabe y el bereber, aunque el francés es ampliamente utilizado en el ámbito de los negocios y la diplomacia internacional. Su población está compuesta mayormente por árabes y bereberes, con ínfimas minorías europeas y subsaharianas. Esto hace que la religión predominante sea el islam, con pequeñas minorías de cristianos y judíos.

Marruecos tiene una historia que se remonta hasta la Antigüedad. La región estaba habitada por poblaciones amazigas cuando, entre los siglos VIII y VII a. C., comenzaron a llegar navegantes fenicios a sus costas. Posteriormente se desarrolló también una presencia e influencia cartaginesa, antes de la expansión del dominio romano en el norte de África.

Cuando el Imperio romano cayó, la región pasó a estar dominada por los vándalos, para ser finalmente controlada por el Imperio Bizantino. Con el expansionismo musulmán por África en el siglo VII, la región

adoptó gradualmente el islam como religión. En este punto, los bereberes volvieron a controlar Marruecos durante varias dinastías, destacando entre ellas los Almorávides y los Almohades (quienes controlaron grandes partes de las regiones del Magreb y de la península ibérica), así como también los Sádidas, quienes lucharon contra los portugueses y otomanos por mantener su independencia.

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Europa comenzó a mostrar interés por controlar Marruecos, ya que era uno de los pocos territorios africanos que no estaban bajo el dominio de ningún país europeo. Sin embargo, una lucha de egos complicó la operación: Francia quería controlar mayormente la zona norte de África, mientras que Alemania quería impedir que los franceses tuvieran aún más colonias, ya que eso complicaría sus intereses comerciales. En 1905, el káiser Guillermo II de Alemania visitó Tánger (una ciudad importante de Marruecos), manifestando el apoyo alemán a la independencia de este país.

Esto generó fuertes tensiones diplomáticas con Francia y, para evitar que la situación escalara hasta convertirse en un conflicto mayor, se decidió convocar en 1906 a una conferencia entre potencias europeas denominada “Conferencia de Algeciras”. Aquí participaron trece delegaciones: Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia y Suecia. La conferencia acordó un marco internacional de reformas y de actuación de las potencias extranjeras en Marruecos, manteniendo formalmente la soberanía del sultán.

Lo que finalmente acabó decidiéndose (entre otras cosas) fue que se implementarían reformas administrativas, económicas y de seguridad, con el objetivo de modernizar y estabilizar el país. También se acordó que Marruecos tendría libertad plena de comerciar con todas las potencias europeas, sin beneficiar a ninguna en particular. Finalmente, se definió que, aunque ningún país europeo tendría control total sobre la nación africana, Francia y España serían los encargados de supervisar y gestionar las reformas establecidas.

En 1912, el Tratado de Fez estableció el protectorado francés sobre Marruecos, mientras acuerdos posteriores definieron las zonas sometidas al protectorado español. El tratado fue firmado durante el reinado del sultán Moulay Abd al-Hafid. Tras su abdicación ese mismo año, fue sucedido por Moulay Youssef. Su hijo, Sidi Mohammed Ben Youssef, conocido posteriormente como Mohammed V, no accedería al trono hasta 1927.

A pesar de que esta resolución ayudó a menguar los conflictos diplomáticos en Europa (aunque los mismos perduraron hasta la Primera Guerra Mundial), la misma no fue tan popular entre los locales, que se sentían cómodos siendo independientes. En 1921, fuerzas rebeldes armadas de la región del Rif, lideradas por Abdelkrim El-Khattabi, se impusieron ante las fuerzas españolas y francesas, logrando ganar soberanía sobre esta región hasta 1926, siendo finalmente derrotadas.

Este evento despertó un nacionalismo en la población marroquí, que, mediante movimientos políticos como el Partido de la Independencia (Istiqlal), impulsó las ideas independentistas durante la década de 1940. Tanto fue así que el propio sultán Mohammed V manifestó su apoyo a los nacionalistas en 1947, siendo exiliado por Francia en 1953, pero regresando en 1955 a la cabeza del proceso de independencia. Fue mediante intensas negociaciones y acuerdos que, el 2 de marzo de 1956, Marruecos logró su independencia de Francia.

Poco después, el 7 de abril de ese mismo año, España también reconoció la independencia de su protectorado (manteniendo ciertos enclaves como Ceuta y Melilla). Una vez que establecieron las bases de un gobierno nacional, Mohammed V asumió como rey de Marruecos (puesto que mantuvo hasta su muerte, en 1961).

El proceso posindependencia, al igual que en todos los ejemplos que hemos visto, no estuvo exento de complicaciones. Si bien tuvieron muchos puntos a favor, como que tenían infraestructura moderna restante de su tiempo colonial, que no tuvieron una guerra de independencia per se, y que su independencia vino acompañada de un

reconocimiento directo por parte de sus colonizadores, esto no impidió que Marruecos enfrentara desafíos económicos, políticos y sociales en su proceso de establecerse como una nación estable.

Sin embargo, a diferencia de sus vecinos coloniales en África, Marruecos sí logró establecer un sistema sociopolítico relativamente estable, lo cual parecía encaminarlo hacia un desarrollo sin precedentes para una colonia africana. Donde Marruecos nunca logró estabilizarse es en su política económica: la desigualdad, el desempleo, y la corrupción fueron siempre el statu quo en esta región. A pesar del desarrollo y la modernización, la economía marroquí fue y sigue siendo una de las causas principales de la migración. Durante las décadas de 1970 y 1980, fue tendencia abandonar Marruecos y emigrar hacia Europa debido a las facilidades que ofrecían los acuerdos bilaterales entre estas naciones.

La búsqueda de empleo y de mejores condiciones de vida ha impulsado la migración marroquí hacia Europa. En 2020, las estimaciones internacionales situaban el desempleo total en torno al 11 % y el juvenil alrededor del 26 %, mientras que las desigualdades territoriales reducían las oportunidades en muchas zonas rurales. Estos datos ayudan a explicar la presión migratoria, pero no permiten afirmar que toda persona que migra llega con las mismas capacidades ni que Europa garantiza automáticamente su integración.

Las comunidades de origen marroquí tienen una presencia histórica e importante en Francia, España, Países Bajos, y otros países europeos. Su trayectoria muestra como la migración puede abrir oportunidades inaccesibles en el lugar de origen y, al mismo tiempo, reproducir desigualdades laborales, educativas, y residenciales en el país receptor. Como ya hemos establecido, el éxito migratorio también depende de las políticas de regularización, formación, reconocimiento de capacidades, y lucha contra la discriminación.

Los episodios de llegadas intensas, como el ocurrido en Ceuta en mayo de 2021, revelan además que la movilidad puede quedar atrapada en tensiones diplomáticas y respuestas fronterizas improvisadas. El

desafío europeo no consiste únicamente en controlar la frontera, sino en construir vías regulares y políticas de integración coherentes con su propia demanda de trabajo y con sus obligaciones de protección. Las rutas migratorias suelen incluir peligrosas navegaciones por el mar Mediterráneo, en cuyas aguas se estima que miles de migrantes han perdido la vida en su intento por llegar a Europa. Los países receptores también han recibido críticas internacionales por la manera ineficiente en que han integrado a los marroquíes, con múltiples acusaciones de xenofobia, discriminación y conflictos con los locales, quienes defienden que los migrantes han causado más desafíos que soluciones.

La religión tampoco ha ayudado a reducir este sentimiento, y el choque cultural es un factor muy decisivo a la hora de una crisis migratoria. La integración al mercado laboral europeo de los marroquíes también ha resultado compleja, haciendo que sus tasas de desempleo sean considerablemente más altas que las de los nativos, dificultando que su fuerza laboral aporte a la economía del país, contrarrestando los costos que generan.

Hoy por hoy, la migración marroquí es un gran ejemplo de cuán compleja puede resultar la tarea de integrar a un enorme grupo poblacional en un país receptor tan distinto culturalmente. Hacerlo incorrectamente puede llevar a una percepción negativa sobre el migrante, contribuyendo a polarizar la población y crear un clima hostil hacia estas personas.

Es una responsabilidad estatal garantizar las condiciones necesarias para que este proceso sea lo más amigable posible para ambas partes, creando conciencia sobre las necesidades y beneficios de los migrantes, sin dejar de ofrecer un Estado funcional y operativo ante la adversidad y las dificultades que inevitablemente generará la inclusión de estas personas en una cultura y un ritmo de vida radicalmente diferentes.

Sistemas educativos de emergencia

Educativamente hablando, los desplazados se encuentran en una situación muy delicada con respecto a cómo abordarán el retorno a sus estudios. No se puede esperar que una persona que acaba de tener que abandonar su vida por cuestiones de fuerza mayor se encuentre en las condiciones idóneas para ser educada en ciencias y artes. Es por esto que los desplazados tienen una posición tan delicada e incierta con respecto a su futuro, siendo la educación un pilar fundamental para brindar calma y esperanza.

Existen dos variantes de educación en contextos de crisis humanitaria: la destinada a los desplazados internos y la destinada a los refugiados. Cada una de ellas trae desafíos diferentes que, por lo tanto, deberán ser afrontados desde perspectivas radicalmente distintas, para poder encontrar la mejor vía para continuar el proceso educativo tras una situación de emergencia. Sin embargo, existe un protocolo internacional bien definido sobre cómo proceder en esta clase de circunstancias particulares.

Para entender este funcionamiento, debemos comprender en detalle cuáles son los principales desafíos en una instancia de crisis, desde el punto de vista de la comunidad internacional. El primero de ellos es la coordinación: si queremos atender satisfactoriamente una crisis, debemos ser capaces de organizar y coordinar múltiples organizaciones y autoridades diferentes en torno a un mismo objetivo. Luego, tendremos que afrontar la estrategia, el cómo vamos a solucionar el problema, y qué rol ocupará cada actor en dicho plan. Siguiendo con el proceso, tendremos la gestión y optimización de los recursos, los cuales

deberemos agrupar y asignar eficientemente para que se maximice el impacto de las acciones a realizar. Finalmente, tendremos el análisis de resultados, donde deberemos hacer una evaluación sobre qué tan efectiva fue nuestra estrategia y si hemos alcanzado los niveles de normalidad requeridos para frenar nuestros esfuerzos y concentrarlos en una nueva emergencia.

Si las organizaciones internacionales actuaran por su cuenta, sería imposible lograr superar todos estos desafíos y rendir cuentas sobre cada situación de emergencia en particular. Es por esto que, en 2005, el Comité Permanente entre Organismos inició una reforma completa sobre sus protocolos de respuesta ante emergencias, adoptando así un enfoque de gestión basado en “clústeres”.

Para aquellos no familiarizados con este concepto, un clúster es un grupo de organizaciones definidas que colaboran en conjunto para un objetivo específico y que concentran sus operaciones y recursos en una ubicación particular. Existen en total 11 clústeres definidos en situaciones de emergencia, los cuales son activados cuando concurren las siguientes dos condiciones:

- Hay una deficiencia de respuesta y coordinación al producirse un deterioro grave en la situación humanitaria o si esta cambia de forma considerable.
- La respuesta nacional o la capacidad de coordinación que ya existen no pueden satisfacer las necesidades respetando los principios humanitarios.

La desactivación de un clúster puede considerarse cuando al menos una de las condiciones que motivaron su activación deja de cumplirse, ya sea porque la situación humanitaria mejora y disminuyen significativamente las necesidades y las brechas de coordinación, o porque las estructuras nacionales adquieren capacidad suficiente para coordinar y atender las necesidades humanitarias restantes de acuerdo con los principios humanitarios. Sin embargo, la desactivación no es automática ni inmediata, sino que debe basarse en una evaluación del

contexto y de las capacidades nacionales, junto con una planificación adecuada de la transición y, cuando corresponda, del traspaso de responsabilidades.

La información recopilada se compila en un reporte, el cual se publica tan pronto como sea posible. Este mismo incluirá los objetivos, la estrategia, el perfil demográfico de los afectados y la gravedad de sus necesidades, y los recursos que fueron solicitados para poder llevar adelante el plan de acción. Para los intereses de este informe, nos centraremos en el Clúster Global de Educación, cuyas organizaciones definidas son UNICEF y Save the Children, que lo codirigen desde Ginebra, Suiza.

Este clúster, creado en 2007, contribuye a coordinar la respuesta educativa dentro del sistema humanitario. El Humanitarian Programme Cycle (HPC), o ciclo de programación humanitaria, orienta la evaluación de necesidades, la planificación, la movilización de recursos, la ejecución y el seguimiento, y la revisión de la respuesta. Su aplicación requiere coordinación entre los actores participantes y adaptación a la evolución de la situación.

En el sector educativo, el HPC se aplica mediante esos mismos elementos. De forma complementaria, el Clúster de Educación desempeña una serie de funciones centrales de coordinación sectorial. Entre ellas se encuentran:

- Respalda la prestación de servicios educativos de emergencia, implementados por las autoridades locales.
- Fundamenta la adopción de decisiones estratégicas del Coordinador de Asuntos Humanitarios y los equipos humanitarios presentes en el país, en materia de educación.
- Planifica y perfecciona la estrategia nacional formal que será llevada adelante.

- Realizar el seguimiento y evaluar el desempeño del sector educativo, tras la implementación de esta estrategia.
- Fomentar la capacidad nacional en materia de preparación y planificación de contingencias.
- Promover todo asunto relacionado con la educación y la rendición de cuentas ante los afectados.

Todo esto solo será posible conseguirlo si el clúster de educación mantiene relación con numerosos actores en una situación de emergencia, entre los que se incluyen la población afectada, ONG que desean colaborar, el equipo humanitario nacional, los donantes y agentes de desarrollo externos y, por supuesto, el gobierno nacional.

Ninguna intervención educativa puede ser sostenible si ignora a las autoridades y capacidades locales. La regla general debe ser trabajar con el Ministerio de Educación, fortalecerlo, y evitar estructuras paralelas que desaparezcan al terminar la emergencia. Sin embargo, coordinación no significa subordinación incondicional. Cuando el Estado sea parte del conflicto, discrimine a una población, o impida el acceso a derechos básicos, los actores humanitarios deberán preservar su independencia operativa y actuar conforme a los principios humanitarios. La legitimidad local y la independencia son dos condiciones que deben equilibrarse.

Como pueden observar, en todo punto hemos mencionado un plan estratégico bien definido. Sin embargo, crear estos planes en un contexto crítico como una situación de emergencia puede ser muy desafiante. El clúster de educación deberá desarrollar y documentar esta estrategia, teniendo en cuenta todas las variables posibles a su alcance. Esto se realiza en conjunto con las organizaciones asociadas y el gobierno nacional, en torno a una evaluación y un análisis de las necesidades que deberán ser atendidas, y a un plan coordinado sobre las mejores formas de satisfacerlas.

UNICEF define la elaboración de estos planes mediante etapas: primero se realiza una consulta inicial donde se recopila la información; luego, una puesta en limpio de estos datos junto con un análisis exhaustivo de los mismos; a continuación, un proceso de armonización que integra los planes ya establecidos de las autoridades locales; y, finalmente, un proceso de compatibilidad y continuidad, donde se creará el plan de seguimiento que tendrá la estrategia.

Finalmente, llegará el momento de la rendición de cuentas, donde habrá que transmitirle a la sociedad, de forma calmada y clara, el compromiso, la participación, la información y la retroalimentación que se han obtenido de la aplicación del clúster. Incluso en aquellos casos donde el gobierno nacional no colabore debidamente con su implementación, eso no exime a las organizaciones asociadas de pronunciarse en la defensa de los derechos humanos de los afectados.

Por ejemplo, en caso de que las medidas impulsadas por las autoridades locales no sean debidamente inclusivas y responsables, o que no tomen en cuenta los derechos y necesidades de las víctimas, se iniciará un proceso denominado “Promoción”. UNICEF lo define como «proceso premeditado, basado en pruebas demostradas, para influir de forma directa e indirecta en los responsables de las decisiones, las partes interesadas y los destinatarios pertinentes para apoyar y adoptar medidas que contribuyan a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y los niños».

En palabras más sencillas, implica que las organizaciones, los individuos, y toda la comunidad internacional se pronuncien ante una situación de emergencia mal gestionada, exigiendo que los responsables directos de la gestión de crisis cambien sus estrategias, teniendo en cuenta las necesidades y los derechos humanos de la población afectada. Es un movimiento político que crea una presión particular sobre los individuos influyentes en una sociedad en emergencia, ya que coloca al país afectado bajo la lupa internacional. Sin embargo, debe hacerse correctamente, sin desestabilizar una situación que ya es muy delicada. Para esto, se toman en cuenta cinco principios básicos de elaboración:

1. Debe velar siempre por los intereses de la población afectada, y no ser utilizado como medio para transmitir un mensaje que no los represente.
2. Debe tener hechos en los que se sustente, ya sean estadísticas, encuestas, ensayos académicos, etc. No puede basarse en una opinión que parezca ser popular.
3. Debe mantenerse siempre arraigado en los derechos humanos y defender los mismos a toda costa.
4. Debe centrarse en los asociados y las autoridades locales, ya que se espera una colaboración, no una confrontación.
5. Debe estar diseñado específicamente para el contexto en que se aplica y ser respetuoso con la cultura, las dinámicas políticas y las condiciones sociales e institucionales locales.

Habiendo mencionado ya las organizaciones competentes, su relación con el gobierno nacional en caso de una crisis humanitaria, y habiendo detallado el paso a paso de su estrategia operativa, nos toca puntualizar en dos casos particulares de crisis educativa posemergencia: los desplazados internos y los refugiados. Para esto, explicaremos las condiciones en las que estos suelen quedar tras ser afectados por una de estas situaciones, y las principales estrategias y herramientas que la comunidad puede utilizar para facilitar el camino hacia una recuperación sostenible y eficiente.

Educación para desplazados internos

Los desplazados internos pueden enfrentar uno de los desafíos educativos más difíciles de una emergencia. Permanecen dentro del mismo Estado que quizá perdió capacidad, controla de manera desigual el territorio, o incluso participa en el conflicto que los desplazó; por ello, no siempre acceden a los mecanismos internacionales disponibles para quienes cruzan una frontera. Esto no significa que todos los refugiados reciban una integración adecuada ni permite establecer una jerarquía universal del sufrimiento. Sí justifica que el informe analice a los desplazados internos como una población con barreras específicas y, con frecuencia, insuficientemente visible.

No obstante, esto no quiere decir que no sea posible definir un protocolo general de acción, que una organización (o conjunto de ellas) pueda llevar a cabo, en colaboración con el gobierno nacional, con todos los beneficios de los recursos preventivos y las tecnologías desarrolladas. Comenzando por lo básico, es evidente que, para que exista una estructura educativa en un contexto de emergencia, la situación debe estabilizarse lo suficiente como para que las personas puedan concentrarse.

La recuperación educativa no coincide necesariamente con el final formal de una emergencia. Para comparar los casos examinados, este informe propone un criterio analítico propio: consideraremos alcanzado un punto de estabilidad cuando la emergencia esté controlada al menos parcialmente, exista infraestructura educativa básica en funcionamiento, los estudiantes hayan sido reubicados, y se hayan puesto en marcha políticas de restitución académica. No es una

medición internacional estandarizada, sino una herramienta comparativa para identificar órdenes de magnitud y orientar decisiones.

Aplicado de manera aproximada a los casos revisados, el modelo produce los siguientes intervalos: en Polonia no es responsable fijar un plazo cerrado, porque la reconstrucción educativa se superpuso durante años con la reconstrucción nacional de posguerra; en Ruanda, el punto inicial de estabilidad puede situarse alrededor de tres años; en Liberia, entre tres y cuatro años; tras Katrina, alrededor de un año; en Haití, entre dos y tres años, aunque persistieron graves secuelas; y en Tōhoku, alrededor de un año, con variaciones territoriales. Estos plazos son estimaciones analíticas del informe, no cifras oficiales equivalentes entre sí.

La comparación sugiere un patrón relevante: los conflictos armados suelen dificultar más la recuperación educativa porque destruyen instituciones, prolongan la inseguridad, desplazan capacidades humanas, y erosionan la confianza social. Las catástrofes naturales también pueden ser devastadoras, pero allí donde sobreviven instituciones sólidas y existe capacidad fiscal, la reconstrucción suele avanzar con mayor rapidez. El contraste entre Tōhoku, Haití, Liberia, Ruanda, y Polonia muestra que la recuperación depende tanto del daño como de la capacidad previa y de la inversión posterior.

Esta es precisamente la conclusión operativa: un protocolo único no basta. Las medidas deben adaptarse a la naturaleza de la crisis, la capacidad institucional, los recursos disponibles, y el tiempo durante el cual persisten los obstáculos educativos. Por estos motivos, este informe no se limitará a enumerar buenas prácticas. Organizaremos las propuestas educativas para desplazados internos según las capacidades necesarias para aplicarlas, y construiremos un índice que permita discutir esas capacidades de forma comparable.

Para esto, utilizaremos como parámetros el riesgo potencial ante una crisis (según el WRI de Alliance Development Works), la situación socioeconómica actual (según el WCI del International Institute for Management Development o el GCI del Foro Económico Mundial cuando

el primero no esté disponible), la percepción de corrupción (según el índice CPI de Transparencia Internacional), el desarrollo humano (según el IDH del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y la fragilidad de la nación (según el IFM de Fund for Peace).

Uniando estos índices, proponemos un nuevo parámetro de medición exploratorio que denominaremos “Índice de Gestión Interna de Crisis” o IGIC. Para combinar sus componentes, es necesario expresarlos en una escala común de 0 a 100, procurando que, en todos los casos, un valor mayor represente una situación más favorable para la capacidad de gestión de una crisis. En el caso del IDH, cuyo valor original se expresa entre 0 y 1, realizaremos la siguiente conversión:

$$\text{IDH}_n = 100 \times \text{IDH}$$

En el caso del WRI, donde un resultado mayor representa un mayor nivel de riesgo, invertiremos la escala:

$$\text{WRI}_n = 100 - \text{WRI}$$

Finalmente, el IFM también debe invertirse y normalizarse desde su escala de 0 a 120:

$$\text{IFM}_n = 100 - (\text{IFM}/120 \times 100)$$

Con estos valores normalizados, la fórmula del IGIC será:

$$\text{IGIC} = 0,35 \cdot (\text{WCI} \mid \text{GCI}) + 0,25 \cdot \text{WRI}_n + 0,20 \cdot \text{IFM}_n + 0,10 \cdot \text{CPI} + 0,10 \cdot \text{IDH}_n$$

Debe tenerse en cuenta que el WCI y el GCI no son metodológicamente equivalentes. Cuando falte el WCI y se utilice el GCI como sustituto, el resultado será una aproximación y deberá identificarse como tal. Con

esa limitación, proponemos cuatro rangos operativos del IGIC: “Débil”, inferior a 55 puntos; “Moderada”, igual o superior a 55 e inferior a 65; “Fuerte”, igual o superior a 65 e inferior a 75; y “Muy fuerte”, igual o superior a 75. Las ponderaciones y los umbrales son decisiones metodológicas de este informe. Su valor no reside en fingir una precisión inexistente, sino en hacer explícito qué dimensiones consideramos relevantes y permitir que la propuesta sea discutida, recalculada, y mejorada.

Al aplicar exploratoriamente el IGIC con los últimos datos disponibles para los casos estudiados, obtenemos los siguientes resultados: Polonia, 73,80 puntos (**FUERTE**), Ruanda, 60,96 puntos (**MODERADA**, sin dato de WCI), Liberia, 51,31 puntos (**DÉBIL**, con GCI sin actualización posterior a 2018), Estados Unidos, 77,36 puntos (**MUY FUERTE**), Haití, 45,76 puntos (**DÉBIL**, sin dato de WCI), Japón, 74,00 puntos (**FUERTE**).

Cabe destacar que las diferencias entre países no permiten concluir nada sobre sus capacidades en cuanto a gestión de crisis, Estados Unidos, por ejemplo, alcanza el IGIC más alto del grupo pese a presentar una exposición relevante en el WRI; Polonia obtiene indicadores generales favorables, pero comparte con Ruanda debilidades relativas en sus indicadores generales de crisis. Esa tensión muestra por qué el puntaje debe publicarse junto con su perfil desagregado.

El aporte del IGIC es ordenar capacidades y abrir una comparación transparente, no emitir un veredicto definitivo sobre un país. Por eso, las categorías deben orientar la selección y el nivel de apoyo de las medidas, mientras que la decisión final deberá incorporar el tipo de crisis, las desigualdades territoriales, y las capacidades reales disponibles. A partir de este marco, organizaremos las propuestas en tres grupos. Las “Acciones Universales” responden a necesidades básicas y deben intentarse en cualquier contexto, ajustando su escala. Las “Acciones Sostenibles” requieren continuidad de recursos, capacidades institucionales, o apoyo internacional suficiente. Las “Acciones Estratégicas” exigen mayores inversiones, coordinación, y planificación de largo plazo. La categoría del IGIC ayuda a anticipar qué apoyos serán necesarios, pero no funciona como una prohibición

automática: una sociedad con menor capacidad puede implementar medidas complejas si recibe cooperación sostenida, y una sociedad con alta puntuación puede fracasar si distribuye mal sus recursos.

Comenzaremos por las acciones universales. Ejemplos de estas podrían ser:

1. Creación e implementación de secciones orientadas a la educación en los campamentos para desplazados. Implicaría la necesidad de tener personal docente preparado, junto con el personal médico y militar. Su utilidad será la de informar a los más jóvenes de los pasos a seguir, transmitir tranquilidad, y permitir que los adultos reciban la atención correspondiente sin que tengan que preocuparse por sus hijos.
2. Preparación de material educativo y representativo de situaciones de emergencia y sus protocolos. Actividades didácticas, tarjetas informativas, entre otros. También sería posible que parte de este material educativo estuviera dirigido al personal docente para su capacitación en gestión de crisis.
3. Ofrecimiento de contención emocional por parte de personal educativo calificado. Recordemos que habrá niños que pueden haber perdido a sus familiares directos, o que se encuentran duramente traumatados. La presencia de personal educativo empático y versado en la psicología del niño resultará fundamental para lograr que mantengan la calma.

En el caso de las acciones sostenibles, tenemos, por ejemplo:

1. Construcción de aulas temporales en campamentos para desplazados, las cuales serán utilizadas para la educación y para actividades comunitarias. Deberán ser resistentes ante dificultades climáticas y tener las condiciones necesarias para recibir grupos importantes de niños.

2. Incorporación de tecnología para la educación a distancia, utilizando plataformas educativas internacionales para que los desplazados puedan continuar su formación, en el caso de interrumpirse su acceso a instituciones físicas.
3. Implementación de centros comunitarios de formación y rehabilitación, que ofrezcan formación técnica y profesional para adultos desplazados, permitiendo la reintegración laboral y social postcrisis.

Finalmente, tendríamos que estudiar acciones estratégicas, las cuales solo podrían ser aplicadas con una amplia disponibilidad de recursos. Estas podrían ser:

1. Implementación de infraestructuras educativas resilientes, haciendo que las instituciones preexistentes puedan ser utilizadas como refugios temporales o centros de comando durante una crisis. Estas infraestructuras deberán ser construidas de manera estratégica, atendiendo a su ubicación, su resistencia, y sus instalaciones.
2. Creación de organizaciones gubernamentales especializadas para la investigación y el desarrollo de estrategias educativas adaptadas para crisis humanitarias. Estas organizaciones serán el nexo entre la comunidad internacional y la gestión educativa nacional de crisis. La utilidad de esto será la recolección continua de información sobre posibles desastres, recursos disponibles, y gestión humanitaria, para que el proceso de acción sea mucho más eficiente.
3. Establecimiento de programas integrales y completos de reubicación y reconstrucción postcrisis, que no solo se enfoquen en la asistencia inmediata, sino también en la reconstrucción a largo plazo, incluyendo la reubicación de comunidades enteras, la construcción de viviendas duraderas, y la creación de nuevas oportunidades económicas.

Pasando a otro tema, debemos definir cómo funcionan la infraestructura y la creación de planificaciones educativas de

emergencia, orientadas a desplazados internos. Estos puntos se encuentran regulados por las normas mínimas de la INEE (Inter-agency Network for Education in Emergencies, o Red Interagencial para la Educación en Emergencias), las cuales consisten en cinco dominios principales: normas fundamentales, acceso y ambiente de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, maestros y demás personal educativo, y política educativa. En nuestro caso puntual, debemos recurrir al segundo ámbito “acceso y ambiente de aprendizaje”. Las tres normativas de este ámbito son:

Igualdad de acceso: *“todos los individuos tienen acceso a oportunidades educativas adecuadas y de calidad”.*

Protección y bienestar: *“Los ambientes de aprendizaje son seguros y promueven la protección y el bienestar psicosocial de los educandos, maestros, y otro personal educativo”.*

Instalaciones y servicios: *“Las instalaciones educativas promueven la seguridad y el bienestar de todos los educandos, maestros, y otro personal educativo, y están vinculadas con servicios de salud, de nutrición, de protección, y psicosociales”.*

Comenzaremos por el primero de estos puntos: los llamados “espacios temporales de aprendizaje”. Para orientar nuestro emplazamiento temporal educativo conforme a los estándares de referencia de la INEE, deberemos asegurar múltiples cuestiones. Por ejemplo, deberá ser una zona segura y de fácil acceso, alejada del epicentro de la crisis humanitaria.

Esto también implica que deberá estar alejado de carreteras principales, puntos estratégicos, puntos de distribución, zonas militares, y lugares contaminados o con componentes antihigiénicos. Dentro de nuestro espacio temporal de aprendizaje, deberemos prescindir de objetos peligrosos o potencialmente peligrosos, como armas, objetos de metal, objetos afilados o que puedan romperse y ser dañinos. Debe estar cerca de los niños, y no presentar ninguna limitación geográfica para la

logística de traslado, especialmente si tenemos niños con necesidades especiales.

En cuanto a la infraestructura per se, deberá ser sólida, amplia, y disponer de los servicios básicos como agua potable y saneamiento (la electricidad será importante, pero no indispensable), contando con una higiene apropiada. También deberá ser capaz de proporcionar protección contra el sol, el viento, posibles lluvias, u otras condiciones climáticas. Esto implica directamente una construcción con materiales de calidad y con planificación resiliente.

En cuanto a su tamaño, deberá ser suficientemente amplia como para ser ocupada por un número elevado de estudiantes y personal educativo, así como contar con espacios preparados para el almacenamiento de suministros escolares y, si corresponde, agua, alimento, y objetos de higiene básica, entre otros. La coordinación entre las autoridades locales y las organizaciones aliadas proporcionaría ingenieros, arquitectos y otros especialistas en alojamiento, para determinar si existen estructuras preexistentes que cumplan con los requisitos (o que puedan cumplirlos mediante obras de rápida realización y bajo presupuesto).

Por otra parte, las organizaciones podrían utilizar sus capacidades de gestión de donativos y fondos internacionales para garantizar el abastecimiento de los suministros necesarios y la disponibilidad del personal requerido para su funcionamiento.

Uno de los desafíos a superar en nuestro espacio temporal de aprendizaje será que su uso comience una vez que se cuente con todos los materiales y recursos necesarios. Si esto no se garantiza, corremos el riesgo de que nuestro espacio educativo se convierta rápidamente en un refugio para los desplazados. Es importante que se haga una distinción física entre el lugar donde los niños aprenden y donde los adultos se refugian, por lo que una estructura con recursos planeados meticulosamente para ser utilizados por estudiantes y personal educativo no deberá ser utilizada como refugio de emergencia.

Lograr esto se basa plenamente en actuar con rapidez en su abastecimiento y asegurarse de que todo desplazado encuentre refugio en campamentos diseñados con ese fin, y de que no se resguarde en nuestra estructura educativa. Contando ya con la infraestructura adecuada, deberemos planificar el currículo educativo de emergencia. A pesar de que nuestro objetivo es que la educación del afectado no se vea detenida indefinidamente, resulta evidente que, en condiciones adversas como estas, no hay viabilidad de mantener los programas educativos tradicionales.

Aquí nuevamente debemos basarnos en las normas mínimas de la INEE, haciendo hincapié en los ámbitos tres y cuatro: “enseñanza y aprendizaje” y “maestros y otro personal educativo”. Sin adentrarnos particularmente en ninguna de estas normas, debemos comprender que su objetivo es garantizar que los planes de estudio estén debidamente desarrollados para adaptarse al contexto que corresponde, y que el personal educativo se encuentre debidamente capacitado para proporcionar la información a los estudiantes.

La primera pregunta a hacernos sería acerca de las características que debe poseer una planificación educativa de emergencia. Comenzando por lo básico, debe estar debidamente adaptada al contexto, la cultura, y el idioma de los estudiantes, con componentes de participación activa y motivación intrínseca para que los estudiantes puedan educarse en contextos adversos. Aquí, más que nunca, se deberán identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, evitando a toda costa que los mismos se frustren en cuanto al conocimiento que se busca proporcionar, y atendiendo a las necesidades educativas y humanitarias que puedan presentar.

Es completamente esperable que, en una situación de desplazamiento interno por emergencia, los más jóvenes se encuentren afligidos, con remanentes traumáticos, y con incertidumbre sobre la situación que atraviesan. Por estos motivos, es importante contar con personal capacitado y preparado psicológicamente para afrontar dudas, preguntas, y una desmotivación importante.

Habiendo culminado con el componente general de un currículo de emergencia, podemos adentrarnos en los contenidos que el mismo deberá tener. Existen dos variantes de enfoque: una orientada a la reducción de riesgos en crisis, educación ambiental y prevención de conflictos, y otra orientada hacia el desarrollo educativo tradicional, con competencias fundamentales de lectoescritura y matemáticas, junto con habilidades sociales y emocionales. En nuestra opinión, la más indicada es la que reside en el medio de ambas orientaciones: un enfoque que una los elementos tradicionales de la educación con fundamentos basados en el contexto particular que atraviesan los alumnos.

Esto implica educación en reducción de riesgos, desarrollo y responsabilidad psicosocial, derechos humanos e inclusividad educativa. En ciertos contextos, como en el caso de un conflicto bélico, la educación sobre armamento y trampas militares clásicas del campo de batalla puede hacer la diferencia en la reducción de riesgos altamente presentes mediante contenidos de primeros auxilios, conocimientos de supervivencia, y educación sobre amenazas latentes, como minas terrestres, o sobre medidas sanitarias. El personal utiliza una estrategia clara, basada en el análisis de riesgos, políticas sociales, y necesidades humanas en un contexto particular, para que nuestra planificación sea resiliente a las etapas de una crisis humanitaria, y no se detenga el proceso educativo.

El Clúster Global de Educación define seis componentes educativos que apoyan esta estrategia, considerando las consecuencias clásicas de una situación de emergencia. Estos son: reducción del riesgo de desastres en la educación, educación sobre cambio climático, salud y nutrición escolar, educación sensible a los conflictos y consolidación de la paz, protección infantil en la educación, y protección social en la educación.

Todo esto deberá acompañarse de una preparación y capacitación de todo el personal educativo de emergencia. Esto incluye cursos de educación en contextos críticos, acompañamiento profesional, y formación en primeros auxilios de salud física y mental, entre otras actividades. En caso de no contar con dichas oportunidades previas al

desastre, será labor de la comunidad internacional el proporcionar personal capacitado y experimentado para acompañar y asesorar al personal local.

El Clúster Global de Educación tiene la capacidad de asignar personal altamente calificado y de colaborar con él, mientras el personal local adquiere las habilidades necesarias. Una vez que el clúster sea desactivado, esta formación servirá como antecedente para el personal educativo, incentivándolo a seguir mejorando sus capacidades y habilidades, en caso de que la situación lo requiera nuevamente en el futuro.

Incluir dichos contenidos en la planificación contribuirá a que nuestra sociedad objetivo esté más preparada en lo que respecta a una crisis humanitaria, al mismo tiempo que permite a los niños y jóvenes seguir aprendiendo con normalidad, incluso en un contexto crítico. Por estos motivos, tener prediseñado y estructurado un sistema de respuesta local a nivel educativo debería ser una prioridad para cualquier gobierno, sin importar la región en la que se encuentre.

En un mundo tan globalizado, donde nuestras sociedades dependen tanto las unas de las otras, no existe nación alguna que pueda decirse exenta de riesgos. Por tanto, es nuestra responsabilidad estar preparados, en caso de que una desgracia ocurra más temprano que tarde.

Educación para refugiados

La inclusión educativa de las personas refugiadas debe promoverse desde las primeras etapas de la recepción, con los apoyos que requieran para participar en la sociedad. La educación forma parte de ese proceso y no debe quedar supeditada a una adaptación previa completa. Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones y organizaciones pertinentes, deberán facilitar la continuidad del aprendizaje, el reconocimiento de estudios, y la atención de las necesidades lingüísticas y pedagógicas. El objetivo será evitar interrupciones prolongadas y ofrecer una trayectoria adecuada a cada estudiante.

En 2012, la OIM presentó el Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria (MCOF, documento MC/2355), concebido para articular actividades complementarias de respuesta a la movilidad humana en contextos de crisis. El marco fue complementado por un documento publicado en 2022 con el título “2021 Addendum”.

El MCOF no contiene un protocolo educativo detallado. Esa ausencia, sin embargo, abre un espacio de elaboración que este informe asume de manera explícita. Si traducimos sus principios de gestión de la movilidad al terreno educativo, la respuesta debería integrar desde el comienzo el reconocimiento de estudios, la evaluación de aprendizajes previos, la continuidad documental, la formación lingüística, y la coordinación entre protección social y educación. Esta es una propuesta derivada del MCOF, no una lista atribuida literalmente a la OIM.

En términos operativos, el país receptor deberá crear procedimientos capaces de reconocer certificaciones cuando existan y de reconstruir trayectorias cuando se hayan perdido documentos. La evaluación inicial no debe utilizarse para excluir, sino para ubicar a cada estudiante y diseñar los apoyos necesarios. Cuando haya diferencias con el currículo nacional, la respuesta deberá combinar nivelación, apoyo lingüístico, tutorías, y modalidades flexibles sin convertir esas diferencias en una barrera permanente.

Sin embargo, para poder nivelar hay que conocer las características de este desbalance, lo que se logra mediante evaluaciones diagnósticas. El problema que acarrearán estas “pruebas” es que solo son viables si tenemos claro lo que esperamos del alumno que las realiza. Es decir, para crear y posteriormente calificar una evaluación diagnóstica, el docente debe tener predefinidos cuáles son los aspectos clave del conocimiento que espera que tengan sus alumnos.

Esto último solo es posible tras definir preconceptos sobre lo que consideramos “vitalmente necesario” que un alumno sepa, según su nivel educativo. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo en que no es viable que un alumno que egresa de primaria (en el caso de Uruguay, esto ocurre con 11-12 años) no tenga conocimientos sobre operaciones matemáticas básicas, lectoescritura desarrollada, y nociones básicas en ciencias naturales y sociales.

Por tanto, un refugiado que ingrese a nuestro sistema con la edad suficiente para egresar del nivel primario debería cumplir con estos requisitos mínimos de conocimiento general. Esto puede ser comprobado mediante la evaluación diagnóstica que ya hemos mencionado anteriormente, y que desarrollaremos más adelante.

Si bien pueden existir discusiones sobre qué tan amplio deberá ser nuestro marco de conocimiento vitalmente necesario, siempre que nuestro objetivo radique en que el proceso educativo de los refugiados no se detenga indefinidamente, no es realmente necesario que dicho marco sea exactamente el mismo que el esperado por los nativos.

Los puntos clave de la educación de refugiados serán el idioma, la formación cívica, la cultura, y la integración social; los programas educativos orientados a estudiantes de entre 6 y 12 años (o el equivalente de edad nacional para el ingreso y egreso de la educación primaria) serán muy similares a los orientados hacia nativos, con pequeñas capacitaciones extra (las cuales podrán ser ofrecidas gratuitamente mediante políticas públicas) con un enfoque hacia el aprendizaje del idioma y los modismos tradicionales, junto con información cultural básica.

Estos programas no deberían ser exclusivos para migrantes. La participación de estudiantes nativos puede ampliar sus beneficios, reducir la segregación, y convertir la integración en una experiencia compartida. Cuando se aplican de forma temprana y sostenida, disminuyen considerablemente las dificultades de adaptación académica futura, aunque no las eliminan por completo ni sustituyen el acompañamiento individual.

Adentrados ya en edades superiores a las establecidas anteriormente (o su equivalente nacional en educación media), encontramos las mayores diferencias en cuanto a programas educativos. Si consideramos el caso de un estudiante que migra al país y se encuentra en condiciones para integrarse directamente al sistema educativo en el nivel medio, las probabilidades de que este se encuentre por debajo del estándar nacional son altas. Dado que no existe un consenso global sobre lo que se enseña en cada nivel educativo a nivel internacional, trasladarse a otro país es el equivalente a una reforma completa del currículo nacional de base.

Podemos valernos de tutorías y programas de nivelación, pero esto solo sería posible si la diferencia educativa se mantiene dentro de ciertos márgenes aceptables. No es posible crear un sistema de tutorías con la capacidad de nivelar (en tiempo récord) múltiples niveles de educación media, especialmente si dichos programas “acompañan” al proceso educativo tradicional.

Un gobierno que se enfrente a una crisis de recepción migratoria tiene, dentro del modelo que proponemos, dos vías principales para construir un avance educativo sostenible: la primera sería desarrollar un modelo de educación media basado en la experiencia y el conocimiento práctico básico, preparando de forma efectiva a sus estudiantes de cara a la educación superior. La idea es que, sin la presencia de asignaturas “filtro” que puedan retener al estudiante en desventaja educativa en la educación media, el conocimiento adquirido por experiencias y orientación vocacional podría ser suficiente para llegar positivamente al nivel terciario/universitario.

No obstante, un modelo de estas características requiere de planeación, aplicación, medición, modificación, y muchos otros procesos que pueden durar años, o incluso décadas. En CERLI, hemos presentado variantes educativas al modelo tradicional, que cumplen con los requisitos necesarios para estos fines. Les recomendamos leer nuestros informes *“Sobre Propuestas Educativas de Modernización y Orientación Vocacional”* y *“Para la Creación de un Sistema Educativo Modular”*.

Otra variante de esta misma idea, que suele resultar atractiva para aquellos Estados que priorizan los datos de alfabetización y fuerza laboral por sobre el nivel educativo real de los profesionales, es confiar en el sistema terciario. Frente a una situación que limita a un grupo importante de estudiantes, impidiéndoles avanzar hacia el siguiente nivel educativo, un Estado podría crear una iniciativa educativa alternativa que permita “otorgar facilidades educativas” a la población afectada.

En palabras más cotidianas, se crean programas estatales de finalización de curso, donde se eliminan todos los estándares de aprobación y se hace todo lo posible por otorgar diplomas, tan solo con cumplir con mínimos irrisorios de conocimiento fundamental. Aunque esto pueda sonar como algo específicamente negativo, la realidad es que dependerá del mecanismo a través del cual se realice.

Un ejemplo de un modelo medianamente funcional sería aquel en el que el país en cuestión tuviera un sistema terciario/universitario

basado en el aprendizaje desde cero de la carrera. Si en el país receptor la educación media es simplemente un punto de nivelación de competencias académicas, con el objetivo de orientar tus intereses a la carrera profesional de tu elección, entonces se puede confiar en que, de tener claros tus intereses, no hace falta más que comprobar tus habilidades fundamentales en ciertas áreas clave para poder considerarte “apto” para recibir un diploma de educación media.

Una vez que hayas elegido una carrera universitaria, será la educación superior la que tome las riendas y se responsabilice de que adquieras todo el conocimiento necesario para ser un profesional. Cabe aclarar que este modelo anteriormente mencionado no existe de forma práctica y operativa en ninguna parte del mundo.

Por otro lado, podemos considerar el modelo estadounidense de equivalencia de educación secundaria. Entre sus mecanismos se encuentran el GED y el HiSET. Nos centraremos en el GED (General Educational Development), que evalúa cuatro áreas y cuya aprobación permite obtener una credencial de equivalencia conforme a las reglas de la jurisdicción que la expide. Su reconocimiento y los requisitos para acceder a estudios posteriores dependen de la institución y de la normativa aplicable.

El GED considera las áreas clave de lectoescritura, ciencias, estudios sociales, y matemáticas. La duración total del examen suele rondar las siete horas, donde cada sección se califica en una escala de 100 a 200 puntos. El puntaje mínimo para aprobar es 145 en cada una de las cuatro áreas, aunque ciertos estados pueden exigir requisitos más estrictos. Con un modelo similar, y tras haber recibido tutorías en las áreas más complejas, un refugiado podría convalidar el nivel secundario, sin necesidad de cursarlo nuevamente.

En lo personal, tiendo a preferir medidas como la última mencionada, ya que permiten que no existan discrepancias notables entre las exigencias educativas de los nativos y las de los migrantes. También permiten cuidar a los empleadores, garantizándoles cierto grado de confianza en que no están contratando personal por debajo de lo

esperado, al mismo tiempo que impiden que un migrante sea precarizado por no contar con estudios secundarios reconocidos. Sin embargo, la decisión final deberá tener en cuenta las capacidades políticas y económicas de la nación en particular, lo que hace que sea muy importante tener una amplia gama de opciones en las que fundamentarse.

Lo último que debemos considerar son las pruebas diagnósticas que se realizarán a los refugiados. Estas son de vital importancia ya que, independientemente del mecanismo utilizado para introducirlos al sistema educativo, deberemos ser capaces de asignarlos a un nivel educativo inicial. Esta evaluación serviría como guía para el gobierno y las instituciones educativas, permitiéndoles conocer la situación educativa real de los refugiados, en el caso de no tener herramientas previas para esto. Los parámetros a utilizar para crear la evaluación son, en esencia, los mismos que en los casos anteriores: como esta prueba funciona como introducción educativa en el territorio nacional, necesita las mismas adecuaciones que el refugiado per se. Esto incluye consideraciones idiomáticas, la edad biológica del estudiante, las expectativas del estudiante, y sus potenciales desafíos culturales.

La incorporación educativa debe promoverse lo antes posible, acompañada de apoyos lingüísticos, pedagógicos, y psicosociales adecuados. La evaluación inicial deberá identificar los aprendizajes previos y las necesidades del estudiante, considerando su trayectoria y situación personal. El dominio del idioma local y la estabilidad familiar no deben convertirse en condiciones generales que prolonguen su exclusión educativa; los apoyos y las modalidades transitorias deben facilitar la continuidad del aprendizaje y su inclusión en el sistema.

El formato de la evaluación puede variar considerablemente, ya que podemos hacerla más compleja y desafiante, o más simple y relajada. De manera automática, podríamos comenzar por la modalidad de la misma. Sin embargo, personalmente considero más interesante comenzar por el enfoque curricular ya que, con esta información, será mucho más sencillo vislumbrar qué metodologías y modalidades pueden ser útiles.

Si nuestro currículo está más orientado al desarrollo de pensamiento crítico, investigación, adaptación digital, uso de tecnología, entre otras variantes de estas, entonces una modalidad presencial basada en proyectos sería nuestra mejor apuesta. También podríamos decidarnos por una propuesta más tradicional, con preguntas abiertas y de opción múltiple en combinación. Esta podría ser más eficiente en un formato presencial o virtual sincrónico, pero nunca virtual asincrónico, ya que el refugiado puede haber sufrido una interrupción prolongada en su educación formal, y puede necesitar un guía en tiempo real.

Por otro lado, si tenemos un currículo “anticuado”, basado en competencias de conocimiento general en matemáticas, lingüística, ciencias sociales, y artes, entonces podríamos utilizar cualquier tipo de modalidad y optar por una prueba escrita con preguntas abiertas y cerradas, en una modalidad similar al caso anterior: presencial o virtual sincrónica. Por supuesto, esta prueba es la que menos refleja las competencias académicas reales del estudiante, por lo que debería evitarse a toda costa. Sin embargo, su aplicación es una consecuencia de un currículo nacional de base que no ha sido modernizado adecuadamente.

Sea cual sea la evaluación que decidamos realizar, debemos tener presente que sus resultados pueden verse afectados por múltiples factores, como las barreras lingüísticas, las interrupciones prolongadas de la escolarización, las diferencias curriculares entre el país de origen y el país receptor, la familiaridad con el formato de evaluación, y las condiciones emocionales y culturales del estudiante. Por este motivo, los resultados deben interpretarse meramente como uno de varios elementos para determinar las necesidades educativas y la ubicación más adecuada del alumno. Cuando sea posible, conviene complementar la evaluación inicial con antecedentes escolares, entrevistas, observación docente y evaluaciones posteriores.

La conclusión final es que, al atender la educación de los refugiados, no existe una fórmula única que nos permita establecer equivalencias curriculares, exceptuando el caso en que exista un acuerdo educativo previo entre las naciones actuantes. Las organizaciones y las

instituciones públicas deberán trabajar en conjunto para desarrollar la herramienta correspondiente para cada crisis en concreto, utilizando los parámetros descritos anteriormente como una guía contextual, en términos curriculares y académicos.



Consideraciones adicionales sobre recursos

Una cuestión que suele dejarse de lado cuando se plantea una reforma o modificación educativa es el costo que acarrea su desarrollo e implementación. Desde CERLI, hemos insistido siempre en la importancia de realizar los debidos análisis económicos y de ROI. Afortunadamente, las organizaciones internacionales que llevan adelante los procesos de emergencia han hecho esta clase de análisis previamente. Mediante investigación, hemos podido comprender cuáles son los parámetros utilizados para definir si una medida es aplicable, útil y, sobre todo, viable desde el punto de vista económico.

Comenzando con los desplazados internos, debemos comprender que, independientemente de si hablamos de una organización no gubernamental o de una respuesta impulsada por el sector público, el costo y la capacidad de implementación de las medidas humanitarias pueden variar significativamente. Factores como la disponibilidad de recursos humanos, la infraestructura existente, la capacidad logística y los acuerdos internacionales preexistentes pueden encarecer o abaratar las intervenciones y modificar su viabilidad. Estas variables deben analizarse de forma complementaria al IGIC, ya que no forman parte directamente de la fórmula definida para el índice.

Sin embargo, para poder entender los costos asociados, debemos utilizar como referencia los marcos económicos predefinidos por las organizaciones que los respaldan. Utilizaremos como ejemplo los protocolos de recursos humanos y financieros de UNICEF, aplicables en

casos de crisis humanitarias. Por ejemplo, en el caso de un despliegue de personal, diferenciaremos dos casos particulares: internos y externos. En los primeros, se incluye el personal asociado a la oficina de UNICEF en la región particular, el de otras oficinas regionales, o el perteneciente al equipo de respuesta ante emergencias.

Por otro lado, los despliegues externos incluyen al personal que se obtiene por medio de acuerdos de fuerzas de reservas mundiales (asociados a la organización definida con anterioridad), o al contratado individualmente para llevar a cabo una misión en particular. Sea cual sea el caso, todo el personal asociado a un equipo de respuesta humanitaria tiene asociado un costo significativo conformado por atención psicológica, capacitación, viáticos, salarios, y otros gastos eventuales.

Como el factor económico influye en las posibilidades de respuesta educativa, la planificación debe identificar las necesidades, las capacidades existentes, y los recursos disponibles desde las primeras etapas de la emergencia. Cuando proceda, se activan clústeres a nivel de país conforme a los criterios del IASC, con apoyo de las estructuras globales correspondientes. Los actores de educación deberán contribuir a que sus necesidades se incorporen en los planes y llamamientos humanitarios pertinentes, y evaluar los mecanismos de financiación a los que puedan acceder.

En este ámbito desempeña un papel central la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), encargada de apoyar la coordinación de la respuesta humanitaria internacional. Su marco institucional se remonta a la Resolución 46/182 de la Asamblea General, aprobada el 19 de diciembre de 1991, que fortaleció el sistema de coordinación humanitaria y creó el Departamento de Asuntos Humanitarios.

OCHA surgió posteriormente, en 1998, de la reorganización de dicho departamento. Entre los mecanismos vinculados a su labor se encuentran dos importantes instrumentos de financiación: el CERF y los fondos mancomunados a nivel de país (CBPF), además de mecanismos

operativos de respuesta y coordinación como UNDAC. Vamos a explicarlos más en detalle:

CERF

También conocido como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, es un fondo mancomunado (es decir, nacido de la unión de múltiples aportes internacionales), que se utiliza en los primeros pasos de las acciones de respuesta. Con él, se puede dar financiación a medidas de emergencia de necesidad extrema, especialmente cuando la situación escala rápidamente.

El CERF financia intervenciones humanitarias mediante dos ventanas principales: Respuesta Rápida (Rapid Response) y Emergencias con Financiación Insuficiente (Underfunded Emergencies). Las propuestas deben responder a prioridades humanitarias claramente identificadas y cumplir los requisitos y criterios establecidos por el fondo. La duración prevista depende de la ventana utilizada: los proyectos de Respuesta Rápida tienen normalmente una duración máxima de seis meses, mientras que los financiados mediante la ventana de Emergencias con Financiación Insuficiente pueden extenderse hasta doce meses. Los fondos se conceden directamente a agencias elegibles de las Naciones Unidas y a la OIM; las ONG pueden participar como socios de implementación, pero no reciben directamente subvenciones del CERF.

CBPF

Los Country-Based Pooled Funds (CBPF), o fondos mancomunados a nivel de país, son mecanismos de financiación humanitaria establecidos en países afectados por crisis de gran magnitud. Reúnen contribuciones de diferentes donantes en un fondo común que permite financiar las prioridades definidas para la respuesta humanitaria local. Son administrados por OCHA bajo la autoridad del Coordinador Humanitario correspondiente. A diferencia del CERF, los CBPF pueden

financiar directamente a agencias de las Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, y organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de acuerdo con los mecanismos de elegibilidad y asignación establecidos para cada fondo.

UNDAC:

El sistema de Evaluación y Coordinación de las Naciones Unidas en Casos de Desastre (UNDAC) constituye uno de los principales mecanismos de respuesta de emergencia de OCHA. Está diseñado para apoyar a los gobiernos nacionales, al sistema de las Naciones Unidas y a otros actores humanitarios mediante tareas de evaluación, coordinación y gestión de información durante emergencias repentinas. Sus equipos pueden desplegarse generalmente dentro de las primeras 12 a 48 horas posteriores a una emergencia.

Los recursos movilizados pueden resultar insuficientes frente a las necesidades humanitarias. El llamamiento inicial del Panorama Humanitario Global 2024, publicado por OCHA en diciembre de 2023, estimaba requerimientos de financiación de 46,40 mil millones de dólares. Estas necesidades se revisan durante el año conforme evoluciona la situación.

Al 30 de septiembre de 2024, OCHA registraba 16,21 mil millones de dólares de financiación notificada para los llamamientos coordinados incluidos en el Panorama Humanitario Global 2024. La actualización publicada por OCHA informaba una cobertura del 32,7 % de los requerimientos. Estas cifras corresponden al seguimiento de los llamamientos humanitarios y no representan el saldo de un fondo de caja único disponible para cualquier intervención educativa.

Por este motivo, se intenta hacer hincapié en el uso de fondos dedicados a la educación en casos de emergencias. El más conocido de ellos es “ECW”, o Education Cannot Wait, el cual fue establecido durante la Cumbre Humanitaria Mundial en 2016. ECW es el fondo global de las

Naciones Unidas dedicado a la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Su secretaría está alojada administrativamente en UNICEF, aunque el fondo funciona mediante una estructura de gobernanza propia e independiente. Su objetivo es movilizar y coordinar recursos para garantizar oportunidades educativas a niños, niñas y jóvenes afectados por conflictos, desplazamientos y otras crisis humanitarias.

ECW moviliza aportaciones de gobiernos y de donantes privados y filantrópicos. Su plan estratégico 2023-2026 estableció una meta de financiación de 1.500 millones de dólares para ese periodo. Al describir sus recursos, debemos distinguir esa meta de las contribuciones comprometidas y de los desembolsos efectivamente realizados. Entre sus principales modalidades de inversión en países se encuentran los programas plurianuales de resiliencia (MYRP), orientados a sostener la educación en contextos de crisis prolongadas y a fortalecer los sistemas educativos.

La respuesta inicial de emergencia (First Emergency Response, FER) apoya intervenciones ante nuevas crisis o el deterioro de situaciones existentes. Su ejecución y sus plazos dependen de las condiciones de cada emergencia y de la coordinación entre los actores participantes. ECW también dispone de la Acceleration Facility para apoyar iniciativas de alcance más amplio.

Pero, incluso con todas estas potenciales vías de financiamiento y acción, el número de situaciones de emergencia y las necesidades crecientes de los afectados hacen que estos presupuestos de miles de millones acaben siendo demasiado pequeños. Por tanto, es sencillo concluir que, incluso en el caso de que la comunidad internacional brinde un apoyo relevante en la gestión de una crisis, todo el capital monetario y humano que se podrá destinar a educación no resultará suficiente en la amplia mayoría de los casos.

Los recursos disponibles, considerando la última década de crisis humanitarias, no han demostrado ser eficientes en la atención educativa

general durante emergencias, al menos considerando el alcance de las mismas.

Es aquí donde la responsabilidad del cambio vuelve a recaer en la política interna de cada nación, ya sea mediante un aporte internacional más significativo a los fondos de crisis o mediante la creación de fondos nacionales y organizaciones gubernamentales de gestión educativa de emergencia. Si los países dedicaran una porción de sus recursos a la sostenibilidad del sistema educativo con fines de resiliencia, las probabilidades de sufrir un golpe educativo tras una crisis de cualquier índole se reducirían considerablemente.

Incluso sin la necesidad de aumentar las cifras económicas dedicadas a situaciones de emergencia, las organizaciones internacionales se verían considerablemente beneficiadas si todos los países invirtieran en desarrollar vías de comunicación y colaboración en emergencias más eficientes. Se desperdician mucho tiempo y recursos en la “coordinación mal coordinada” de acción y respuesta, lo que acaba resultando en una menor cantidad de recursos disponibles para atender las necesidades de los afectados. Una comunicación más fluida entre los organismos de acción estatal y la comunidad internacional podría resultar en un ahorro de recursos de emergencia considerable.

Además de las intervenciones dirigidas a desplazados internos, la planificación debe considerar los recursos necesarios para la recepción e integración de personas refugiadas y migrantes. Para ilustrar el alcance de un plan regional, utilizaremos un ejemplo anunciado por la Organización Internacional para las Migraciones en 2018. En abril de 2018, la OIM anunció un Plan de Acción Regional para fortalecer la respuesta a los flujos de venezolanos en las Américas y el Caribe. Se trataba de una iniciativa específica de apoyo a la respuesta regional, y sus necesidades presupuestarias deben interpretarse dentro de ese periodo y alcance.

El plan estimaba necesidades de financiación de 32,3 millones de dólares para dos años. Esa cifra corresponde al plan anunciado en 2018 y no representa el presupuesto total de atención a la población

venezolana ni una estimación general del costo educativo de cada persona.

El plan buscaba apoyar y coordinar la respuesta de los gobiernos y de las organizaciones asociadas ante las necesidades de la población venezolana. La descripción de sus objetivos no permite deducir que toda educación de refugiados y migrantes quede excluida de la financiación internacional. La inclusión educativa requiere combinar recursos nacionales con la cooperación y la financiación internacional disponibles en cada contexto. La elegibilidad y el alcance de cada mecanismo dependen de sus objetivos, prioridades, y condiciones, por lo que la planificación debe identificar las fuentes efectivamente accesibles y prever la continuidad de las intervenciones.

Para estimar el costo educativo asociado a la recepción de estudiantes refugiados o migrantes, no resulta adecuado calcular el valor acumulado de toda su trayectoria educativa. La inversión relevante dependerá del momento en que cada estudiante ingrese al sistema, de sus necesidades particulares y de la capacidad disponible en las instituciones receptoras. Por este motivo, resulta más útil trabajar con el concepto de costo educativo incremental, es decir, los recursos adicionales que el sistema deberá movilizar como consecuencia de la incorporación de nuevos estudiantes. Este costo no será uniforme y deberá calcularse para cada contexto.

En una primera instancia, deberán considerarse los costos educativos ordinarios correspondientes al nivel en que el estudiante sea incorporado. A ellos podrán añadirse costos específicos de integración, como evaluaciones diagnósticas y de reconocimiento de aprendizajes previos, apoyo lingüístico, nivelación curricular, materiales educativos, acompañamiento psicosocial, capacitación docente, gestión administrativa y, cuando sea necesario, servicios de traducción o mediación intercultural.

El impacto presupuestario también dependerá de la capacidad ociosa del sistema. Cuando las instituciones existentes puedan absorber nuevos estudiantes sin ampliar significativamente su estructura, el

costo adicional podrá ser relativamente limitado. En cambio, una llegada numerosa o geográficamente concentrada puede exigir la contratación de personal, la ampliación de turnos, el transporte de estudiantes o incluso inversiones adicionales en infraestructura. Una estimación útil debería partir de la cantidad y características de los estudiantes que se incorporarán, identificar las necesidades adicionales que presenta cada grupo y calcular los recursos marginales necesarios para atenderlas. A partir de estos elementos pueden construirse distintos escenarios presupuestarios de corto y mediano plazo.

También pueden utilizarse mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos, pruebas de equivalencia, programas de nivelación y otras vías alternativas cuando sean apropiadas para el estudiante y estén reconocidas por el sistema educativo receptor. Estas herramientas no deben suponerse necesariamente más baratas que la escolarización tradicional: su conveniencia dependerá de los costos de implementación, de la cantidad de beneficiarios y, principalmente, de su capacidad para facilitar una integración educativa y laboral efectiva.

En definitiva, no existe una cifra universal que permita determinar de antemano cuánto costará garantizar la continuidad educativa de una persona afectada por una situación de emergencia. La inversión necesaria dependerá del contexto, de las características de la población atendida, de la capacidad disponible en el sistema educativo receptor y de las necesidades adicionales que deban cubrirse para garantizar una integración efectiva.

Por este motivo, la planificación de recursos debe realizarse de forma flexible y progresiva. Los fondos internacionales pueden complementar la respuesta nacional, pero difícilmente sustituyan por completo la infraestructura, el personal y las capacidades institucionales que cada país debe mantener. Además, el conocimiento técnico, la capacidad logística, la infraestructura disponible, la información, las herramientas tecnológicas y las redes de cooperación pueden resultar tan importantes como el financiamiento directo. Una respuesta educativa sostenible dependerá, en buena medida, de la capacidad de combinar todos estos elementos y movilizarlos en el momento adecuado.

Es precisamente en este punto donde las alianzas entre instituciones educativas, organismos públicos, organizaciones internacionales y actores privados adquieren una importancia particular. Contar previamente con redes de colaboración puede reducir los tiempos de respuesta, facilitar el acceso a recursos especializados y ampliar las capacidades disponibles cuando una situación de emergencia supera las posibilidades ordinarias del sistema educativo.



Organizaciones aliadas

Como organización, poseemos múltiples alianzas estratégicas con aquellos líderes del desarrollo educativo, y trabajamos en conjunto con ellos para poder ayudarlos a mejorar sus tecnologías y su logística, para luego intentar integrarlos con las principales instituciones educativas. Desarrollar esta red empresarial no es sencillo, ya que requiere estudiar cada candidato individualmente y luego intentar crear una vía de negocios y logística donde ambas partes ganen.

Para realizar este trabajo, se suelen tener en cuenta factores como la infraestructura disponible, los presupuestos asignados a desarrollo tecnológico, las estructuras digitales preexistentes, la compatibilidad de las tecnologías con los objetivos educativos de la institución, la capacitación de personal, la relación costo-beneficio, el retorno de inversión, el cambio generacional, entre muchos otros.

En situaciones de emergencia, hacer este trabajo es prácticamente imposible. Todos los parámetros anteriores dejan de tener sentido cuando la satisfacción de necesidades y el acceso a servicios básicos pasan a ser lujos. No es posible pensar en objetivos educativos y cambio generacional cuando los estudiantes sufren de inanición y deshidratación. No es posible pensar en infraestructura disponible y estructuras digitales preexistentes cuando no existe infraestructura alguna. No es posible pensar en la relación costo-beneficio, ROI, o presupuestos cuando se atraviesa una economía de guerra.

Este informe se realizó con el objetivo de apoyar a las instituciones, a los gobiernos, a las organizaciones, y a los profesionales en la realización

de la labor educativa en un contexto de crisis. Las medidas detalladas anteriormente son medidas de emergencia igual que todas las demás, con la diferencia de que fueron diseñadas por expertos en tiempos de paz, lo que permitió que sus beneficios y consecuencias pudieran estar calculados con precisión.

Sin embargo, nada de esto sería posible sin un enorme número de organizaciones, las cuales dedican sus esfuerzos a combatir las duras y desafiantes situaciones de emergencia, arriesgando sus propias vidas. Algunas de estas nos han apoyado (directa o indirectamente) durante la elaboración de este informe. Nos han conmovido con sus historias, con sus valores, y con su actitud positiva y esperanzadora frente al desastre, mientras comparten, con lágrimas en los ojos, el orgullo que les genera ver hasta dónde han llegado.

Desde CERLI, no quisimos dejar pasar la oportunidad de compartir con nuestra comunidad académica de lectores una breve sección donde detallamos y destacamos la labor de múltiples organizaciones humanitarias que, con su accionar, pueden tener un gran impacto en la aplicación de un sistema educativo de emergencia. Agradecemos a todas las organizaciones y líderes comunitarios que, de manera desinteresada y empática, nos brindaron su apoyo y asesoría para esta sección en concreto y para el artículo en su totalidad. A pesar de que hemos debido elegir entre muchas de ellas, queremos reconocer la labor de todas ellas mediante este mensaje, impulsándolas a seguir marcando la diferencia en la vida de todos aquellos individuos que, por desgracia, han sido afectados por una crisis humanitaria.

A su vez, impulsamos a todos aquellos que lean esta sección a informarse y aprender más sobre las labores y aportes que realizan estas organizaciones día tras día, y a asesorarse sobre cómo pueden aportar su granito de arena.

INEE

La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, por sus siglas en inglés) es una red mundial abierta creada en 2000. No es una ONG operativa más: su valor específico consiste en reunir a quienes producen conocimiento, fijan estándares, financian, coordinan, y ejecutan respuestas educativas. Esa posición le permite convertir experiencias dispersas en un lenguaje común para defender que la educación es una parte esencial de la acción humanitaria.



La INEE reúne a una comunidad mundial integrada por agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, instituciones académicas, centros de investigación, profesionales, y personas vinculadas con comunidades afectadas. La diversidad de esa membresía es una de sus principales fortalezas: permite contrastar experiencias, producir orientaciones compartidas, y llevar las necesidades educativas desde el terreno hasta los espacios internacionales de decisión. Si se mantienen cifras de miembros o países, deberán acompañarse del año exacto informado por la INEE.

Su manera de operar es sumamente interesante, ya que posee multitud de ejes en los que actúa humanitariamente. Entre sus principales objetivos, destaca la mejora de la coordinación entre las organizaciones y agencias que trabajan en educación en emergencias. En crisis donde múltiples actores están involucrados, la coordinación es esencial para evitar duplicaciones y asegurar que los recursos lleguen a las personas más necesitadas. Además, se enfoca en desarrollar normas

y directrices que sirvan de guía a los actores en el terreno, promoviendo respuestas educativas coherentes y de calidad.

Otro de los pilares fundamentales de la INEE es la provisión de recursos técnicos y herramientas de capacitación, que ayudan a los actores humanitarios a mejorar su capacidad de respuesta. A través de la difusión de estudios de casos, investigaciones y buenas prácticas, la INEE busca fortalecer la base de conocimientos en el campo de la educación en situaciones de emergencia.

Uno de los recursos más reconocidos de la INEE son las Normas Mínimas para la Educación: Preparación, Respuesta, Recuperación. Su primera edición se publicó en 2004, fue actualizada en 2010, y tuvo una nueva edición en 2024. Constituyen un marco de referencia para mejorar la calidad, el acceso, y la rendición de cuentas en la respuesta educativa. La síntesis que sigue toma como referencia la edición de 2010 y comprende las siguientes categorías:

Fundamentos: aquí se ven condensados factores esenciales, tales como la participación comunitaria, la coordinación entre actores y el análisis de la situación.

Acceso y ambiente de aprendizaje: se debe asegurar, mediante una correcta colaboración entre los sectores correspondientes, un acceso equitativo a la educación, en un entorno seguro y protector.

Enseñanza y aprendizaje: cumplir todos los estándares de calidad académica, desde la relevancia del currículo hasta los métodos pedagógicos y el apoyo a los estudiantes.

Docentes y otro personal educativo: Garantizar la contratación, capacitación y bienestar del personal educativo en situaciones de emergencia.

Política educativa: Implica la colaboración con gobiernos y autoridades locales para desarrollar políticas educativas que respondan

a las necesidades de las poblaciones en crisis. Suele ser el desafío principal en esta clase de situaciones.

La red trabaja en estrecha colaboración con el Fondo Mundial para la Educación en Emergencias, el cual consiste en un fondo multilateral creado en 2016, utilizado mayormente para movilizar recursos y atención al sector educativo en tiempos de crisis humanitaria. Juntos, buscan aumentar el financiamiento y así asegurar que la educación esté en el centro de las respuestas humanitarias.

La INEE no interviene directamente como ejecutora en cada emergencia; su influencia opera a través de los estándares, herramientas, capacidades, y redes que utilizan los actores del terreno. En otras palabras, ayuda a que respuestas distintas compartan criterios de calidad, protección, participación, y rendición de cuentas. Su principal límite sigue siendo estructural: mientras la educación reciba financiación tardía e insuficiente, incluso los mejores estándares encontrarán dificultades para convertirse en servicios sostenidos.

Agradecemos profundamente a la INEE por su accionar, y les deseamos muchos éxitos en la continuidad de sus misiones. El desafío que enfrentan es uno que, como organización, comprendemos profundamente. Con nuestros mejores deseos, esperamos que puedan continuar influyendo en la vida de millones de NNA, que se ven obligados a detener su proceso educativo por una situación de emergencia. A su vez, aplaudimos el rol clave que han tomado en la defensa y promoción del derecho a una educación segura y de calidad en todos los contextos.

Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional fundada por médicos y periodistas el 22 de diciembre de 1971 en París, Francia. Entre los acontecimientos que influyeron en su creación se encuentran la guerra y la hambruna de Biafra, en Nigeria, y las inundaciones de 1970 en Pakistán Oriental, territorio que actualmente corresponde a Bangladesh. Las experiencias de médicos y periodistas frente a estas crisis impulsaron la creación de una organización capaz de brindar asistencia médica de emergencia de forma rápida, independiente e imparcial.



Las limitaciones de los gobiernos en situaciones de crisis, sumadas a conflictos de interés tanto políticos como ideológicos, podrían causar la muerte y el sufrimiento de personas que, sin estas limitaciones, podrían haberse salvado. Con esta idea, nace una organización basada en cuatro principios básicos:

Neutralidad: Médicos Sin Fronteras no toma partido entre las partes de un conflicto armado. Este principio orienta su acción médica y es compatible con su labor de testimonio y denuncia de las situaciones que afectan a las poblaciones atendidas.

Imparcialidad: la atención brindada por esta organización se centra únicamente en las necesidades médicas de la población afectada. Esto quiere decir que no existe ninguna clase de discriminación por raza,

religión, ideología política, rol en el conflicto, ni ningún otro factor externo a la labor médica.

Independencia: para poder garantizar los puntos anteriores, Médicos Sin Fronteras se financia mediante donaciones privadas. Solo un porcentaje menor del presupuesto total proviene de instituciones públicas y gobiernos. Esto le permite mantener una autonomía total sobre las decisiones de logística, como por ejemplo en dónde y cómo intervenir.

Testimonio: una de las principales características distintivas de Médicos Sin Fronteras es que, además de su atención médica, da su testimonio acerca de lo que ocurre en las zonas donde opera. Su independencia le permite denunciar violaciones a los derechos humanos, abusos, malas gestiones, entre otros. Fue este mismo punto el que le permitió ser distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 1999, donde el comité destacó la impresionante labor médica en crisis y su valentía al hablar en nombre de los afectados.

Además de los puntos anteriores, destacamos la publicación de informes de actividad y financieros que permiten conocer el trabajo de Médicos Sin Fronteras y el uso de sus recursos. Esta información facilita la rendición de cuentas ante sus colaboradores y ante la sociedad.

Por nombrar algunas de sus misiones humanitarias más importantes, tenemos la Guerra Civil en Siria en 2011, los brotes de ébola en África Occidental entre 2014 y 2016, la crisis de refugiados rohingya de Myanmar en 2017, y muchas más. Sin embargo, gestionar un equipo de atención en situaciones de emergencia no es una tarea sencilla, ni mucho menos se encuentra exenta de riesgos. Uno de los mayores desafíos que enfrenta toda organización (incluso aquellas que forman parte de las Naciones Unidas) es la necesidad de permisos y libertad por parte de los gobiernos en situación de crisis.

Los ataques contra instalaciones sanitarias representan un grave obstáculo para prestar atención médica en una zona de guerra. En octubre de 2015, un ataque aéreo estadounidense destruyó el centro de

trauma de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. MSF confirmó posteriormente al menos 42 fallecidos: 14 integrantes de su personal, 24 pacientes, y 4 cuidadores. La valentía de esta organización y el riesgo que asume de forma continua por su innata misión humanitaria hacen que Médicos Sin Fronteras sea una organización modelo, que representa los valores humanos y la empatía de todo aquel que conecta con una crisis.

Sus misiones no pueden garantizar la seguridad en contextos que, por definición, son inseguros; sí sostienen un principio fundamental: que la necesidad médica, y no la nacionalidad, la religión, o la afiliación política, sea el criterio de atención. Esa práctica convierte a Médicos Sin Fronteras en una referencia humanitaria y recuerda que la neutralidad no es indiferencia, sino una forma de llegar a quienes de otro modo quedarían sin asistencia.

Desde CERLI, esperamos que continúen expandiendo su mensaje y accionar en todo el mundo, siendo el referente clave que han sido desde su creación. Los alentamos a seguir inspirando a aquellos que sienten la vocación de ayudar al prójimo en crisis, así como nos inspiraron a nosotros durante la elaboración de este artículo.

Save the Children

Save the Children es una organización no gubernamental, fundada en 1919 por Eglantyne Jebb y Dorothy Buxton, en Reino Unido. Oficialmente, su misión era aliviar el sufrimiento de los niños afectados durante la Primera Guerra Mundial. No obstante, con el pasar de los años, esta organización evolucionó para atender cualquier situación que afecte a los niños, incluyendo cualquier tipo de catástrofe o crisis humanitaria, codirigiendo el Clúster Global de Educación junto con UNICEF en Ginebra, Suiza.



Su funcionamiento actualmente se basa en una alianza internacional entre más de 30 organizaciones nacionales, operando en más de 120 países. Si bien cada una de estas organizaciones es autónoma, actúan en conjunto cuando existe una campaña global o un proyecto de interés común. Como toda ONG, se financia mediante donaciones individuales, corporativas, gubernamentales, y de entidades asociadas. Sin embargo, también se han caracterizado por realizar distintivas campañas de recaudación de fondos, de cara a las agencias de financiación internacional.

Sus enfoques se basan en cuatro ámbitos principales, vinculados a los derechos humanos de los NNA (niños, niñas, y adolescentes): educación, salud, protección y emergencias. Sostenida en dichos cuatro pilares, Save the Children ha iniciado proyectos de alto impacto, que abarcan la construcción de escuelas, campañas de vacunación y nutrición, programas de protección contra la violencia, el abuso, la explotación, y el abandono, y la respuesta a situaciones más complejas, como crisis humanitarias. Algunos de sus proyectos más recordados y laureados son

“Rewrite the Future”, una campaña global con el objetivo de atender las necesidades educativas de niños afectados por situaciones de emergencia, y “Every Last Child”, una campaña enfocada hacia los niños en condiciones precarias y marginales, con el objetivo de atender sus necesidades básicas como salud y educación.

Como organización, se enfrentan a los desafíos clásicos de una situación de emergencia: falta de financiación, restricciones de las autoridades locales o de grupos armados, y la desafiante necesidad de adaptarse a contextos diversos, pero siempre complejos. Aun así, nunca reniegan de su labor, y han impactado significativamente en la vida de millones de niños en todo el mundo, jugando un papel crucial en la reducción de la mortalidad infantil en ámbitos críticos, en el aumento del acceso a la educación, y en la protección de los derechos de los niños.

En su historia, han participado de múltiples crisis humanitarias en todo el mundo. Algunos de estos ejemplos son la guerra civil en Siria desde el año 2011, las hambrunas y conflictos armados en Somalia, la guerra civil en Yemen desde 2015, el terremoto en Nepal del mismo año, y el ciclón Idai en Mozambique en 2019. A lo largo de más de un siglo de actividad, Save the Children ha participado en numerosas crisis humanitarias y situaciones de emergencia en distintas regiones del mundo. Desde 2007, codirige el Clúster Global de Educación junto con UNICEF.

Una de las contribuciones históricas más importantes vinculadas a Save the Children fue la elaboración, por parte de su fundadora Eglantyne Jebb, de una declaración sobre los derechos de la infancia que serviría de base para la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Sociedad de Naciones en 1924. Este documento constituyó uno de los primeros hitos internacionales en el reconocimiento específico de los derechos de la infancia y ejerció influencia sobre instrumentos posteriores. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva Declaración de los Derechos del Niño y, treinta años después, el 20 de noviembre de 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Su misión es entrañable y su labor es admirable. Sin duda alguna, Save the Children es un ejemplo a seguir para todas las organizaciones que buscan cuidar la infancia y sus necesidades. Les enviamos todo nuestro apoyo y nuestros mejores deseos, y deseamos que sigan cosechando éxitos en el ámbito humanitario, que tanta falta hace en el mundo moderno.



Amnistía Internacional

Amnistía Internacional es una organización no gubernamental internacional, fundada en el año 1961 por el abogado británico Peter Benenson. Su función es velar por que todos los individuos gocen plenamente de sus derechos, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, y garantizar su ejercicio. Embarcada en esta misión, Amnistía Internacional toma la responsabilidad de investigar, concientizar y exponer cualquier caso de violación a los derechos humanos.



Lograr esto no es tarea sencilla: primeramente, se movilizan sus recursos rápidamente hacia la situación de crisis que lo amerite. Luego, se debe realizar una investigación adecuada y rigurosa, donde se documenten con claridad los casos de abuso de los derechos humanos. Ya que esto suele acabar en que ciertos organismos estatales e internacionales sean señalados como culpables, es fundamental que se cuente con todas las evidencias necesarias para sustentar una denuncia de este calibre.

Una vez realizada la investigación, se publica un informe donde se informa detalladamente sobre la situación estudiada, presionando a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto. Por último, Amnistía Internacional organiza campañas de concientización acerca de las formas más comunes de violación a los derechos humanos, buscando sensibilizar y movilizar a todo aquel que escuche su mensaje y evitar que el hecho quede sepultado.

Algunas de sus campañas más importantes han sido respecto a temas como la pena de muerte, las personas encarceladas por motivos ideológicos, políticos, religiosos, o de cualquier otra índole (a las cuales denominan “presos de conciencia”), la violencia de género, la discriminación, el abuso, entre muchos otros temas. Con motivo de este artículo, destacamos también su labor humanitaria con respecto a los refugiados, y sus campañas contra el abuso y los prejuicios contra aquellos que buscan vidas dignas en países vecinos, especialmente tras haber sido golpeados por una situación de emergencia.

Como podrán imaginar, la tarea de denunciar un mal accionar por parte de un grupo de personas, o incluso de gobiernos enteros, puede despertar cierta suspicacia en quien lo observa. Si la organización se ve obligada a denunciar múltiples casos de violación de derechos humanos, donde exista un factor común en ideologías políticas y religiosas (independientemente de si las mismas juegan un rol o no), es altamente probable que aquellas personas que compartan dicha ideología interpreten que Amnistía Internacional se está posicionando ideológicamente al criticarlas.

La financiación de Amnistía Internacional procede principalmente de sus miembros y de donantes particulares. Esta base financiera es una decisión institucional, no un detalle administrativo: busca reducir la dependencia de gobiernos, partidos, y actores económicos cuya influencia podría comprometer sus investigaciones o campañas. La independencia nunca se obtiene por declaración; exige reglas de aceptación de fondos, transparencia, y control permanente de posibles incompatibilidades.

Es una organización muy importante en un contexto de opresión y emergencias, logrando unir las voces de millones de personas en la búsqueda de un cambio. Desde CERLI, les deseamos éxito en su misión humanitaria y en su deber de mantenerse imparciales e independientes de las ideologías, sin importar su procedencia.

Norwegian Refugee Council

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria independiente dedicada a proteger y asistir a las personas afectadas por el desplazamiento. Sus orígenes institucionales se remontan a 1946, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en Noruega Europahjelpen (“Ayuda a Europa”), una iniciativa destinada inicialmente a movilizar ayuda para las poblaciones y los refugiados afectados por la devastación de la posguerra europea.



Con el paso del tiempo, esta iniciativa evolucionó hasta convertirse en el actual Consejo Noruego para Refugiados y amplió progresivamente su ámbito de actuación hacia las crisis de desplazamiento en distintas regiones del mundo.

El Norwegian Refugee Council trabaja en decenas de países afectados por conflictos, desastres, y desplazamientos prolongados. Una de sus capacidades distintivas es NORCAP, su mecanismo global para proporcionar especialistas a organizaciones humanitarias, instituciones nacionales, y otros socios. La utilidad del modelo no se limita a “enviar expertos”: permite incorporar capacidades técnicas allí donde una crisis desborda los recursos existentes y, al mismo tiempo, fortalecer a las instituciones que deberán sostener la respuesta.

Los despliegues pueden apoyar tanto emergencias inmediatas como procesos de largo plazo. Su rapidez dependerá del perfil requerido, la

disponibilidad, los acuerdos con la organización receptora, el acceso, y las condiciones de seguridad. Por eso, el valor de NORCAP debe explicarse por su flexibilidad y especialización, no mediante la promesa de un plazo universal de 48 a 72 horas.

El NRC recibe una parte importante de su financiación de gobiernos y organismos multilaterales, además de donaciones privadas. Esa estructura crea un riesgo de influencia que no debe negarse, sino gobernarse. A nuestro juicio, el caso del NRC demuestra que la financiación pública puede ser compatible con una actuación humanitaria independiente cuando existen mandatos claros, diversidad de donantes, transparencia, rendición de cuentas, y capacidad real para sostener decisiones basadas en necesidades. La independencia no depende únicamente del origen del dinero, sino de las condiciones bajo las cuales se acepta y se utiliza.

Algunas de sus misiones más recordadas incluyen la crisis de refugiados en el Líbano y Jordania, la crisis del ébola en África occidental, y las inundaciones en el sudeste asiático. Todas estas y muchas más fueron atendidas por el grupo de respuesta NORCAP, que actuó a corto plazo brindando apoyo de emergencia, a mediano plazo acompañando la recuperación social, y a largo plazo desarrollando sistemas resilientes y de mitigación en los países en riesgo. Su accionar sostenible y extenso le ha brindado un gran prestigio en la comunidad internacional, siendo una de las organizaciones humanitarias más respetadas y eficaces, especialmente en su accionar durante una situación de emergencia.

Desde CERLI, y especialmente de parte de quien les habla, les deseamos éxitos y buena fortuna. Les agradecemos profundamente toda colaboración, y los alentamos a seguir mejorando y salvando las vidas de quienes más los necesitan. Su labor es admirable, y su actitud es digna de admirar, y esperamos que logren continuar con su buena fe y sus misiones humanitarias.

Epílogo

A lo largo de este artículo, hemos explorado lo frágiles que resultan ser nuestro mundo, nuestras sociedades, y nuestras propias vidas. Hemos sido testigos de lo desafiante y peligroso de vivir una situación de emergencia y de lo fácilmente que podemos perder, de un segundo a otro, todo lo que creemos permanente. Esto, que para la mayoría de nosotros puede parecer una anécdota más de lo que ocurre del otro lado del mundo, es más bien una advertencia de que nadie está exento de sufrir las consecuencias de una crisis.

Cuando pienso en qué constituye realmente una situación de emergencia, simplemente se me ocurre expresar que es el equivalente a sufrir todos los problemas que un país puede tener, al mismo tiempo. Por lo tanto, es deber de nuestros Estados y nuestro cuerpo político planificar el desarrollo de nuestra nación de forma sostenible y resiliente, para así estar preparados cuando un suceso de estas características, inevitablemente, ocurra. Y así como en la vida misma de la política, la educación suele quedar rezagada y reducida a las migajas del presupuesto de emergencia. Por este motivo, el trabajo conjunto de los centros de investigación, la comunidad internacional, y las organizaciones humanitarias resulta fundamental para asegurar que nuestros gobiernos no se olviden de atender la educación.

Esta investigación busca, de forma integral, compartir con todos los adeptos a la educación el funcionamiento de esta necesidad fundamental en un contexto de emergencia. Junto con esto, busca transmitir tranquilidad al público general mostrando que, incluso en tan complejas situaciones, los expertos hemos trabajado incansablemente para encontrar soluciones innovadoras para estos desafíos. Sin embargo, también es importante aclarar que, entre nuestras intenciones

más profundas, se encuentra la de impulsar y forzar a los gobiernos de todos los países a adoptar modelos más resilientes y preparados. No hay que ser necios y pensar que estas situaciones solo ocurren en el resto del mundo, y que, si nuestras condiciones demográficas son favorables, no debemos adelantarnos a esta posibilidad.

Justamente este fue el razonamiento que, en 2020, llevó al mundo entero a su límite durante la pandemia del COVID-19. Y así como en este caso, podemos nombrar cientos de ejemplos en los que la sociedad adoptó una mentalidad negacionista del riesgo, y el tiempo le acabó pasando factura. No permitamos, como sociedad, que los políticos vean solo lo que tienen justo delante de sus ojos; seamos nosotros quienes exijamos ver modelos preparados ante cualquier amenaza.

Que este informe sirva como ladrillo fundamental para nuestros colegas, para que desarrollen mejores y más resilientes sistemas educativos de emergencia. Como hemos hecho anteriormente, aportamos nuestro granito de arena a la comunidad académica, y esperamos haber logrado nuestros objetivos divulgativos y colaborativos.

Bibliografía

1. Acinas Acinas, M. P. (2007). Información a la población en situaciones de emergencia y riesgo colectivo. *Psychosocial Intervention*, 16(3), 303–321. <https://doi.org/10.4321/S1132-05592007000300002>
2. Aiyar, S., Barkbu, B. B., Batini, N., Berger, H., Detragiache, E., Dizioli, A., Ebeke, C. H., Lin, H., Kaltani, L., Sosa, S., Spilimbergo, A., & Topalova, P. (2016). The refugee surge in Europe: Economic challenges (IMF Staff Discussion Note No. 16/02). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513552590.006>
3. Alvarez-Plata, P., Brücker, H., & Siliverstovs, B. (2003). Potential migration from Central and Eastern Europe into the EU-15: An update. Report for the European Commission, DG Employment and Social Affairs. DIW Berlin.
4. Amnistía Internacional. (2016). Tackling the global refugee crisis: From shirking to sharing responsibility (POL 40/4905/2016).
5. Amnistía Internacional. (2024a). La situación de los derechos humanos en el mundo: Abril de 2024. Amnistía Internacional.
6. Amnistía Internacional. (2024b). Our finances. <https://www.amnesty.org/en/about-us/finances-and-pay/>
7. Arellano, Á. (2019). Venezolanos en el Uruguay: Relatos, historias y datos de los inmigrantes que desembarcaron en la patria celeste. Konrad Adenauer Stiftung.

8. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1991). Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas (Resolución 46/182, 19 de diciembre de 1991).
9. Azose, J. J., & Raftery, A. E. (2015). Bayesian probabilistic projection of international migration. *Demography*, 52(5), 1627–1650. <https://doi.org/10.1007/s13524-015-0415-0>
10. Barros Rodríguez, F., Soriano Miras, R. M., & Trinidad Requena, A. (2022). Desarrollo industrial, trabajo y migración: el caso del norte de Marruecos. *Revista Española de Sociología*, 31(1), a89. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.89>
11. Beevor, A. (2012). La Segunda Guerra Mundial. Pasado & Presente.
12. Berriane, M. (2004). La larga historia de la diáspora marroquí. En B. López García & M. Berriane (Dirs.), *Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España* (pp. 24–26). Universidad Autónoma de Madrid / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
13. Bidegain, G. (2013). Impactos demográficos del terremoto de Haití. *Cuestiones de Población y Sociedad*, 2(2), 107–132.
14. Bijak, J. (2011). Forecasting international migration in Europe: A Bayesian view. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-8897-0>
15. Bijak, J. (2016). Migration forecasting: Beyond the limits of uncertainty (Global Migration Data Analysis Centre, Data Briefing Series, Issue 6). International Organization for Migration.
16. Bodon, M. C. (2020). Intervenciones de primera respuesta en situaciones de emergencias y catástrofes: “Primeros auxilios psicológicos/emocionales”. En XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXVII Jornadas de Investigación, XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR, II Encuentro de

- 17.** Böhme, M. H., Gröger, A., & Stöhr, T. (2020). Searching for a better life: Predicting international migration with online search keywords. *Journal of Development Economics*, 142, 102347. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.04.002>
- 18.** Boubtane, E., Dumont, J.-C., & Rault, C. (2016). Immigration and economic growth in the OECD countries 1986–2006. *Oxford Economic Papers*, 68(2), 340–360. <https://doi.org/10.1093/oep/gpw001>
- 19.** Bündnis Entwicklung Hilft, & Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). (2023). *WorldRiskReport 2023*. Bündnis Entwicklung Hilft.
- 20.** Cabrera Pérez, S. A. (2020). Reflexiones sobre la continuidad educativa ante situaciones de emergencia. En *Décimo Primer Coloquio Interinstitucional de Profesores*. Universidad Iberoamericana Puebla.
- 21.** Carrera Reyes, M. G. (2018). Señores de la guerra y su influencia en estados frágiles: Caso Charles Taylor en Liberia 1986–1997 [Disertación de grado]. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- 22.** Cavaletto, G. A. (2012). El terremoto de Haití 2010: Una evaluación de la respuesta humanitaria: coordinación, financiamiento y reconstrucción [Tesis de Magíster en Estudios Internacionales]. Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales.
- 23.** Center for Educational Research, Learning & Innovation (CERLI). (2024). Para la creación de un sistema educativo modular. *The Orvium Education Journal*.
- 24.** Central Statistics Office (Ireland). (2024). Goods exports and imports December 2023 [Comunicado estadístico, 15 de febrero].

- 25.** Cerna-Díaz, A. A., & Cerna-Vásquez, A. (2021). Análisis de rotura de dique durante el huracán Katrina 2005. *Anales Científicos*, 82(1), 130–140. <https://doi.org/10.21704/ac.v82i1.1756>
- 26.** Clemens, M. A., & Hunt, J. (2019). The labor market effects of refugee waves: Reconciling conflicting results. *ILR Review*, 72(4), 818–857. <https://doi.org/10.1177/0019793918824597>
- 27.** Collmann, J., Blake, J., Bridgeland, D., Kinne, L., Yossinger, N. S., Dillon, R., Martin, S., & Zou, K. (2016). Measuring the potential for mass displacement in menacing contexts. *Journal of Refugee Studies*, 29(3), 273–294. <https://doi.org/10.1093/jrs/few017>
- 28.** Connor, P. (2017, abril). Can Google Trends forecast forced migration flows? Perhaps, but under certain conditions [Working paper presentado en la reunión anual de la Population Association of America, Chicago].
- 29.** Darwich, G. (2014). Petróleo en Venezuela: experiencias del siglo XX. *Espacio Abierto*, 23(1), 107–127.
- 30.** Díaz Morillo, E. (2020). La emigración irlandesa decimonónica tras la gran hambruna, parte intrínseca del carácter irlandés. *Revista de Humanidades*, 41, 89–114. <https://doi.org/10.5944/RDH.41.2020.22918>
- 31.** Durán Vargas, L. R. (2010). Terremoto en Haití: las causas persistentes de un desastre que no ha terminado. *Nueva Sociedad*, 226, 13–19.
- 32.** Dushime, M., Manirafasha, E., & Mbonyinshuti, K. (2019). Aprendizaje conectado: la evaluación de los refugiados. *Revista Migraciones Forzadas*, 60, 67–68.
- 33.** Dustmann, C., Casanova, M., Fertig, M., Preston, I., & Schmidt, C. M. (2003). The impact of EU enlargement on migration flows (Home Office Online Report 25/03). Research Development and Statistics Directorate, Home Office.

- 34.** Education Cannot Wait. (2022). Achieving results: A new way of working. Strategic plan 2023–2026.
- 35.** Education Cannot Wait. (2024). Results against all odds: 2023 annual results report.
- 36.** Egea Jiménez, C., & Soledad Suescún, J. I. (2008). Migraciones y conflictos: El desplazamiento interno en Colombia. *Convergencia*, 15(47), 207–235.
- 37.** European Asylum Support Office (EASO). (2016). The push and pull factors of asylum-related migration: A literature review. EASO.
- 38.** European Asylum Support Office (EASO). (2017). Quantitative assessment of asylum-related migration: A survey of methodology. EASO.
- 39.** European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, & OECD. (2016). How are refugees faring on the labour market in Europe? A first evaluation based on the 2014 EU Labour Force Survey ad hoc module (Working Paper 1/2016). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2767/350756>
- 40.** European Parliament. (2021). The breach of the UN Convention on the Rights of the Child and the use of minors by the Moroccan authorities in the migratory crisis in Ceuta (Resolution of 10 June 2021, 2021/2747(RSP)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0299_EN.html
- 41.** Ewing, W. A., Martínez, D. E., & Rumbaut, R. G. (2015). The criminalization of immigration in the United States. American Immigration Council.
- 42.** García Gutiérrez, J. (2011). Construyendo una pedagogía de la solidaridad: La intervención educativa en situaciones de emergencia. *Revista Española de Pedagogía*, 69(250), 537–551.

- 43.** García Rivero, C. (2006). Oposición política y elecciones en África: Liberia ante la historia. *Política Exterior*, 20(109), 45–49.
- 44.** Gastón-Guiu, S., Treviño, R., & Domingo, A. (2021). La brecha africana: desigualdad laboral de la inmigración marroquí y subsahariana en España, 2000–2018. *Migraciones*, 52, 177–220. <https://doi.org/10.14422/mig.i52.y2021.007>
- 45.** GED Testing Service. (2022). GED test technical manual (Updated 2022 edition).
- 46.** Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. (2023, 2 de mayo). RULAC classifies a new non-international armed conflict in Sudan. <https://archives.geneva-academy.ch/news/detail/622-rulac-classifies-a-new-non-international-armed-conflict-in-sudan.html>
- 47.** González Hernández, L., & Cabrera Torrealba, Y. (2017). La educación en situaciones de emergencia [Trabajo de grado, Grado en Pedagogía]. Universidad de La Laguna, Facultad de Educación.
- 48.** Goto, K., Ikehara, K., Goff, J., Chagué-Goff, C., & Jaffe, B. (2014). The 2011 Tohoku-oki tsunami—Three years on. *Marine Geology*, 358, 2–11. <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2014.08.008>
- 49.** Goto, K., Ishizawa, T., Ebina, Y., Imamura, F., Sato, S., & Udo, K. (2021). Ten years after the 2011 Tohoku-oki earthquake and tsunami: Geological and environmental effects and implications for disaster policy changes. *Earth-Science Reviews*, 212, 103417. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103417>
- 50.** Government Office for Science. (2011). Migration and global environmental change: Future challenges and opportunities (Final Project Report, BIS/11/1116). Government Office for Science.

- 51.** Gutiérrez Rubio, I. B. (2017). Educación en los campamentos de refugiados [Trabajo de grado]. Universidad Pedagógica Nacional.
- 52.** Hatton, T. J. (2004). Seeking asylum in Europe. *Economic Policy*, 19(38), 6–62. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2004.00118.x>
- 53.** Hauber-Özer, M. (2019). Brechas de escolarización de los refugiados sirios en Turquía. *Revista Migraciones Forzadas*, 60, 50–52.
- 54.** Haut-Commissariat au Plan. (2021). La situation du marché du travail en 2020. https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-en-2020_a2650.html
- 55.** IMD World Competitiveness Center. (2023). IMD World Competitiveness Booklet 2023. International Institute for Management Development.
- 56.** Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2015). Reference module for cluster coordination at country level (Revised July 2015).
- 57.** Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). (2021). Global Report on Internal Displacement 2021. IDMC.
- 58.** Jauer, J., Liebig, T., Martin, J. P., & Puhani, P. A. (2014). Migration as an adjustment mechanism in the crisis? A comparison of Europe and the United States. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 155. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5jzb8p51gvhl-en>
- 59.** Jean, S., & Jimenez, M. (2007). The unemployment impact of immigration in OECD countries. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 563. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/162425722235>
- 60.** Kakule Kamabu, J.-C. (2017). El derecho a la educación de las personas desplazadas internamente en el este de la República Democrática del

Congo: El rol de la cooperación al desarrollo [Trabajo Fin de Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo]. Universidad Pontificia Comillas.

- 61.** Kayaoglu, A. (2022). Do refugees cause crime? *World Development*, 154, 105858. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105858>
- 62.** Khaddour, F. (2019). El desarrollo de la primera infancia y el apoyo psicológico en Siria. *Revista Migraciones Forzadas*, 60, 8–10.
- 63.** Lalama Franco, R., & Bravo Lalama, A. (2019). América Latina y los objetivos de desarrollo sostenible: Análisis de su viabilidad. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(Número Especial 1), 12–24. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29591>
- 64.** Legrain, P. (2016). Refugees work: A humanitarian investment that yields economic dividends. Tent Partnership for Refugees & Open Political Economy Network.
- 65.** Liebig, T., & Mo, J. (2013). The fiscal impact of immigration in OECD countries. En *International Migration Outlook 2013*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-6-en
- 66.** López Olvera, M. A. (2010). Garantías en los estados de emergencia. *Foro: Revista de Derecho*, 13, 77–96.
- 67.** Mansilla, E. (2006). Katrina, Stan y Wilma: tres desastres en busca de un paradigma. *Nueva Sociedad*, 201, 11–19.
- 68.** Médecins Sans Frontières. (2024). International activity report 2023.
- 69.** Molero-Aranda, T., Lázaro-Cantabrana, J. L., & Gisbert Cervera, M. (2022). Una solución tecnológica para personas con discapacidad intelectual en situaciones de emergencia. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 20(2), 65–83. <https://doi.org/10.15366/reice2022.20.2.004>

- 70.** Moya, R. (2009). La interculturalidad para todos en América Latina. En L. E. López (Ed.), *Interculturalidad, educación y ciudadanía: Perspectivas latinoamericanas* (pp. 21–56). FUNPROEIB Andes / Plural Editores.
- 71.** Neubauer Esteban, A. (2020). El derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo desde el enfoque basado en los derechos humanos: dificultades, finalidad e intervención educativa. *Revista Española de Educación Comparada*, 35, 70–91. <https://doi.org/10.5944/reec.35.2020.24342>
- 72.** Norwegian Refugee Council. (2024). NRC annual report from the Board 2023.
- 73.** OECD. (2007). *Jobs for immigrants (Vol. 1): Labour market integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264033603-en>
- 74.** OECD. (2008). *Jobs for immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264055605-en>
- 75.** OECD. (2010). *Equal opportunities? The labour market integration of the children of immigrants*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264086395-en>
- 76.** OECD. (2012a). *Jobs for immigrants (Vol. 3): Labour market integration in Austria, Norway and Switzerland*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264167537-en>
- 77.** OECD. (2012b). *Renewing the skills of ageing workforces: The role of migration*. En *International Migration Outlook 2012*. OECD Publishing.
- 78.** OECD. (2012c). *Untapped skills: Realising the potential of immigrant students*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264172470-en>

- 79.** OECD. (2014a). How can migrants' skills be put to use? Migration Policy Debates, No. 3.
- 80.** OECD. (2014b). Jobs for immigrants (Vol. 4): Labour market integration in Italy. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264214712-en>
- 81.** OECD. (2014c). Labour market integration of immigrants and their children: Developing, activating and using skills. En International Migration Outlook 2014. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2014-5-en
- 82.** OECD. (2015a). Can the performance gap between immigrant and non-immigrant students be closed? PISA in Focus, No. 53. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5jrxqs8mv327-en>
- 83.** OECD. (2015b). Connecting with emigrants: A global profile of diasporas 2015. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264239845-en>
- 84.** OECD. (2015c). International Migration Outlook 2015. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2015-en
- 85.** OECD. (2016a). Making integration work: Refugees and others in need of protection. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264251236-en>
- 86.** OECD. (2016b). Working together: Skills and labour market integration of immigrants and their children in Sweden. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264257382-en>
- 87.** OECD & European Commission. (2023). Indicators of Immigrant Integration 2023: Settling In. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1d5020a6-en>

- 88.** OECD & European Union. (2015). Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264234024-en>
- 89.** OECD, Inter-American Development Bank, & Organisation of American States. (2015). International migration in the Americas: Third report of the Continuous Reporting System on International Migration in the Americas (SICREMI) 2015. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e5d3aa63-en>
- 90.** OECD, UNHCR, & Inter-American Development Bank. (2024). What do we know about the socio-economic integration of forcibly-displaced populations in Latin America and the Caribbean? OECD Migration Data Brief, No. 11.
- 91.** Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2012). IOM migration crisis operational framework (MC/2355).
- 92.** Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2018a). La OIM lanza Plan de Acción Regional para fortalecer la respuesta a los flujos de venezolanos en las Américas y en el Caribe [Comunicado de prensa, 10 de abril].
- 93.** Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2018b). Tendencias migratorias nacionales en América del Sur: República Bolivariana de Venezuela. Oficina Regional para América del Sur.
- 94.** Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2022). Addressing the mobility dimensions of crises: IOM migration crisis operational framework — 2021 addendum (S/30/INF/1).
- 95.** Oteiza, E. (1985). Examen retrospectivo de una experiencia latinoamericana de educación para refugiados: El programa de CLACSO para estudiantes, investigadores y profesores de ciencias sociales víctimas de la represión después del golpe militar en 1973 en Chile [Ponencia].

Seminario sobre Educación para Refugiados, Dartington, Inglaterra. CLACSO.

- 96.** Papadopoulos, N., & Price, G. (2010). Education Cluster Coordinator Handbook. Global Education Cluster.
- 97.** Parliament of the United Kingdom. (2022). Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022 (c. 45).
- 98.** Paz Figueras, M. de. (2024). La cooperación internacional al desarrollo en Haití: ¿Ha contribuido la comunidad internacional al fracaso de Haití como Estado de Derecho? [Trabajo Fin de Grado]. Universidad Pontificia Comillas.
- 99.** Pérez Sánchez, L. (2023). El ACNUR y la educación de los refugiados [Trabajo Fin de Grado en Derecho]. Universidad de Valladolid.
- 100.** Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2010). Normas mínimas para la educación: Preparación, respuesta, recuperación. INEE.
- 101.** Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2024). INEE 2023 annual report.
- 102.** Requena, P. (2018). Liberia, segundo tiempo. *Política Exterior*, 32(182), 126–134.
- 103.** Robayo Rodríguez, D. (2023). El genocidio de Ruanda, 1994 [Trabajo Fin de Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos]. Universidad de Valladolid.
- 104.** Rodríguez, J., De La Torre, A., & Miranda, C. T. (2002). La salud mental en situaciones de conflicto armado. *Biomédica*, 22(Supl. 2), 337–346. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v22iSupp2.1183>

- 105.** Rodríguez Ruiz, C. (2017). Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Ediciones Paraninfo.
- 106.** Rodríguez Vázquez, D. (2017). El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que influyeron en el conflicto. *bie3: Boletín IEEE*, 6, 704–722.
- 107.** San Pedro Veledo, M. B. (2019). Efectos de un programa para reforzar la tolerancia hacia los refugiados a través de la empatía histórica: aplicación con docentes de Educación Primaria en formación [Tesis doctoral]. Universidad de Jaén.
- 108.** Save the Children International. (2016). Every last child: The children the world chooses to forget.
- 109.** Schwab, K. (Ed.). (2018). The global competitiveness report 2018. World Economic Forum.
- 110.** Schwab, K. (Ed.). (2019). The global competitiveness report 2019. World Economic Forum.
- 111.** Storoszczuk Durán, M. (2021). Política económica y educativa: El Estado presente en la educación. Montevideo, Uruguay.
- 112.** Storoszczuk Durán, M. (2023). Educar en la Era Digital.
- 113.** Storoszczuk Durán, M. (2024). Sobre propuestas educativas de modernización y orientación vocacional. *The Orvium Education Journal*.
- 114.** Sugawara, D. (2021). Numerical modeling of tsunami: Advances and future challenges after the 2011 Tohoku earthquake and tsunami. *Earth-Science Reviews*, 214, 103498. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103498>
- 115.** The Fund for Peace. (2023). Fragile states index annual report 2023.

- 116.** Transparency International. (2024). Corruption perceptions index 2023.
- 117.** U.S. Geological Survey. (2011). M 9.1—2011 Great Tohoku earthquake, Japan. Earthquake Hazards Program. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20110311054624120_30/executive
- 118.** UNHCR. (2017). UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2018. United Nations High Commissioner for Refugees.
- 119.** UNHCR. (2023). UNHCR policy on emergency preparedness and response (UNHCR/HCP/2023/01).
- 120.** UNHCR. (2024). Global trends: Forced displacement in 2023.
- 121.** UNICEF. (2010a). Advocacy toolkit: A guide to influencing decisions that improve children's lives.
- 122.** UNICEF. (2010b). Educación en situaciones de emergencia y desastres: Guía de preparativos para el sector educación.
- 123.** UNICEF. (2019). Every Child Learns: UNICEF Education Strategy 2019–2030. Data and Analytics. United Nations Children's Fund.
- 124.** United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock. Reimagining cooperation in a polarized world.
- 125.** United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2018). United Nations disaster assessment and coordination field handbook (7th ed.).
- 126.** United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2022a). CERF handbook (September 2022).

- 127.**United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2022b). Country-based pooled funds: Global guidelines (December 2022).
- 128.**United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2023). Global humanitarian overview 2024.
- 129.**United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2024). Global humanitarian overview 2024: September update (snapshot as of 30 September 2024).
- 130.**United Nations Sustainable Development Group (UNSDG). (2020). Guidance note for UN country teams: UN country-level pooled funds: A financing instrument to invest in the UN Sustainable Development Cooperation Frameworks.
- 131.**Uriarte Arciniega, J. de D. (2010). La resiliencia comunitaria en situaciones catastróficas y de emergencia. *International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología*, 1(1), 687–693.
- 132.**Vázquez Rodríguez, G. (2015). La invasión de Polonia, 1939. *ArtyHum: Revista de Artes y Humanidades*, 18, 81–91.
- 133.**Zavodny, M. (2011). Immigration and American jobs. American Enterprise Institute for Public Policy Research & Partnership for a New American Economy.